

IMAGEN^{de la} JUSTICIA



**Independencia y asociacionismo
en el sector judicial nicaragüense**

453

3

U

(444)

Manuel Aráuz Ulloa
Ma. Asunción Moreno

IMAGEN^{de} la JUSTICIA^{de}

Independencia y asociacionismo
en el sector judicial nicaragüense

Manuel Araúz Ulloa
Ma. Asunción Moreno

UCA

BIBLIOTECA

R:200260444 31/01/02
c2

La edición de este libro es posible gracias al apoyo financiero del Programa de Dinamarca Pro Derechos Humanos para Centroamérica PRODECA, a través del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP-Oficina Regional para Centroamérica, 5ª. Calle 0-43 zona 1, Apdo. 1. Tel. (502) 2536751, Ciudad de Guatemala.

Portada y diagramación: Alberto Martínez Calvo
Edición de gráficos: Evess Ruiz García.

Derechos reservados: Se permite, previa autorización de los autores, la reproducción total o parcial de este trabajo, siempre que, además, se cite la fuente.

Impresión: Imprenta UCA
Managua, Nicaragua.
2001.

564 (U)

Ingresa	31-01-02
Comunicado a	
Revisado por	Gen
Pronto	Reg 200060444

"Lo grave no sería nunca un Gobierno de los jueces, sino una justicia de los políticos. Pues el peligro, el verdadero peligro, está en que, bajo la toga del Magistrado, se oculte un político que utilice la Administración de Justicia para hacer política"¹.

¹ González Pérez, *Manual de Derecho procesal Administrativo*, 2ª ed. Civitas, 1992, pág. 235-236.

INDICE

INTRODUCCION /7

I. CONTEXTO POLITICO

- a) *Proceso de democratización /15*
- b) *Reforma del sistema de justicia /17*
- c) *Avance actual de ambos procesos /19*

II. INDEPENDENCIA Y JUEZ

- a) *Modelo constitucional del derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial /26*
 - a.1. Normativa nacional /27
 - a.1.1. Constitución Política
 - a.1.2. Desarrollo legislativo sobre independencia judicial
 - 1. Ley N° 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial"
 - 2. Decreto N° 63-99 "Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial"
 - a.2. Instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Nicaragua /31

III. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE JUSTICIA

- a) *Jerarquización de la justicia y sus modalidades /37* *Division de funciones administrativas y jurisdiccionales/38*
 - b.1. Órganos que ejercen funciones jurisdiccionales
 - b.2. Órganos que ejercen funciones administrativas
- c) *Principios que rigen el sistema judicial /44*
 - c.1. La inamovilidad de jueces y magistrados
 - c.2. Independencia judicial
 - c.3. Modos de selección (por antecedentes, antecedentes y concurso público, autoridad nominadora)
 - c.4. Horizontalidad
 - c.5. Imparcialidad
 - c.6. Autonomía
 - c.7. Objetividad

a.2. De los requisitos legales para constituir una asociación

b) Asociaciones existentes en el país (con personalidad jurídica y asociaciones de hecho) /84

c) Descripción de las asociaciones existentes /85

c.1. Principios y fines de la asociación

c.2. Cantidad de asociados

c.3. Forma de participación de los asociados

c.4. Forma de integración de la Junta Directiva o similar

c.5. Relación entre los diferentes órganos de las asociaciones

c.6. Tiempo de existencia

c.7. Modo de financiamiento

c.8. Desarrollo de la Asamblea

d) Intentos recientes de asociacionismo /92

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES /95

VII. BIBLIOGRAFIA /99

ANEXOS 107

INTRODUCCIÓN

Interpelaciones al sistema judicial

-Su independencia y la construcción de poder en el Poder Judicial-

Alberto M. Binder*

El sistema judicial forma parte del gobierno de la sociedad. Y las instituciones judiciales no sólo no están preparadas para asumir esas tareas, sino que ni siquiera perciben el problema con profundidad.

Las líneas de continuidad con el viejo molde colonial de tipo inquisitivo no existen sólo en la justicia penal –como muchas veces se ha sostenido– sino que conforman un modelo judicial completo, con repercusiones directas en todos los rincones del sistema. Sin embargo, el ámbito donde esas líneas de continuidad están más marcadas –y pese a ello este hecho no ha sido destacado con frecuencia– es en el modelo de organización judicial que a su vez ha impuesto su impronta en la totalidad del sistema judicial.

La aparición del modelo inquisitivo junto con el Estado moderno trajo aparejado un nuevo tipo de estructura judicial, marcado a fuego por el carácter exclusivo del ejercicio de la jurisdicción en manos del monarca absoluto. Como éste no podía ejercer en todos los casos ese poder pero, a la vez, era necesario señalar con fuerza esta concentración –particularmente como un mensaje dirigido a los antiguos señores feudales, acostumbrados a usar y abusar de las facultades jurisdiccionales–; de allí que los reyes utilizaran directamente ese poder a favor de los aldeanos– fue necesario crear una nueva forma de burocracia judicial, pensada desde ese punto de concentración, con capacidad para potenciarlo, pero sin la posibilidad de competir con él.

* Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

De este modo, se organizó una estructura piramidal en cuyo vértice estaba el rey y, luego, se conformaron sucesivos escalones de funcionarios que reciben el poder de jurisdicción por delegación del monarca y lo ejercían en su nombre. Todos ellos dependían de ese vértice, que puede saltar esos escalones y recuperar a su voluntad el poder antes delegado. Sin embargo, según el régimen normal, cada escalón de la pirámide repetía el esquema de delegación y recuperación con el interior.

Retomando los problemas que presentan las instituciones judiciales contemporáneas, la principal manera de evaluar la bondad de una organización judicial consiste en medir sus efectos sobre la función concreta de cada uno de los jueces: observar si ella es un elemento de fortaleza para ese funcionario o, al contrario, un mecanismo de control que le quita margen de maniobra y lo sume en nuevas formas de dependencia o potencia las que provienen del exterior.

En este tema han existido confusiones conceptuales de graves efectos sobre la realidad. Así, se suele hablar de independencia judicial como si se tratara primordialmente de la autonomía de la organización general que agrupa a los jueces, en desmedro de la independencia del funcionario particular, con nombre y apellido, como una garantía del ciudadano para asegurar la imparcialidad necesaria para la resolución del caso. Esta confusión –que todavía está extendida– ha llevado, por ejemplo, a que los Tribunales Superiores se preocupen por fortalecer la independencia de la organización, pero luego ejerzan hacia el interior una política de control que vuelve a los jueces altamente dependientes.

Es necesario, a nuestro juicio, volver al concepto clásico de independencia judicial que sólo hace referencia al conjunto de mecanismos que aseguran la imparcialidad del juez concreto, de carne y hueso. Esta independencia tiene tres dimensiones: una externa, que señala el hecho de que los jueces no pueden recibir órdenes o indicaciones de ningún otro sector del Estado; otra interna, que indica que tampoco pueden recibir esas indicaciones de otros jue-

ces de su propia organización, salvo cuando se trata de cuestiones que se ventilan a través de los recursos previstos en los sistemas procesales o de normas prácticas vinculadas a la administración de los recursos (por ejemplo, horarios de los empleados, etc.); y, por último, una independencia organizacional que debe asegurar al juez libertad frente a las grandes oficinas burocráticas de la organización judicial (administración, tesorería, etc.), así como respecto de la oficina concreta que le da apoyo administrativo (delegación de funciones, etc.). Vemos, pues, que el concepto de independencia judicial sólo hace referencia al conjunto de mecanismos que protegen al juez concreto, no para darle una situación de privilegio sino para asegurar la imparcialidad que necesitan los ciudadanos.

La llamada independencia de la organización está al exclusivo servicio del verdadero principio de independencia que tiene esa dimensión personal. Se trata de evitar que, a través de la dependencia de la organización, se trasladen presiones a los jueces. Hoy, sin embargo, la situación se ha vuelto más compleja porque son los Tribunales Superiores y las estructuras burocráticas ligadas a ellos quienes ejercen mayor presión sobre el juez particular. Incluso no siempre porque aquellos reciban a su vez presiones de otros sectores, sino porque su nombramiento ha sido el fruto de pactos políticos de alto nivel y forman parte de una política general, que luego algunos miembros de esos Tribunales o sus Presidentes ejecutan con convicción y no con sumisión.

Tal como están estructuradas hoy en día las organizaciones judiciales, ellas son el mayor peligro para la independencia judicial, ya que fueron pensadas históricamente para funcionar con jueces que no fueran independientes sino engranajes de una gran maquinaria al servicio del poder centralizado. Mientras no se asuman como un tema central del proceso de reforma la modificación estructural de ese tipo de organizaciones –y ello no ha ocurrido hasta el momento– la función del juez estará amenazada y la imparcialidad (constitutiva de la figura del juez) sospechada.

Incluso en el plano conceptual es necesario hacer cambios. El uso

de una misma voz ("independencia judicial") para referirse a dos realidades tan distintas que, incluso, pueden ser contradictorias entre sí es, por lo menos contraproducentes. Por ello se debe reservar el nombre de "independencia judicial" para denotar su sentido clásico vinculado al juez. Para referirse a la situación de las organizaciones judiciales en su conjunto es preferible utilizar el concepto de autonomía o inventar algún otro que señale con claridad su auto-regulación, pero también su función de servicio y soporte a la independencia judicial.

La reforma judicial ha tocado este punto. Lo ha hecho desde diversos ángulos; algunas veces desde propuestas generales de cambio; otras, desde el punto de vista más amplio de la independencia judicial y, mucho más directamente, a través de la nueva justicia constitucional.

Sin embargo, todavía no se ha conformado una perspectiva general. En realidad, la cuestión que subyace es el problema del poder. La pregunta por el poder de los jueces y funcionarios judiciales no ha pasado de una cierta visión ingenua, que supone que el poder les viene directamente de la ley.

Cabría preguntarse si la situación no es justamente la contraria; el poder de los jueces y funcionarios judiciales es uno de los factores que intervienen la construcción política de la fuerza normativa. Una visión de este tipo abre nuevas e interesantes perspectivas ya que en nuestras sociedades no está claro cómo se construyen instituciones judiciales poderosas.

Por ello, frente a las viejas estrategias "peticionarias" que han llevado al sistema judicial a reclamar permanentemente que le "entreguen" poder (respeto, obediencia, consideración, confianza, etc.) bajo el modelo histórico del "poder delegado" que ha sido la cláusula básica de la sumisión del sistema judicial, es necesario crear nuevas estrategias de "construcción del poder".

Ello plantea un problema complejo, que requerirá diseñar múltiples acciones de cambio y asumir el costo de confrontaciones que

no siempre los procesos de reforma judicial han querido asumir como inevitables y condición necesaria del cambio. Entre estas acciones, la defensa activa y fuerte de la constitución aparece hasta ahora como el único camino que ha mostrado avances, incluso cuando esos avances parecen retrocesos, ya que han implicado que esos tribunales o algunos de sus jueces fueran silenciados. Es un deber del proceso de cambio intensificar estas estrategias y no ceder frente a quienes reclaman "prudencia", justamente cuando se comienzan a vislumbrar avances.

Llevar el problema del "poder" al centro de las consideraciones de la reforma judicial no significa necesariamente optar por éste o aquél curso de acción. Ese nivel de opciones está influido por innumerables circunstancias propias de cada proceso. Pero significa, sin duda, proyectar cada acción de reforma judicial en el horizonte general de la construcción de poder para el sistema judicial porque eso supone construir poder para la ley, es decir, que ella impere.

Sin embargo, poner el tema del poder en el centro de la consideración estratégica o en la base de la planificación de las acciones no es suficiente. Es necesario, además, que el proceso de reforma judicial propicie el desarrollo de una reflexión teórica sobre los sistemas judiciales capaz de incorporar el tema del poder de un modo más directo y renovado.

Ya sea desde la teoría política —que no ha prestado suficiente atención al problema judicial—, la teoría sociológica —que no ha atendido preferentemente el aspecto institucional de la resolución de conflictos—, así como desde otras vertientes teóricas —teoría constitucional, antropología política, filosofía del derecho, etc.—, es necesario aunar esfuerzos para elaborar conceptos e ideas que nutran el debate y la práctica real de fortalecimiento del sistema judicial.

Este problema no se da únicamente en este nivel teórico; tampoco existen instrumentos claros para que en los sistemas judiciales la dimensión política adquiera cotidianeidad y resulte asequible a

los operadores judiciales. Las reflexiones que han existido quedaron atrapadas en temas tales como las funciones ideológicas del sistema judicial, o la ideología de los jueces, o una visión simplista y declamativa de la división de poderes, o una conceptualización técnica de la jurisdicción. Sin embargo no se ha construido aún un *lenguaje de gobierno* para el sistema judicial, que ya contenga, con la fuerza que incorpora el uso cotidiano de las palabras, la idea de poder. Los jueces saben hablar de trámites, de plazos, de requisitos legales o conceptos abstrusos que clasifican las resoluciones, las notificaciones, las cédulas o cualquier otra cuestión menor. Pero no saben hablar del poder de los jueces, sin sentir que lo hacen con un lenguaje que les es extraño, que no les pertenece y les han prestado por un tiempo. Urge dotar de ese lenguaje a los funcionarios del sistema judicial.

Una visión despolitizada de las normas, producto de una exégesis mediocre y rutinaria, antes que de concepciones positivistas, como se ha pretendido achacar, completa el cuadro de despolitización del sistema judicial. Un poder sin poder, sin conciencia del poder y sin lenguaje de gobierno. Sordo, mudo y ciego. Sin embargo, las omisiones del sistema judicial, sus complicidades y adhesiones con la pura fuerza han dejado una huella profunda en el desarrollo institucional de América Latina y el Caribe y esos signos marcados hacen que todavía muchos, si no todos, estén buscando a los jueces que ayuden a gobernar a nuestras sociedades.

CONTEXTO POLITICO

a) *Proceso de democratización*

El proceso de democratización política que ha vivido Nicaragua a partir de 1990 a través de lo que se denominó la celebración de las primeras elecciones libres de su historia, ha traído cambios fundamentales no solo en relación con la cultura política nicaragüense, sino también importantes transformaciones y esfuerzos en el proceso de democratización e institucionalización de los poderes públicos.

El fortalecimiento, democratización y despartidarización de instituciones como la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua¹, no era más que una muestra del camino que deberían seguir las demás instituciones y ministerios de Estado, sobre todo en poderes tan importantes como el Legislativo, Judicial y Electoral. El proceso de fortalecimiento que debían alcanzar todos los poderes del Estado tenía como contrapunto la necesidad de potenciar la intervención y profesionalización de los entes encargados de fiscalizar y juzgar el buen desempeño de los funcionarios públicos, juega aquí un papel muy importante la Contraloría General de la República y el Poder Judicial que son los que, en los últimos años, han servido de termómetro indicador de los avances y retrocesos en este proceso de democratización y fortalecimiento, lo acertado o desacertado de sus decisiones así como el fundamento jurídico o político de las mismas es lo que, a la vista de la comunidad internacional y de los propios ciudadanos, marca la pauta de los avances alcanzados en este proceso de democratización irreversible.

La transición nicaragüense debía, como en su momento señaló el Representante de Naciones Unidas en Nicaragua, arrumbar hacia la reconciliación nacional, la creación de un verdadero Estado de Derecho y el fortalecimiento de la justicia²; así, el Poder Judicial como garante del Estado de Derecho debía asumir el rol

¹ Así expresamente David R. Dye, *Relatos de Democracia*, 2000, pág. 5.

² Véase el discurso del Sr. Francesco Vincenti, *Revista Jurídica* N.º 37, 1996, pág. 8.

protagónico que le corresponde en la consolidación de la democracia⁴ haciéndola trascender más allá de los símbolos electorales, protegiendo los derechos individuales, garantizando la seguridad jurídica; en definitiva, llenándola de justicia⁵.

A pesar de que ya ha transcurrido una década de la celebración de las primeras elecciones libres y de que acabamos de experimentar un tercer ejercicio igual de satisfactorio, el ideal plasmado en el párrafo anterior no se ha podido materializar, pues la situación concreta de la Nicaragua de hoy es un caminar tortuoso hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Una radiografía precisa de la Nicaragua política es la que, con la facilidad de aquellos que una vez han vivido la democracia, nos traslada el periodista David R. Dye, cuando señala que durante gran parte de la última centuria, los líderes políticos nicaraguenses han visto en el gobierno una fuente de enriquecimiento, un espacio desde el cual poder beneficiar a sus amigos y construir imperios políticos, un gran sistema de corrupción que necesita de los legisladores y los jueces para garantizar la impunidad de aquellos para los que todo tiene un precio⁶.

En el ámbito del Poder Judicial las palabras de Dye cobran sentido cuando observamos una Corte Suprema de Justicia totalmente politizada, magistrados que se acusan recíprocamente de responder más que al principio de justicia a los intereses del partido al que pertenecen o, incluso, de responder a los intereses de una sola persona⁷, no en vano algunos han manifestado que el sistema judicial nicaraguense "es la institución más débil y más corrupta del país"⁸, sin que falten quienes otorgan ese calificativo a otros

⁴ Julio Ramón García Vilechez, *Revista Justicia* N.º 7/1997, pag. 14.

⁵ En este sentido, David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, pág. 1.

⁶ David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 1.

⁷ Sobre los favores personales del Presidente Alemán a algunos magistrados de la CSJ, véase, David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 15.

⁸ David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 24.

poderes del Estado". De cualquier manera, a pesar de que la situación actual evidenciar la fragilidad de las instituciones, no creemos que esa realidad deba conducirnos por el camino de la desesperanza, todo lo contrario, hoy más que nunca es imperativo insistir en la consolidación de esas instituciones.

b) Reforma del sistema de justicia

Uno de los puntos esenciales para el fortalecimiento de la institucionalidad de los poderes del Estado fue el identificar la necesidad de producir cambios profundos en el Sistema de Justicia¹⁰, aglutinando así los mecanismos de control y aseguramiento de que en Nicaragua existe un verdadero sistema de pesos y contrapesos que limitan los abusos de un poder del Estado sobre otro. Este proceso de cambio iniciado en la primera mitad de los años 90 partía de la necesidad de invertir en el capital humano y en las condiciones materiales en la que los jueces y magistrados desarrollaban la dura tarea de administrar justicia. Así, por una parte insistió en la idea de "llevar al Poder Judicial a su máximo grado de profesionalismo"¹¹ sustituyendo jueces legos por profesionales del Derecho¹², y aunque no constituía la meta primordial esta necesidad permitió el aprovechamiento del enorme potencial que los jóvenes egresados de las universidades del país podrían aportar¹³, sin perder de vista la necesidad de capacitación de los funcionarios existentes, proceso este en el que la Es-

¹⁰ Según un sondeo realizado entre el 13 de mayo y 2 de junio del año 2000 por la firma M & R Consultores, el Poder Ejecutivo es la institución más corrupta, seguida por los partidos políticos y la Asamblea Nacional. Cfr. La Prensa de 16 de junio 2000.

¹¹ Según una consulta realizada por CUNIPES los "nicaragüenses piden justicia y empleo". La Prensa, edición de 16 de agosto del 2001, pág. 7 A.

¹² Así, las palabras de la Magistrada Dra. Alba Luz Ramos Varegas en Revista Justicia N. 27/1996, pág. 18.

¹³ Un dato representativo es que en el año de 1990 sólo el 10 % de los jueces locales y el 70 % de los jueces de distrito eran abogados. Cfr. Revista Justicia N. 5/1996, pág. 10.

¹⁴ Así, en el discurso del entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia (1996) y ahora Magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia Dr. Orlando Trejos Semarriba, Revista Justicia N. 5/1996, pág. 11.

cuela Judicial ha venido desempeñando un trabajo muy significativo desde inicio de los años noventa.⁴

Por otra parte, con el auspicio de países donantes⁵, se echó a andar el Proyecto de Fortalecimiento y Dignificación del Poder Judicial, el cual estaba basado en un tipo de colaboración técnica distinta de la tradicional pues suponía la construcción de las denominadas Casas de Justicia en cada uno de los municipios del país y Complejos Judiciales en las cabeceras departamentales, principalmente, en las sedes de los tribunales de apelaciones, procesos que en la actualidad constituyen una tarea permanente y constante del Poder Judicial⁶.

En la segunda mitad de la década de los 90s el proceso de fortalecimiento e institucionalidad del Poder Judicial debía volver su mirada al aspecto normativo, era necesario proceder a la elaboración de los proyectos de reforma al Código de Instrucción Criminal (vigente desde 1879), Código Penal (1974), la elaboración de un Código de Ética Judicial que sirviera como paliativo de la corrupción en este poder del Estado⁷, la elaboración de la Ley de Carrera Judicial⁸, de una Ley de la Jurisdicción contenciosa Administrativa y de una Ley Orgánica del Poder Judicial que

⁴ Sobre ello, ampliamente, la entrevista del Dr. Joaquín Talavera, Director de la Escuela Judicial. *Revista Justicia* N. 47/1996, pag. 4 ss. También el discurso del Dr. Tejes Somarriba. *Revista Justicia* N. 57/1996, pag. 12.

⁵ El Proyecto de financiamiento con fondos del Gobierno de Suecia y Holanda a los que se le han sumado otros países de la Unión Europea, al respecto véase la *Revista Justicia* N. 57/1996, pag. 8. También David R. Day. *Retos de Democracia*, 2000, 25.

⁶ *Revista Justicia* N. 57/1996, pag. 12. Mas detalles en el apartado correspondiente a la identificación de las condiciones actuales del sistema de justicia.

⁷ Alfo Luz Ramos, en *Revista Justicia* N. 27/1995, pag. 18. También evidenciaba que otro mecanismo para evitar la corrupción en el Poder Judicial pasaba por el mejoramiento de las condiciones salariales a todos los niveles. En el mismo sentido, Luz Amparo Caldera, *Revista Justicia* N. 37/1995, pag. 5; Tejes Somarriba. *Revista Justicia* N. 57/1996, pag. 12.

⁸ Como señala la Dra. Ligia Molina, Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua (*Revista Justicia* N. 57/1996, pag. 31), el Poder Judicial debe asumir como un imperativo ineludible la aprobación de una ley que refleje "las necesidades más sentidas por los empleados

sustituyera a la entonces vigente Ley Orgánica de Tribunales de 1894¹⁹.

c) *Avance actual de ambos procesos*

Los avances en el proceso de democratización del país siguen siendo ténues, podría decirse, con toda seguridad, que la institucionalización de los poderes públicos ha experimentado un sensible retroceso si tomamos como punto de referencia el año 1995. La corrupción de los funcionarios sigue siendo la noticia de todos los días, especialmente en época electoral en donde los discursos electorales tienen como característica común la mención expresa del tema de la corrupción de los funcionarios del gobierno actual y de los gobiernos anteriores. hoy podemos escuchar la afirmación de que los actuales funcionarios son los más corruptos de la historia y mañana que lo fueron los que "prestaron su servicio" en la primera parte de la década de los noventa o los "servidores públicos" de la década de los ochenta, las opiniones son tan variadas como el abanico de soluciones que se ofrecen, pero la que más destaca es la de que, una vez alcanzado el poder político, se promoverán leyes que castiguen "duramente" a los funcionarios corruptos; afirmación que, además de incorrecta e irresponsable, es jurídicamente imposible²⁰. Como puede observarse esta promesa, contra legen, sólo pretende hacer creer a la ciudadanía (votante) lo afortunado que sería para el país elegir a una persona que ataque duramente nuestro principal problema.

y funcionarios del Poder Judicial, particularmente lo atinente a la responsabilidad en el cargo y a las remuneraciones e incentivos", pero además de ello, la ley debía definir las políticas de selección del recurso humano. Sobre la Carrera Judicial véase el apartado correspondiente infra.

¹⁹ En palabras de la Dra. Aída Luz Ramos, Magistrado de la CSJ, la Ley Orgánica de Tribunales era una ley que había tenido tantas reformas que ya no se sabía que parte de ella aún continuaba vigente. Cfr. *Revista Justicia* N.º 2/1995, pag. 19.

²⁰ En primer lugar, porque choca con uno de los principios básicos del Derecho penal y de cualquier Estado de Derecho, el de legalidad, que establece la imposibilidad de castigar hechos no previstos en la ley en el momento de su comisión (art. 34, 11 Cr); en segundo lugar, porque en este, y en todos los estados civilizados, la ley penal sólo se puede aplicar hacia el pasado (retroactivamente) cuando favorece al reo (art. 38 Cr) y nunca cuando le perjudica. De lo anterior se deduce que la

Por lo demás, a pocos días de haberse realizado las elecciones generales, la pobreza sigue prácticamente en los mismos niveles que hace diez años, el Estado sigue endeudado internacionalmente, aunque, producto de las condonaciones de gobiernos amigos, la deuda externa es menor a la de hace diez años, el Banco Central agota sus últimos recursos, el Poder Electoral, cuyos magistrados también responden a intereses de los partidos que los propusieron, sigue siendo cuestionado y, la Corte Suprema de Justicia se encuentra literalmente dividida. Como podemos observar Nicaragua no es más que una frágil democracia asentada sobre frágiles instituciones.

En lo que respecta, al proceso de capacitación e incorporación a la Judicatura de personas capacitadas para el ejercicio de tal función, hoy, en el año 2001, puede decirse con certeza que la totalidad de los jueces (locales y de distrito) de la República de Nicaragua son profesionales del Derecho. De igual manera desde el año 1990 se han construido 123 casas de justicia²¹, también se han construido, remodelado y modernizado una buena cantidad de complejos judiciales, existen pues las condiciones mínimas necesarias para que el pesado aparato judicial emprenda el camino del profesionalismo, la imparcialidad e institucionalidad.

En el aspecto normativo también se han producido avances dignos de destacar, del conjunto de leyes mencionadas la primera en aprobarse fue la Ley Orgánica del Poder Judicial²² a la que le ha seguido la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo²³. Por otra parte, el Proyecto de Reforma al Código Penal ya ha sido aprobado en lo General por la Asamblea

una forma de remover los dos obstáculos señalados, es no sólo reformar la Constitución Política, sino también denunciar [desconocer], todos los tratados internacionales señalados en el artículo 46 de la Carta magna, en definitiva, acabar con la idea del Estado de Derecho.

²¹ Cfr. David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000: 25.

²² Ley No 260, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N.º 137, de 23 julio 1998.

²³ Ley No 350, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N.º 140 y 141, de 25 y 26 de julio del año 2000.

Nacional, quedando pendiente su discusión en lo particular²⁴, mientras tanto, el Proyecto de Código Procesal Penal, que también ya ha sido aprobado en lo General, puede que en los próximos días -discutidos casi 300 artículos de los 426 que contiene- alcance su aprobación final.

Del Código de Ética Judicial no se ha vuelto a mencionar una palabra; con la Ley de Carrera Judicial prefirió utilizarse otro procedimiento, en vez de una ley autónoma se optó por establecer lo concerniente a la carrera judicial en un capítulo de la ya aprobada Ley Orgánica del Poder Judicial, dejando para una etapa posterior la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, cuyo borrador de Anteproyecto se encuentra en "discusión y análisis" en alguna dependencia de la Corte Suprema de Justicia, valga decir, durmiendo el sueño de los justos. Al respecto, ha sorprendido favorablemente la iniciativa de Ley de Carrera Judicial presentada recientemente ante la Asamblea Nacional²⁵.

²⁴ Es oportuno señalar que la Asamblea Nacional tiene ya aprobados en lo particular los primeros 21 artículos de este Proyecto, sin embargo, han pasado varios meses sin que éste vuelva a la agenda de la Junta Directiva de ese poder del Estado.

²⁵ A finales de octubre del 2001 ha aparecido un Anteproyecto de Carrera Judicial el cual analizaremos en el apartado respectivo de este trabajo.

INDEPENDENCIA Y JUEZ

La transformación y fortalecimiento de un sistema judicial democrático pasa necesariamente por el establecimiento de su imparcialidad e independencia en relación con los restantes poderes del Estado y cúpulas de poder existentes en nuestra sociedad, de ello resulta que ante un Poder Judicial dependiente y parcializado es imposible hablar de la existencia de un Estado de Derecho en Nicaragua²⁷. Así, por ejemplo, los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia todavía responden a intereses políticos²⁸ y muchas resoluciones de las distintas instancias del Poder Judicial revelan ese mismo interés al ser emitidas con celeridad y bajo interpretaciones legales "poco convincentes", de tal forma que, se ha normativizado la costumbre de que si el recurso presentado no tiene un interés político y partidario, el interesado debe prepararse para esperar varios años antes de que su caso sea resuelto²⁹.

Otro mecanismo que podría servir de termómetro para medir los avances en esta materia - y de ello trataremos con más detalle en la parte final de este trabajo- es la facilidad que dentro del propio Poder Judicial se otorgue a jueces y magistrados para hacer uso de su derecho de asociación pues, en palabras de Juan Manuel de Paul³⁰, "el asociacionismo judicial desempeña un papel fundamental como mecanismo de garantía de la independencia judicial

²⁷ Así, Luz Amparo Calderón en *La Revista Justicia* N. 2, 1995, pag. 5.

²⁸ David R. Das, *Fortalezas de Democracia*, 2000, pag. 24.

²⁹ Así, por ejemplo, ha sido evidente "el gran interés" en resolver el caso ENTIEL lo más rápido posible - los recursos de amparo esperan ser resueltos aunque se pueda esperar que se apliquen los preceptos de la LOBP para obtener quórum y dar respuesta a los ciudadanos que esperan una compensación de justicia rápida también para ellos. [La Prensa, "CSD da luz verde a centro de ENTIEL", edición de 19 de septiembre del 2001; La Prensa, "Polémica por resolución de la Corte en caso ENTIEL", edición de 20 de septiembre del 2001; La Prensa, "Contrarrevista en la Corte por resolución de ENTIEL", edición de 21 de septiembre del 2001; La Prensa, "ENTIEL acusa a magistrados", edición de 27 de septiembre del 2001; La Prensa, "Magistrados demandan en presunta persecución", edición de 28 de septiembre del 2001]. En la misma línea, se denuncia el engravetamiento de 100 recursos de inconstitucionalidad, véase La Prensa, "Corte engaveta 100 recursos", edición del 19 de mayo del 2000, pag. principal; "Corte Suprema viola la Constitución", edición de 20 de mayo del 2000, pag. 6 A; "Corte se compromete a desengavetar recursos", edición de 26 de mayo del 2000.

³⁰ Para el año 1985 fungió como Presidente de la asociación española "Jueces Para la Democracia". Cf. *Revista Justicia* N. 2, 1995, pag. 5.

externa e interna"¹⁰. Los intentos de asociación de jueces realizados en el Poder Judicial nicaragüense son un fiel reflejo de que en la actualidad el asociacionismo judicial todavía constituye una tarea pendiente y difícil de ejecutar en las condiciones actuales, podríamos decir incluso, y así puede constatarse en el apartado referido al asociacionismo judicial, que se ha producido un preocupante retroceso en esta materia.

a) Modelo constitucional del derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial

La Constitución Política de Nicaragua (1987) contiene una amplia regulación en materia de independencia de los poderes y, por ende, del Poder Judicial. No obstante, contrario a lo que sucede con las constituciones de la mayoría de los países democráticos, la Constitución nicaragüense ha sido objeto de constantes reformas parciales¹¹, reformas que han introducido cambios en el capítulo V relativo al "Poder Judicial", contenido en el título VIII sobre "La organización del Estado". Por ejemplo, la reforma constitucional de 1995 tenía como objetivo crear las condiciones para lograr mayor independencia judicial¹². Así pues, se amplió el mandato de los magistrados de la CSJ, además se redujo el poder del Presidente en la selección de sus miembros, a través de la posibilidad de que los diputados también puedan presentar sus

¹⁰ Véase el discurso pronunciado en ocasión del acto de constitución de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, *Revista Justicia* N° 27/1995, pag. 5.

¹¹ La Constitución Política de Nicaragua en un periodo de una década ha sido objeto de tres reformas parciales, a saber:

- Reforma constitucional para las elecciones del 25 de febrero de 1990, publicada en *La Gaceta, Diario Oficial*, N° 46 del 6 de marzo de 1990.
- Ley N° 192 "Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua" publicada en *La Gaceta, Diario Oficial*, N° 124 del 4 de julio de 1995. Véase también la Ley N° 199 "Ley marco de implementación de las reformas constitucionales", publicada en *La Gaceta, Diario Oficial*, N° 125 del 5 de julio de 1995.
- Ley N° 330 "Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua", de noviembre de 2000.

¹² Cfr. "Reforma constitucional y Poder Judicial", en *Revista Justicia* N° 14/1998.

a.1. Normativa nacional

a.1.1. Constitución Política

La independencia del Poder Judicial, es una de las bases del Estado de Derecho que se fundamenta en la división y equilibrio de los poderes contemplado en el texto constitucional¹³. Como se ha señalado anteriormente, en Nicaragua, la institucionalidad y el Estado de Derecho como modelo de Estado adoptado por la Constitución¹⁴ está en vías de formación en el marco de una cultura cívica incipiente, no exenta de dificultades¹⁵, que necesita la instauración de una cultura política democrática que trascienda la mera declaración formal¹⁶ y propicie la participación ciudadana y la concertación de la sociedad civil y el poder político para convergir en una plataforma básica que fortalezca la institucionalidad a través de la eficacia en la administración de justicia, la elección de funcionarios en virtud de su competencia y méritos profesionales, y un alto nivel de transparencia en la administración pública.

El derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial está consagrado en el texto constitucional como una garantía procesal en el artículo 34.2 que establece:

"Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciones, a las siguientes garantías mínimas:

¹³ Al respecto, el artículo 120 Cn dice: "Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial **son independientes entre sí y se coordinan armónicamente**, subordinados únicamente a los intereses superiores de la nación que ha establecido en la presente Constitución".

¹⁴ Así pues, el artículo 1 Cn establece: "Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa. Son órganos de gobierno el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral". De forma más específica el artículo 130 Cn dice: "La nación nicaragüense se constituye en un Estado social de Derecho. Nadque tenga conciencia a que la gente más humildes que los que se confieren la Constitución por las leyes".

¹⁵ En este sentido, véase: "Informe sobre el Desarrollo Humano en Nicaragua 2000" UNDP, Capítulo 9, pag. 125.

¹⁶ Tal es más se señala en el artículo 158 Cn: "La justicia emana del pueblo y se la proporciona en su nombre y delegación por el Poder Judicial, integrado por los tribunales de justicia que establece la ley".

2) *A ser juzgado sin dilaciones por tribunal competente establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie puede ser sustraído de juez competente ni llevado a jurisdicción de excepción (...)*

Además de la consignación formal que la Constitución establece con relación a la independencia entre los poderes (en el art. 129), el artículo 165, de forma específica, establece la independencia judicial cuando señala que:

"Los Magistrados y jueces, en su actividad judicial son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y a la ley; se regirán entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita".

a.1.2. Desarrollo legislativo sobre independencia judicial

1. Ley N.º 260 "Ley Orgánica del Poder Judicial"¹⁷

La regulación constitucional descrita anteriormente es reproducida y desarrollada por la Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁸ (LOPJ) que crea nuevas instituciones y órganos dentro del Poder Judicial entre las que cabe citar la Defensoría Pública, las comisiones de gobierno del Poder Judicial (Comisión de administración, régimen disciplinario y carrera judicial), la Oficina Central de notificaciones, la Oficina de distribución de causas, etc). En términos generales esta ley busca garantizar el pleno respeto de las garantías constitucionales, los principios de la aplicación de las leyes en la administración de justicia y la actividad, organización y funcionamiento del Poder Judicial.

¹⁷ Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N.º 137, de 23 julio 1998.

¹⁸ Esta ley deroga la «Ley Orgánica de Tribunales» de 19 de julio de 1894 y sus reformas, excepto las disposiciones contempladas en el título XVI, artículos 288 al 291, y en el Título XVIII, artículos 299 al 307 inclusive.

En lo que respecta a los principios rectores de la administración de justicia la Ley Orgánica del Poder Judicial¹⁹ reproduce literalmente en la mayoría de los casos lo establecido en la Constitución en su título I, capítulo único, compuesto de 21 artículos. Así, por ejemplo, el artículo 158 Cn encuentra su reflejo en los artículos 2, 6 y 194²⁰ relativos a la *legitimidad democrática*, el artículo 159 párr. 2^o Cn sobre el *principio de exclusividad* está contemplado en el artículo 3^o, la *supremacía constitucional* y la *sujección de los jueces a las disposiciones constitucionales* consignada en el artículo 182 Cn están contemplados en los artículos 4 y 5⁴¹; la *independencia interna y externa* contemplada en los artículos 129 y 165 Cn encuentran su correspondencia en

¹⁹ En este sentido, los comentarios a las normas y disposiciones generales de la LOPJ realizados por las magistradas Ligea Molina Argüello y Alba Luz Ramos Varela en: La Revista Justicia N.º 167/1998, pag. 39-49; N.º 17/1999, pag. 14-17, respectivamente.

²⁰ Artículos que literalmente señalan:

- Artículo 2: "La justicia emana del pueblo y es impartida en su nombre y designación de manera exclusiva por los Tribunales de Justicia del Poder Judicial".
- Artículo 6: "El Poder Judicial es independiente y se coordina armónicamente con los otros Poderes del Estado. Se subordina únicamente a los intereses supremos de la Nación de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política".
- Artículo 19: "Los Jueces y Magistrados son responsables de sus actuaciones disciplinaria, civil y penalmente. En ningún caso, la diferencia de criterio interpretativo, que no suponga violación a la Constitución y a la Ley, puede dar lugar a sanción alguna. Cualquier medida disciplinaria o sanción, debe ser impuesta al funcionario conforme a un debido proceso".

⁴¹ "[...] Las facultades jurisdiccionales de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde **exclusivamente** al Poder Judicial. Los tribunales militares sólo conocerán los delitos y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia".

⁴² El artículo 3 dice: "La función jurisdiccional es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos en esta ley. Exclusivamente corresponde al Poder Judicial la función de juzgar y ejecutar lo juzgado; así como conocer todas aquellos procedimientos no contenciosos en que la ley autoriza su intervención".

⁴³ Artículos que literalmente señalan:

- Artículo 4: "La Constitución Política es la norma suprema del ordenamiento jurídico y obliga a quienes administran justicia, los que deben aplicarla e interpretar las leyes, los tratados internacionales, reglamentos, decretos, disposiciones legales u otras fuentes del derecho según los preceptos y principios constitucionales".

los artículos 6 y 8⁴²; el artículo 12⁴³ de la Ley reproduce y desarrolla sin rebasar su contenido esencial *la obligatoriedad de acatar y ejecutar las resoluciones judiciales* establecido en el artículo 167 Cn. y el *principio de igualdad* postulado en el artículo 27 Cn tiene su correspondencia en el artículo 21 de la ley⁴⁴.

- Artículo 5: "Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su sentencia a que con norma de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En caso que una de las partes, haga alguna declaración o manifestación de una norma, la autoridad judicial debe pronunciarse necesariamente sobre el punto, aceptando o rechazando la proposición.
- Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelta un asunto con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la Autoridad Judicial en su caso, deberá repetir su resolución a la Corte Suprema de Justicia.
- Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, podrá o no declarar su inaplicabilidad para todos los casos, o para los de conformidad con la Ley de Amparo."

⁴² Artículos que literalmente serían:

- Sobre el contenido del artículo 6 véase nota N.º 40
- Artículo 8: "Los Magistrados y jueces, en su definición constitucional, son independientes en todas sus actuaciones y solo deben obedecer a la Constitución Política y la ley. No pueden los magistrados, jueces o tribunales, actuando individual o colectivamente, dictar instrucciones o formular recomendaciones dirigidas a sus inferiores acerca de la aplicación o interpretación del orden jurídico en asuntos sometidos a su conocimiento. Para los efectos de asegurar una Administración de Justicia pronta y cumplida, el Superior Jerárquico podrá dar instrucciones generales de carácter procedimental.
- Los magistrados o jueces que se vean inquietados o perturbados en su independencia, deben ponerlo en conocimiento de las autoridades previstas en la presente Ley."
- "El artículo 12 establece: "Las resoluciones judiciales son inapelables, cumplimentadas para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales o jurídicas. En ningún caso pueden suspensarse los efectos o anular los alcances del pronunciamiento, bajo las responsabilidades disciplinarias civiles o penales que la ley determine.
- En el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, todos las personas y entidades públicas o privadas, están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración efectiva que le sea requerida por los jueces o tribunales.
- Las autoridades judiciales pueden requerir el auxilio de la fuerza pública en el curso de los procesos y para el cumplimiento de sus sentencias o resoluciones, el que debe ser concedido de inmediato por la autoridad a quien se solicita, bajo pena de incumplimiento de las sanciones de ley."

⁴⁴ Artículo 21: "A través del Poder Judicial, el Estado de Nicaragua garantiza el libre e irrestricto acceso a los Juzgados y Tribunales de la República para todas las personas, en plano de absoluta igualdad ante la ley para el ejercicio del derecho procesal de acción y la concesión de la tutela judicial.

2. Decreto N° 63-99 "Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial"⁴⁷

Este reglamento desarrolla las normas jurídicas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a excepción de las de naturaleza funcional y organizativa del Poder Judicial.

a.2. Instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Nicaragua

El derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial también es un compromiso que Nicaragua ha asumido a través de la ratificación de distintos tratados internacionales, en los que asume su compromiso, entre los cuales podemos citar:

1. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
3. El artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Estas disposiciones internacionales refuerzan lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua en relación con la independencia judicial, no obstante, la eficacia y aplicabilidad de los mismos requiere más que su simple proclamación formal y compromiso internacional. Lo cierto es que, en Nicaragua, la imparcialidad e independencia judicial aún sigue constituyendo el talón de Aquiles del sistema de administración de justicia⁴⁸.

En el ejercicio de la acción procesal únicamente se exigirá el cumplimiento de los presupuestos de capacidad para ser parte y tener capacidad procesal.

La administración de justicia en Nicaragua es gratuita. En todo caso, el cobro de aranceles por la prestación de determinados servicios judiciales deberá hacerse en la forma establecida por la ley.

⁴⁷ Publicado en La Gaceta Oficial N° 104, de 2 de junio de 1999.

⁴⁸ En este sentido, Araya Ulloa en "Proceso Penal y Derechos Humanos en Nicaragua" (Estudio monográfico para obtener el Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana), 1996, pág. 74.

**IDENTIFICACIÓN DE LAS
CONDICIONES
ACTUALES DEL SISTEMA DE
JUSTICIA**

El sistema de administración de justicia nicaraguense se caracterizaba por estar conformado en su mayoría por jueces que no contaban con una preparación adecuada para ejercer la función jurisdiccional y por la falta de condiciones (infraestructura, comunicación, recursos) necesarias en los lugares donde se impartía justicia.

Con el proceso de modernización que inició en 1991 se han venido implementando una serie de modificaciones en las instalaciones de los despachos judiciales, así como la construcción de las casas de justicia en casi todos los municipios del país y la edificación de complejos judiciales que prestan mejores condiciones para el desempeño de la función jurisdiccional⁴⁹. En lo que respecta a la preparación de los funcionarios judiciales, se ha superado la figura del juez lego y, actualmente, todos los jueces cuentan con el título de Licenciados en Derecho.

Por otra parte, con la aprobación de la LOPJ y su reglamento se fortalecieron —desde el punto de vista normativo— las estructuras que conforman el sistema, modernizando las existentes y creando otras para que desempeñen un papel fundamental en el establecimiento de un sistema de justicia ágil, honesto y moderno. Sin embargo, para alcanzar la meta se necesita no sólo la modernización del ordenamiento jurídico y su consecuente creación de instituciones que fortalezcan el sistema de administración de justicia, sino que es imprescindible que el Poder Ejecutivo y los partidos políticos acepten que el Poder Judicial no debe ser un espacio de lucha partidista, y por lo tanto, deben abandonar de una vez por todas cualquier tentación de interferir en el desempeño de las actividades propias de los funcionarios judiciales y crear las condiciones para que la imparcialidad e independencia sea una realidad en Nicaragua.

⁴⁹ Sobre los avances significativos, léase las palabras del Embajador del Reino de Suecia Sr. Jan Björnunger: "La justicia independiente es una precondición para que funcione la democracia", en: *Revista Justicia* N° 13/1998, pag. 7 y ss; en el mismo sentido, las palabras del Representante residente del PNUD Dr. Carmelo Angulo "Imprescindentes cambios en el Poder Judicial", en: *Revista Justicia* N° 13/1998, pag. 10 y ss; también la disertación del Dr. Fernando Zelaya Rojas "Continuemos apoyando la reforma del Poder Judicial", en: *Revista Justicia* N° 17/1999, pag. 31 y ss.

Otro de los grandes retos del Poder Judicial es mejorar la falta de credibilidad y desprestigio que padece el sistema de administración de justicia en Nicaragua. Así pues, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN), entre el 5 y el 12 de septiembre de 1999 y patrocinada por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI), indicó que un 51.8 % de consultados estiman que la administración de justicia "está peor" que el año pasado (refiriéndose a 1998)⁸¹.

Más aún, un 31.5 % de personas encuestadas en Managua valoran que la justicia estará "peor" el próximo año, lo que denota una gran carga de pesimismo, contra un 21.4 % de ciudadanos que consideran que las cosas mejoran en el año 2000.

Este panorama no ha variado mucho, en julio del 2000 la *University of Pittsburgh* publicó un estudio titulado "Auditoría de la democracia, Nicaragua 1999", en el que las víctimas del delito reconocen que no denuncian los delitos porque "no sirve de nada" (56,1 %) ⁸², dato que respalda los resultados de la encuesta del IEN que reflejó que un 44.8 % de los ciudadanos no confían en el sistema de administración de justicia porque "no sirve para nada" ⁸³.

El 41.2 % de los encuestados por el IEN también respondió que los funcionarios del Estado que cometen actos de corrupción y pasan a juicios, son juzgados por sus conexiones políticas, mientras que un 41.7 % opina que ni siquiera llegan a ser juzgados. En relación con la interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial el estudio de la *University of Pittsburgh* revela que un alto porcentaje de la población percibe una interferencia indebida⁸⁴.

⁸¹ Esta encuesta fue publicada en la Prensa bajo el título "Justicia por el suelo" edición: 29 de octubre de 1999.

⁸² Véase: Anexo I

⁸³ Esta encuesta fue rechazada por la Corte, en La Prensa, edición de 30 de octubre de 1999.

⁸⁴ Véase: Auditoría de la democracia, Nicaragua, 1999, pag. 72-73 (Anexo II)

a) *Jerarquización de la justicia y sus modalidades*

El Poder Judicial nicaragüense descansa sobre una estructura vertical, en la que la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior que ejerce funciones administrativas y jurisdiccionales. Así pues, de conformidad con el artículo 159 párrafo 1 de la Constitución se establece una concepción jerárquica cuando se dice que “*los tribunales de justicia forman un sistema unitario cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia*” (Véase Anexo III).

Correlativamente, la LOPJ establece que el poder judicial está constituido por una pluralidad de órganos jurisdiccionales de diversas estructuras⁵⁴ y con diferentes atribuciones⁵⁵ aunque todos ellos tienen la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado, además cuenta con órganos de dirección administrativa para la organización y gobierno del sistema de administración de justicia⁵⁶.

La Corte Suprema de Justicia está compuesta por dieciséis magistrados⁵⁷, electos por la Asamblea Nacional para un periodo de cinco años y gozan de inmunidad. A su vez, la Corte se divide en cuatro salas (Sala Penal, Sala Constitucional, Sala Contencioso-administrativa y Sala Civil) cuya organización e integración

⁵⁴ Según el artículo 22 LOPJ los órganos jurisdiccionales del Poder judicial son:

1. La Corte Suprema de Justicia
2. Los tribunales de apelaciones
3. Los juzgados de distrito
4. Los juzgados locales

Los tribunales militares solo conocerán de las faltas y delitos estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y recursos ante la Corte Suprema de Justicia (...).

⁵⁵ Véase Anexo IV

⁵⁶ Los artículos 64 y siguientes contemplan cuales son los órganos de dirección administrativa del Poder judicial

⁵⁷ Antes de la última reforma penal de la Constitución la Corte estaba integrada por doce magistrados.

se acuerda entre los mismos magistrados siguiendo lo establecido en el artículo 31 de la LOPJ⁵⁸.

Así pues, en la estructura organizativa de nuestro Poder Judicial se puede claramente distinguir una estructura jerárquica tradicional con un elevado verticalismo⁵⁹, ya que cuenta con tribunales superiores e inferiores que integran un mismo sistema el cual ha adquirido características propias al estar organizado bajo un concepto de pirámide jerárquica de subordinación.

b) *División de funciones administrativas y jurisdiccionales*

b.1. Órganos que ejercen funciones jurisdiccionales⁶⁰

La Corte Suprema de Justicia⁶¹ como órgano superior del Poder Judicial está facultada para decidir sobre su presupuesto, organizar y dirigir la administración de justicia, nombrar a sus funcionarios y reglamentar lo referido a su organización y estructura, entre otras atribuciones reconocidas en el artículo 164 de la Constitución.

"... (.) Cada Sala estará formada por un número no menor de tres magistrados electos anualmente de entre sus miembros, en Corte Plena, con el voto favorable de por lo menos dos tercios del total de sus integrantes. Cada magistrado podrá integrar permanentemente hasta un máximo de dos salas.

Para emitir en los asuntos sometidos a su decisión, cada Sala formará quórum con la concurrencia de por lo menos las tres cuartas partes de sus integrantes y para resolver se requiere del voto concidente de por lo menos las dos terceras partes del total de sus miembros.

En la elección de los miembros de cada Sala, deberá elegirse a sus respectivos suplentes, para los casos de ausencia, excusas por impemencia o recusaciones."

Recientemente se han reformado los artículos que se refieren a la integración del quórum (art. 26 y 31 de la LOPJ) y emisión de resoluciones en la Corte Suprema de Justicia (véase el diario "La Prensa" de 14 de octubre del 2001, pág. 9 A). Luego de esta reforma, que afecta a los párrafos antes mencionados, las resoluciones podrán ser dictadas con la concurrencia y el voto favorable de la mayoría simple de los magistrados que componen cada sala.

⁵⁸ En este sentido, véase los comentarios a los principios y disposiciones generales de la LOPJ realizados por la Magistrada Lilia Molina Argüello en "La Revista Jurídica" N.º 16/1999, pág. 46.

⁵⁹ Véase Anexo V.

⁶⁰ Sobre la composición de los órganos jurisdiccionales de acuerdo a las circunscripciones, véase Anexo VI.

La exclusividad establecida en el artículo 3 de la LOPJ y 159 Cn impone a los jueces y tribunales no ejercer otras funciones más que las jurisdiccionales, salvo la docencia (art. 143 numeral 6 de la LOPJ). Esta limitación pretende evitar la desnaturalización de los órganos judiciales.

La Corte Suprema conoce como tribunal de segunda instancia de las resoluciones de los órganos judiciales militares que no tengan superior jerárquico y como tribunal de casación en las resoluciones de los tribunales de segunda instancia.

Los Tribunales de Apelaciones⁶² son tribunales colegiados están integrados por un número no menor de cinco magistrados y dividido en, al menos, dos Salas, que conocerán de las materias civil, laboral y penal. Para la integración de las salas se sigue lo establecido en el artículo 31 de la LOPJ para la salas de la Corte.

En cada una de las circunscripciones judiciales existe una tribunal de apelaciones con sus respectivas salas cada una de las cuales es competente para conocer y resolver en segunda instancia los recursos en contra de las sentencias dictadas por los juzgados de distrito; conocer del Recurso de hecho por inadmisibilidad de los Recursos de Apelación contra sentencias de los Jueces de Distrito, y de los recursos de amparo y exhibición personal de conformidad con la ley de la materia; dirimir conflictos de competencia entre los jueces que le están subordinados, entre otras atribuciones⁶³.

Los Juzgados de Distrito⁶⁴ son unipersonales y se clasifican, según la materia, en Juzgados Únicos, Civiles, de Familia, de lo Penal, del Trabajo y existe al menos un Juzgado de Distrito en cada departamento y Región Autónoma, con sede en la cabecera del mismo.

⁶² Véase artículo 38 y siguientes de la LOPJ.

⁶³ Sobre las demás atribuciones de los tribunales de apelaciones, véase artículo 41 de la LOPJ.

⁶⁴ Véase artículo 44 y siguientes de la LOPJ.

Igual que los juzgados de distrito, los **Juzgados Locales**⁶⁵ son unipersonales y existe al menos uno en cada municipio departamental.

La LOPJ también contiene algunas disposiciones sobre las **autoridades judiciales de las regiones autónomas**⁶⁶ de la Costa Atlántica, con el objeto de respetar, promover y garantizar el régimen de autonomía de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. El reglamento de la LOPJ es explícito al señalar que el conocimiento de la o las lenguas de la región será mérito preferente para llenar vacantes judiciales en las regiones autónomas (art. 10 del RLOPJ).

En conclusión, actualmente existen 9 circunscripciones judiciales, 9 tribunales de apelaciones, 21 juzgados de distrito de lo civil, 24 juzgados de distrito de lo penal, 10 juzgados de distrito únicos, 2 juzgados de distrito del adolescente, 17 juzgados locales de lo civil, 22 juzgados locales de lo penal, 134 juzgados locales únicos, 3 juzgados laborales, para un total de 242 despachos judiciales en todo el país⁶⁷. Un dato interesante es la marcada presencia de la mujer en la administración de justicia aunque todavía los cargos que ocupa son los intermedios⁶⁸.

b.2. Órganos que ejercen funciones administrativas⁶⁹

El Título III de la LOPJ prevé la creación de tres Comisiones permanentes⁷⁰: la Comisión de Administración, la Comisión de la Carrera judicial y la Comisión de régimen disciplinario, integradas por el número de magistrados señalados en esta misma Ley.

⁶⁵ Véase artículo 52 y siguientes de la LOPJ.

⁶⁶ Véase artículos 61 al 63 de la LOPJ.

⁶⁷ Véase el anexo IV sobre la distribución de los despachos judiciales (1) y (2).

⁶⁸ Véase Anexo VII sobre el sexo de los funcionarios judiciales.

⁶⁹ Véase Anexo VIII.

⁷⁰ Borje Tapia, "Los órganos de dirección administrativa del Poder Judicial" en La Revista Justicia N.º 17/1990, pág. 42 y ss.

La **Comisión de Administración**⁷¹ es la que se encarga de la formulación del anteproyecto del presupuesto anual del Poder Judicial, de la planificación de las políticas administrativas y de la supervisión y control de esa misma política a través de los órganos internos, para lo cual debe tener en cuenta las necesidades administrativas en función del ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

Entre las novedades que la LOPJ ha incorporado para mejorar el servicio ofrecido por el sistema de administración de justicia está la creación de la Oficina de notificaciones, la cual obedece a la necesidad de acabar con el "clientelismo judicial", de tal manera que nadie tenga que pagar por las notificaciones, inspecciones, etc. También la Oficina de distribución de causas ha sido creada con esta misma finalidad, y con ella se pretende erradicar "el tráfico de influencias" dada la preferencia que "tenían" ciertos litigantes por llevar sus causas en determinados juzgados⁷². Esta oficina se encarga de distribuir equitativamente las causas, ya que, como es sabido, antes de su creación algunos juzgados estaban llenos de innumerables causas, mientras otros recibían muy pocas⁷³.

En la actualidad, únicamente se ha creado una oficina de recepción y distribución de causas, la cual está funcionando para los juzgados locales y de distrito de lo penal en la ciudad de Managua, pero habrá que esperar su materialización en los demás complejos judiciales del país, para poder evaluar su efectividad en la administración de justicia.

⁷¹ Integrada por el Presidente de la Corte y los Presidentes de cada una de las cuatro salas (art. 67 de la LOPJ).

⁷² Así, Molina Argüello Lagüa, "Dinámica Judicial", en: *Revista Justicia* N.º 15/1998; En el mismo sentido Cuadras Ortegaray, "La Ley Orgánica del Poder Judicial y la actividad jurisdiccional", en: *Revista Justicia* N.º 17/1999, pág. 22; Zelaya Rojas, "El abogado que no se especialice sucumbirá ante la competencia", en: *Revista Justicia* N.º 14/1998.

⁷³ En palabras del Dr. Gerardo Rodríguez "La presentación de las causas en algunos despachos judiciales atendiendo a ciertos ajenos a la ética profesional como el grado de amistad entre el abogado y el juez, la severidad o flexibilidad de los mismos, etc." en una de las razones que justifican la creación de la oficina de distribución de causas, en: *Revista Justicia* N.º 20/2000, pag. 4.

La comisión que mayor interés despierta entre los funcionarios judiciales es la **Comisión de Carrera judicial**¹⁴ a la que le corresponde todo lo concerniente a la organización y puesta en marcha de la carrera judicial en Nicaragua. Un órgano auxiliar importante que no puede pasar desapercibido en este informe es la Escuela Judicial, la cual está adscrita a esta comisión (art. 78 de la LOPJ).

La escuela judicial tiene por objeto planificar, organizar, desarrollar y evaluar la formación, profesionalización y actualización sistemática de los secretarios judiciales, jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones, con el objeto de contar con un personal mejor calificado.

Dentro de la competencia de la Comisión de carrera judicial cabe destacar: la presentación de temas ante la Corte Suprema de candidatos para llenar la plaza vacante de Magistrados de Tribunales de Apelaciones, Jueces de Distrito y Locales, Propietarios y Suplentes, Médicos Forenses, Secretarios Judiciales y Registradores Públicos; supervisar el funcionamiento de la Escuela Judicial y de la Biblioteca del Poder Judicial, y proponer el nombramiento de sus Directores, llevar el registro de méritos y débitos de quienes forman parte del personal jurisdiccional del Poder Judicial; organizar y dirigir los procedimientos para el otorgamiento de los Títulos de Abogado y Notario Público; organizar y supervisar los concursos y las pruebas relativos a la Carrera Judicial una vez ésta se establezca y a las funciones de auxilio judicial que prevea la ley. Los concursos son públicos en todas sus etapas, etc.

¹⁴ Integrada por un mínimo de tres magistrados electos con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros (art. 69 de la LOPJ).

La **Comisión del Régimen Disciplinario**⁷⁵ es la encargada de conocer las quejas o faltas que se interpongan en contra de los funcionarios judiciales, así como de las infracciones al régimen disciplinario cometidas por éstos en el ejercicio de sus funciones. También supervisa el funcionamiento de la inspección judicial disciplinaria.

La Corte Suprema y sus comisiones como órganos de dirección administrativa del Poder Judicial cuentan con **órganos auxiliares**⁷⁶ para el desempeño de sus funciones, así: la secretaría general administrativa, la inspección judicial disciplinaria y la escuela judicial.

De los tres órganos auxiliares de la Corte Suprema y de las comisiones permanentes para el desempeño de sus funciones, es oportuno destacar las atribuciones de la Inspección Judicial disciplinaria como ente administrativo encargado de: 1. Realizar la investigación de denuncias por faltas disciplinarias de los miembros de la carrera judicial y formular las recomendaciones que estime pertinentes a la Comisión Disciplinaria; 2. Realizar visitas de inspección a las sedes de los órganos jurisdiccionales, con el propósito de constatar el buen desempeño de las funciones; 3. Conocer de las denuncias que, por desbalance patrimonial excesivo, se formulen contra los funcionarios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial, investigando con base en la Declaración de Prohibidad que debe rendir todo funcionario público al tenor de la ley de la materia y la realidad del Patrimonio actual del denunciado, así como su origen y fundamento del acrecimiento desproporcionado a la remuneración del cargo; De los resultados de su investigación rendirá informe a la Comisión de Régimen Disciplinario la que resolverá administrativamente, y previa comunicación a la Corte Plena, según el caso, lo remitirá a la Contraloría General de la República o a la Procuraduría General de la República; 4. Instruir las quejas o denuncias que se

⁷⁵ Integrada por un mínimo de tres magistrados electos con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros (art. 71 de la LOPJ)

⁷⁶ Artículo 73 y siguientes de la LOPJ

presenten ante los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o ante sus dependencias; 5. Verificar el cumplimiento de las medidas correctivas que se dicten, tanto en el orden jurisdiccional como en el administrativo; 6. Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas a Magistrados, Jueces, auxiliares de justicia, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial; 7. Cualquier otra que le otorgue la ley, el reglamento, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Régimen Disciplinario o el Presidente de la Corte.

c) Principios que rigen el sistema judicial

c.1. La inamovilidad de jueces y magistrados

La independencia judicial es un principio que está íntimamente relacionado con los principios de responsabilidad, inamovilidad y estabilidad reconocidos en los artículos 19 y 142.2 de la LOPJ.

En relación con estos principios la Constitución en sus artículos 162 y 163 establece que tanto los magistrados de la Corte como los de los tribunales de apelaciones son electos individualmente por un periodo de cinco años y únicamente pueden ser separados de sus cargos, por las causas previstas en la Constitución y la LOPJ. En cuanto a los jueces militares sólo pueden ser removidos por causas justificadas.

Los jueces de distrito y los jueces locales —según el artículo 45 y 52 de la LOPJ— son nombrados por tiempo indefinido por la Corte plena⁷⁷. Los Jueces no pueden ser removidos de su cargo, salvo casos de destitución por las causas y de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.

⁷⁷ Según el artículo 25 de LOPJ: "La Corte Plena está integrada por todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se reunirá ordinariamente la primera y tercera semana de cada mes, y extraordinariamente cuando la convoque el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o lo solicite por escrito un tercio del total de sus miembros".

c.2. Independencia judicial

La independencia judicial está constituida según el artículo 142.1 de la LOPJ como un derecho de todos los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo, hablar de la independencia judicial supone no sólo la existencia de un marco jurídico adecuado, sino además las asignaciones presupuestarias que garantizan su funcionamiento. Al respecto, el texto constitucional establece hasta el 4% del presupuesto general de la República (art. 159 párr. 1), sin embargo, esta partida presupuestaria no se ha respetado, lo cual ha obligado a realizar "ajustes presupuestarios" que han producido incertidumbre en los tribunales de justicia⁷⁸.

No obstante, lo establecido en la legislación vigente, la independencia interna de los jueces es casi inexistente, si tenemos en cuenta que los miembros del Poder Judicial desde los magistrados de la CSJ hasta los jueces de locales son nombrados conforme a intereses partidarios⁷⁹ y personales. Ello trae consigo el cuestionamiento de la independencia judicial, ya que los magistrados tienen una enorme influencia sobre los funcionarios judiciales inferiores⁸⁰, dando lugar a una cultura jerárquica en la que los magistrados de apelaciones y jueces –ya sean de distrito o locales– están subordinados, no sólo desde el punto de vista administrativo, sino jurisdiccional⁸¹. Pero además, esta subordina-

⁷⁸ Al respecto, véase *El Nuevo Diario: Arreglo con la Corte Suprema de Justicia. Trabajarán de junio a justicia no se detendrá*, edición del 16 de diciembre del 2000, no obstante este titular contrasta con los titulares de La Prensa: "Paquetazos de magistrados", "Magistrados piden comidas especiales"; "Futura y encoge con el presupuesto de la CSJ", "CSJ gasta 3 millones en publicidad y propaganda", edición 30 de agosto del 2000, pág. 8 A; "Magistrados defienden paquetazos en la CSJ", edición de 8 de septiembre del 2000, "Manejos poco claros con cuentas de la CSJ", edición de 1 de septiembre del 2000, pág. 1 A; "Magistrados con lujo y jueces con dificultades", edición 31 de agosto del 2000.

⁷⁹ Confidencial: *Temor por retroceso en la CSJ*, junio 1999; *Elección política en la Suprema*, agosto de 1999; *El Nuevo Diario*: "Dos para nos ... dos para mí", La Prensa: *Eligen a cuatro magistrados en la CSJ*, 21 de marzo del 2000.

⁸⁰ En el mismo sentido, Dye: *David Retazos de democracia*, Hemisphere Initiatives, diciembre 2000, Cambridge, Massachusetts, 2000, pág. 24 ss.

ción indebida también se presenta en los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes por su filiación y lealtad partidaria sucumben a los intereses de "su partido".

De esta manera, no creemos posible hablar de que en Nicaragua existe independencia de los jueces y magistrados, pues, tanto unos como otros, se encuentran limitados en su ejercicio, límites que unas veces vienen dados por la Ley y otras por las circunstancias concretas de la realidad nacional. Desde el propio ámbito de la ley debe decirse que la realización de funciones judiciales y administrativas lleva consigo mecanismos de presión de unas respecto a otras; sin ningún género de duda, podemos afirmar, abstraídos de momento de las presiones externas al propio Poder Judicial, la existencia de una "interdependencia" en el sistema de administración de justicia; así, cada Magistrado es miembro en dos salas distintas (penal, constitucional, civil y de lo contencioso administrativo), también lo es de una de las tres comisiones establecidas por la ley (comisión de administración, de régimen disciplinario y de carrera judicial) y, por si fuera poco, cada uno de ellos tiene asignado la administración de uno o varios departamentos del país⁸².

Visto lo anterior resulta simple, y así ha sucedido en múltiples ocasiones, que los intereses, políticos o de cualquier otra índole, de cada Magistrado lo llevan a utilizar como moneda de cambio su voto favorable o desfavorable a una determinada resolución, al nombramiento de un Magistrado de los tribunales de apelaciones, al nombramiento de un juez, de un registrador, etc. Los nombrados, por su parte, actúan con estricto apego a los intereses de aquél o aquellos que hicieron posible su nombramiento y no sólo

⁸¹ Al respecto, es del dominio público el hecho de que magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizan "llamadas telefónicas" cuya finalidad es indicar el sentido de una resolución sobre un caso "de su interés".

⁸² Sobre el reparto de funciones administrativas por departamentos véase: *Revista Justicia* N° 2/1995, pag. 21. También David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 24; en el mismo sentido, La Prensa, "Padrinazgo y feudos en la CSJ", edición de 6 de mayo del 2001, en Traslondo "Magistrados y sus regiones", pag. 4 A y 5 A también, La Prensa, "La Corte: entre el pacto y el feudalismo", edición de 24 de agosto del 2001, pag. 8 A.

en asuntos administrativos, también a la hora de impartir justicia; de manera pues, que –como señala Dye– la independencia interna de los jueces es prácticamente inexistente⁸³. Todo ello, afecta sensiblemente otros principios como el de imparcialidad, objetividad y autonomía, ya que del proceder de nuestros jueces y magistrados podemos deducir su escasa vigencia.

Sobre las presiones externas que comprometen la independencia del Poder Judicial nicaragüense preferimos mejor recomendar una breve lectura de los casos relevantes ocurridos en los últimos años pues ellos hablan por sí mismos.

c.3. Modos de selección (por antecedentes, antecedentes y concurso público, autoridad nominadora)

La legitimación de los órganos jurisdiccionales desde el punto de vista de su designación y nombramiento tiene su origen en la mediación de los representantes parlamentarios, ya que la Asamblea Nacional es la que elige a los Magistrados del órgano superior del Poder Judicial (art. 138.7 Cn) de listas separadas propuestas por el Poder Ejecutivo y por diputados del Poder Legislativo⁸⁴. Es la misma Asamblea Nacional –conforme al artículo 163 Cn– la que nombra a los conjuces, quienes deben integrar la Corte Plena o cualquiera de las salas cuando se produzca la ausencia, excusa, impleancia o recusación de cualquiera de los magistrados. Al respecto, es oportuno señalar que hasta la fecha el poder legislativo no ha nombrado a los conjuces.

Entre los requisitos básicos para ser magistrado de la Corte –conforme al artículo 136 de la LOPJ– en armonía con lo establecido en la Constitución cabe citar: ser nicaragüense y no haber

⁸³ David R. Dye, *Relatos de Demócrata*, 2000, 24. En el mismo sentido, (La Prensa, “*Podrán elegir jueces en la CSJ*”, edición de 6 de mayo del 2001, págs. 4 y 5 A) se señala esta situación señalando “los jueces se sienten reos de la CSJ”.

⁸⁴ Antes de la reforma parcial a la Constitución en 1995, la Asamblea Nacional elegía a los magistrados de la Corte Suprema de ternas propuestas por el Poder Ejecutivo, esta era una atribución exclusiva que cubría hasta el nombramiento del Presidente de la Corte entre los magistrados electos por la Asamblea.

renunciado a la nacionalidad, salvo que la hubiere recuperado por lo menos en los últimos cinco años anteriores a su elección; ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido una judicatura o la profesión por lo menos durante diez años o haber sido Magistrado de los Tribunales de Apelaciones durante cinco años; haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años al día de la elección; no ser militar en servicio activo o siéndolo, haber renunciado por lo menos doce meses antes a su elección (este requisito no rige para los Magistrados de la Jurisdicción Militar), entre otros.

De acuerdo con la Constitución - artículo 164 numerales 5 y 7 - corresponde a los magistrados de la Corte Suprema nombrar a los magistrados de los tribunales de apelación⁸⁵ y a los jueces en sus diferentes niveles (de distrito⁸⁶ y locales⁸⁷)⁸⁸. Y de conformidad con el artículo 39 del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar se establece que los integrantes de los órganos judiciales militares son nombrados por la Corte Suprema de las listas que propone el Consejo Militar.

⁸⁵ Los candidatos deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 136 de la LOPJ excepto el de haber ostentado el cargo, ya que ese es un requisito para ser magistrado de la Corte Suprema.

⁸⁶ Los requisitos para ser juez de distrito están contemplados en el art. 137 de la LOPJ que dice: *"Para ser Juez de Distrito se requiere: 1. Ser nacional de Nicaragua; 2. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 3. Haber cumplido 25 años de edad; 4. Ser abogado de moralidad notoria; 5. Haber desempeñado como Juez Local durante más de dos años, como secretario de juzgado por más de tres años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en disciplina jurídica, por un período no menor de tres años; 6. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía; 7. del notariado por resolución judicial firme; 7. No ser militar en servicio activo o siéndolo; haber renunciado por lo menos doce meses antes de su elección; 8. No estar inmersa en ninguna incompatibilidad establecida por la Ley"*

⁸⁷ Para ser juez local se establecen los mismos requisitos que para ser juez de distrito excepto el requisito de la edad la cual baja a los 21 años y el haber ejercido el cargo al que está optando (artículo 138 de la LOPJ).

⁸⁸ Al respecto, se ha sugerido por parte de un magistrado de la CST el cambio de método para los nombramientos de jueces locales y de distrito, para este magistrado los tribunales de apelaciones deben nombrar a "sus" jueces locales y de distrito. (La Prensa, *"Futurólogo y feudos en la CSJ"*, edición de 6 de mayo del 2001, subtítulo "Sugieren nuevo método para los nombramientos".

Con relación al nombramiento de los defensores públicos, por primera vez en Nicaragua se hizo un intento serio de elección mediante pruebas de méritos y capacidades, aunque no fue posible alcanzar una designación objetiva libre de apreciaciones personales y subjetivas.

El nombramiento de los directores de la Defensoría Pública es para un periodo de cinco años y según la LOPJ deben ser designados por concurso.

No obstante lo establecido en la Constitución y LOPJ, todavía podemos decir, que el sistema de nombramientos de los funcionarios judiciales se concentra en los magistrados de la Corte, ya que cada uno de los magistrados tiene asignada una región o circunscripción judicial, y cuando se produce una vacante éste propone al o los candidatos a la consideración de la Corte Plena, la cual procede a su nombramiento.

c.4. Horizontalidad

La organización del Poder judicial nicaraguense se presenta como una organización de jerarquía vertical en cuya cúspide se encuentra la Corte Suprema de Justicia, al respecto, remitimos a lo señalado en el apartado sobre la jerarquización de la justicia y sus modalidades.

c.5. Autonomía

Véase lo referido a la independencia judicial.

c.6. Imparcialidad

Véase lo referido a la independencia judicial.

C.7. Objetividad

Véase lo referido a la independencia judicial.

c.8. Procedimiento disciplinario (arts. 163-168 de la LOPJ)

Las investigaciones y quejas de carácter disciplinario formuladas contra los funcionarios judiciales, se conocen y resuelven en primera instancia por la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia, auxiliada por la Inspectoría Judicial Disciplinaria quién seguirá un procedimiento sumario y en segunda instancia conocerá la Corte Plena.

Las sanciones que se podrán imponer a los funcionarios judiciales por las faltas disciplinarias⁴⁹ cometidas en el ejercicio de sus cargos son: 1. Amonestación; 2. Multa no mayor al 10% de su salario mensual; 3. Suspensión de un mes a un año sin goce de salario; 4. Destitución.

Cuando se vaya a destituir al funcionario judicial, la Comisión de Régimen Disciplinario propondrá la adopción de dicha sanción a la Corte Plena, la que resolverá sin ulterior recurso.

⁴⁹ Según el artículo 166 de la LOPJ las causas de responsabilidad disciplinaria son:

1. La infracción a los deberes, prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la presente Ley.
2. Actos públicamente contra la respetabilidad del Poder Judicial o se instigue o abiente reconocimientos públicos contra el mismo.
3. Injuriar a los superiores jerárquicos, en sala de plenario, por escrito o por medios de comunicación social.
4. Cuando se abuse de las facultades que la ley señala respecto a sus subalternos o a las personas que intervienen de cualquier manera en un proceso.
5. La negligencia o el retraso injustificado o reiterado en el desempeño de la función judicial.
6. Abandonar el lugar en que presta sus servicios.
7. Por no guardar la debida consideración y respeto a los abogados o a las partes.
8. Cuando valiéndose de la autoridad de su cargo, ejerza influencia ante otros miembros del Poder Judicial o sus Órganos Auxiliares, para la tramitación o resolución de algún asunto judicial.
9. La inobservancia del fuero de despacho o de los plazos legales para proveer escritos o expedir resoluciones o por no rendir los informes solicitados dentro de los plazos fijados.
10. Por no ejercer control sobre sus auxiliares y subalternos y por no imponer las sanciones pertinentes cuando el caso lo justifique.
11. En los demás que señalen las leyes.

Como se puede observar, la responsabilidad de los funcionarios judiciales en materia disciplinaria lo vincula hacia arriba, pero lo deja impune de su responsabilidad frente al ciudadano que entra al sistema de administración de justicia. Pero eso no es lo más grave, si tenemos en cuenta que la concentración del poder en un sistema de justicia vertical como el nuestro facilita una fuerte interferencia política del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial en su conjunto⁹⁰ constituyendo de esta manera un gran obstáculo para la vigencia de la independencia judicial en Nicaragua.

d) Existencia de la carrera judicial, la carrera fiscal y la de defensores. Funcionamiento

d.1. Carrera Judicial

Como se ha señalado anteriormente, a inicios de los años noventa se diseñó una estrategia de fortalecimiento del sistema de justicia que ponía énfasis en la necesidad de propiciar la formación judicial y crear las condiciones materiales mínimas⁹¹ para el funcionamiento del sistema de tribunales; como resultado de este esfuerzo, entre otros, se logró que todos los jueces tengan, por lo menos, la licenciatura en Derecho, ya que muchos jueces además de carecer de una formación judicial no tenían título alguno⁹², no obstante, la carrera judicial sigue siendo un proyecto pendiente en Nicaragua, pese a la existencia de una base constitucional y una amplia regulación contenida en la LOPJ seguimos en espera de la aprobación de una Ley de Carrera Judicial⁹³.

⁹⁰ En este sentido Dye, David. *Retrazos de democracia*. Hemisphere Initiatives, diciembre 2000, Cambridge, Massachusetts, pág. 24 -25

⁹¹ v.gr. se construyeron 123 casas de justicia en distintos municipios en un esfuerzo por ampliar el acceso al sistema

⁹² Así pues, en 1996 sólo el 10% de los jueces locales y el 70% de los jueces de distrito tenían este título (Cfr. Revista Justicia, N.º 5, 1996, pág. 10)

⁹³ Al respecto, se sabe que existe un primer borrador de anteproyecto de Ley de Carrera Judicial, el cual ha estado engavetado desde hace algunos años

La Constitución Política en su artículo 159 *in fine* establece la carrera judicial a reglamentar en una ley posterior. Como complemento a la reforma constitucional que incorporó esta disposición la Asamblea Nacional aprueba una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que contempla una serie de disposiciones relativas a la Carrera Judicial que comprende los cargos de:

1. Defensor Público
2. Secretario Judicial, Secretario de Sala, Secretario de Tribunal de Apelaciones, Secretario de la Corte Suprema de Justicia²⁴
3. Oficial notificador
4. Juez Local
5. Juez de Distrito
6. Magistrado de Tribunal de Apelaciones

Como podemos observar, la magistratura del máximo tribunal, es decir, de la Corte Suprema de Justicia como órgano superior del Poder Judicial, no está bajo el régimen de nombramiento y promoción de los funcionarios judiciales establecido en la LOPJ, con lo cual se deja abierta la posibilidad de “nombramientos partidarios” al nivel más alto del Poder Judicial, y, por ende, dado que el nombramiento de los funcionarios judiciales de los niveles inferiores se da por éstos, se corre el riesgo de que las cosas sigan igual.

Según la LOPJ para ingresar a la Carrera Judicial, se requiere – art. 152- la aprobación en concurso de las pruebas de oposi-

²⁴ Según la LOHJ: “Los Secretarios Judiciales son funcionarios de la Carrera Judicial, ejercen la fe pública judicial y asisten a los Jueces o Magistrados en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la establecida en la presente Ley y en las demás leyes de la materia. En cada dependencia judicial habrá al menos un Secretario, el número de secretarios por dependencia judicial será determinado por la Comisión de Administración de la Corte Suprema de Justicia”.

Los Secretarios Judiciales deberán prestar la promesa de ley en la forma y tiempo regulados por la ley. Prestada ésta, quedarán en posesión del cargo. Tomarán posesión de sus cargos en la siguiente forma:

1. El Secretario de la Corte Suprema de Justicia, ante el Presidente de la misma.
2. Los Secretarios de Salas de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales de Apelaciones, ante el Presidentes de la Sala respectiva.
3. Los Secretarios de Actuaciones de los Juzgados de Distrito

ción⁹⁵ que determine la Comisión de la misma de conformidad con lo dispuesto en ésta ley y la ley de la materia.

Para tales efectos se debe tener en cuenta los títulos y grados académicos obtenidos en relación con las disciplinas jurídicas, los años de servicio, la realización debidamente acreditada de cursos de especialización jurídica, presentación de ponencias, memorias o trabajos similares en cursos, seminarios y congresos de interés jurídico, y otras valoraciones de los méritos del candidato.

El nombramiento lo hace la Corte Suprema de Justicia, de la terna de candidatos para cada cargo de elección y votando cada una de ellas en el orden de las calificaciones obtenidas en el concurso correspondiente. En caso de que ninguno de los candidatos obtenga la calificación mínima requerida en las bases del concurso, debe declararse desierto y convocarse de nuevo. En caso de empate en los resultados del concurso, se dará preferencia para llenar las vacantes disponibles a quienes tengan mayor tiempo de servicio en la Carrera Judicial o en el Poder Judicial.

Todo nicaragüense puede ingresar a la Carrera Judicial sin distinción de sexo, color, credo político o religioso o de cualquier otra que no sea la del mérito o la capacidad. A las personas que soliciten ingresar a la Carrera Judicial, no se les exigirá más requisitos que los señalados expresamente en la LOPJ y en la ley de la materia. Cualquier otro requisito o condición al respecto se presumirá de mala fe y podrá originar responsabilidades para quien tratase de exigirlo.

Locales, ante los Jueces respectivos

4. *Los Secretarios Receptores y Oficiales Notificadores, en su caso, ante el Presidente del Tribunal de Apelaciones correspondiente (artículo 170 de la LOPJ)*

⁹⁵ Para el concurso que determina este artículo, la Corte Suprema de Justicia por medio de la Comisión de Carrera Judicial aprobará las correspondientes bases, las que determinarán la puntuación de los méritos que deban concurrir en los candidatos.

No podrán acceder a la Carrera Judicial, los que se encuentren en los siguientes casos:

1. Quienes se hallen suspendidos en sus derechos civiles o políticos.
2. Haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.
3. Quienes hubiesen sido destituidos de cargos judiciales, mientras no sean rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia⁹⁶.

Sobre la evaluación del desempeño la Comisión de Carrera Judicial, conjuntamente con el Departamento de Personal y Recursos Humanos, establecerá un sistema para evaluar periódicamente a los funcionarios pertenecientes a la misma de acuerdo a los méritos del servidor, conforme a la ley.

Los resultados de las evaluaciones y calificaciones del desempeño del cargo se incluirán y registrarán en el expediente personal del servidor o funcionario judicial; del total de puntuación se tomará en cuenta hasta en un cinco por ciento de la misma, para los concursos que se convoquen.

Entre los artículos que regulan la carrera judicial en la LOPJ, encontramos disposiciones alusivas a la promoción, causas de destitución, reintegro, causas de finalización de la carrera judicial⁹⁷, y de cooperación con el funcionario frente a las oportunidades de estudio, para lo cual se otorgará la licencia o permiso con goce de salarios.

⁹⁶La solicitud de rehabilitación –según el art. 151 de la LOPJ– no será atendida antes de haber transcurrido al menos dos años contados a partir del día en que se acordó la destitución y deberá resolverse en sesión privada y votación secreta teniendo a la vista el acuerdo de revocación del nombramiento, los antecedentes del interesado y demás información que la Comisión de Carrera Judicial juzgue conveniente ordenar para la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Si la solicitud fuere denegada, no podrá plantearse de nuevo, antes de haber transcurrido un año.

⁹⁷Según el artículo 155 son causas de finalización: la muerte, la incapacidad física o mental permanente, que inhabilite para el ejercicio del cargo; jubilación, renuncia, destitución, incompatibilidad sobrevinida de conformidad con los términos de la presente Ley, las demás que establezca la Ley de Carrera Judicial.

d.1.1. Iniciativa de Ley de Carrera Judicial⁹⁸

La Constitución Política establece, en la parte final de primer párrafo del artículo 159, el principio de carrera judicial y manda que éste sea regulada por la ley. No obstante, han pasado más de cuatro años desde su proclamación formal y aún no se ha aprobado la ley que desarrolle el referido mandato, lo cual se ha traducido en una serie de problemas, limitaciones y presiones de carácter político que han afectado considerablemente la credibilidad y confianza⁹⁹ en el sistema de administración de justicia¹⁰⁰.

La entrada en vigencia de la LOPJ puso de manifiesto la necesidad de impulsar la discusión y aprobación de una Ley de Carrera Judicial que establezca los principios, normas y procedimientos del ingreso, permanencia, ascenso, capacitación, disciplina causales de remoción del cargo a fin de asegurar la imparcialidad e independencia de jueces y magistrados, así como la creación de los órganos necesarios para la administración y operación de la Carrera Judicial. Así pues, encontramos un sin número de disposiciones de esta Ley que nos remiten a la "ley de la materia".

Recientemente, se ha presentado una iniciativa de Ley de Carrera Judicial¹⁰¹ compuesta por seis títulos sobre la organización y administración de la Carrera Judicial, la clasificación, ingreso y permanencia, derecho, deberes y prohibiciones, sobre los jueces y magistrados suplentes, el régimen disciplinario y las disposiciones finales y transitorias, en total esta iniciativa tiene 51 artículos.

⁹⁸ Véase, Proyecto de Carrera Judicial, Anexo XVI.

⁹⁹ En este sentido, véase los comentarios realizados por la Magistrada Lilia Molina Argüello "Dinámica Judicial" en: *La Revista Justicia* N° 15/1996.

¹⁰⁰ Véase, *Auditoría de la democracia, Nicaragua 1999*, pág. 56 (Anexo DQ).

¹⁰¹ Véase, *La Prensa*, "Proponen ley para independizar el Poder Judicial", edición del 10 de octubre del 2001, pág. 10 A.

Este proyecto destaca el principio de independencia e imparcialidad del Poder Judicial, el nombramiento de los funcionarios judiciales por capacidad, méritos y honorabilidad mediante concurso público, y para ello, propone la conformación de un Consejo de Carrera Judicial integrado por el presidente de la Comisión Carrera Judicial de la Corte Suprema, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dos representantes del Consejo Nacional de Universidades, un representante de los jueces y magistrados y el Director de la Inspección Judicial disciplinaria de la Corte Suprema (art.5 PLCJ), además del establecimiento de prohibiciones como la de participar activamente en política partidaria, mítines o cualquier otro acto público mientras se ejerza la judicatura.

El espíritu de esta iniciativa –según uno de los diputados que presentaron el proyecto¹⁰²– es brindar estabilidad laboral a los actores de la administración de justicia, así como la despolarización en las decisiones y sentencias que estos tomen. En este sentido, “preocupa la partidización del Poder Judicial y las presiones que sufren algunos jueces y magistrados¹⁰³ para dictar sentencia a favor de los allegados al poder”¹⁰⁴.

Al respecto, aunque resulta incommo el trabajo realizado tanto por los redactores del Proyecto, como por los diputados que presentaron esta iniciativa, creemos, que una ley de esta naturaleza –antes de ser aprobada– debe someterse a la consulta y aná-

¹⁰² Así, el diputado Liberal, Leonel Teller en: *La Prensa*, “Proposición para independizar el Poder Judicial”, edición del 10 de octubre del 2001, pág. 10 A.

¹⁰³ El caso más reciente, es el de los magistrados del Tribunal de apelaciones en el Caso ENTEL, así, el magistrado Rodríguez, se considera “un perseguido político” por la resolución dictada a favor de Lewites. Por su parte, la Magistrada Molina es clara al manifestar que le mensaje está dado “el que toque al poder, ya sabe a que se atiene”. Véase, *La Prensa*, “ENTEL acusa a magistrados”, edición de 27 de septiembre del 2001, pág. 12 A; en el mismo sentido, *La Prensa*, “Magistrados denuncian presunta persecución”, edición de 28 de septiembre del 2001, pág. 7 A.

¹⁰⁴ Esta situación también ha sido reconocida por algunos diputados, en relación al caso ENTEL, véase, *La Prensa*, “Polémica por resolución de la Corte en caso ENTEL”, edición de 24 de septiembre del 2001, pág. 9 A.

lisis de los principales destinatarios de esta normativa, magistrados de los tribunales de apelaciones, jueces locales y de distrito, secretarios judiciales; en definitiva, de todos los operadores del sistema de justicia incluyendo a todos los profesionales del Derecho.

d.1.2. Defensores Públicos

1. Aspecto normativo

La Defensoría Pública es un órgano que depende de la Corte Suprema de Justicia quien a través de su comisión administrativa se encarga de crear delegaciones de la Dirección en las circunscripciones departamentales y su supervisión. No obstante, la defensoría pública goza de autonomía en sus funciones¹⁰⁵.

Los artículos 212 y 213 de la LOPJ están dedicados a la Defensoría Pública en armonía con la proclamación constitucional establecida en el artículo 34.4 al señalar que la Defensoría Pública proveerá la defensa a las personas que no tengan capacidad económica para sufragar los gastos de un abogado particular. También se dice que la Defensoría Pública deberá disponer de un número de defensores proporcional a las necesidades que requiera la administración de justicia, sin embargo, la realidad es otra¹⁰⁶, han pasado casi tres años desde que entró en vigencia la LOPJ y únicamente se han nombrado trece (13) defensores públicos, además de la Directora y subdirectora.

La Dirección de Defensores Públicos también puede contar con el número necesario de auxiliares en abogacía, para que colaboren con los Defensores Públicos en el ejercicio de sus cargos y tendrán las funciones que les señale la Dirección y la presente Ley.

¹⁰⁵ Sobre la defensa pública. Cf. Cordero González en: *La Revista Justicia* N° 10/1999, pag. 29

¹⁰⁶ Véase, "Defensoría Pública: un reto que debe ser asumido por todos" en: *La Revista Justicia* N° 15/1998 pag. 30 y ss.

Los estudiantes de las Escuelas de Derecho que hubiesen concluido el tercer año, de la carrera, incorporados en Bufetes Jurídicos, podrán ejercer las funciones equivalentes de auxiliares de Defensa Pública o Defensores de Oficio.

Los estudiantes activos de las Escuelas de Derecho que hubiesen concluido el tercer año, podrán ejercer como Pasantes de Derecho sometidos a las reglamentaciones y condiciones señaladas en la ley de la materia. El mismo artículo 218 de la LOPJ señala las sanciones que se impondrán a los abogados de oficio que no cumplan con la defensa sin justa causa y las responsabilidades civiles y penales en las que puedan incurrir.

Es importante señalar que entre las funciones de la defensoría pública, destaca el hecho de no circunscribirse únicamente al ámbito penal, ya que de conformidad con el artículo 212 de la LOPJ, ésta debe ser garantizada en las demandas de alimentos, y en las litis de orden mercantil, familiar, agrario y laboral. También es oportuno señalar que el cargo de defensor público adscrito a la carrera judicial es incompatible con el ejercicio privado de la Abogacía.

Respecto al desarrollo de la normativa de la defensoría pública se conoce un Anteproyecto de Reglamento de la Dirección de Defensores Públicos, compuesto por XI Capítulo relativos a la naturaleza y fines, a la estructura y organización, de los defensores públicos, de los pasantes de Derecho, de los usuarios del servicio, de los requisitos y procedimientos para optar al servicio, del contenido y alcance del servicio y de la actividad administrativa de la defensa pública (103 artículos en total)

2. Situación actual de la defensoría pública¹⁰²

En la actualidad la Oficina de la Defensoría Pública creada por la LOPJ constituye, en gran parte, una manifestación formal de la

¹⁰² En relación con el conocimiento de las funciones de la Defensoría Pública, véase: Auditoría de la democracia, Nicaragua, 1999, pag. 59-60 (Gráfico contenido en los Anexos X y XI)

voluntad política de ofrecer al ciudadano que no cuenta con recursos económicos para pagar un abogado particular. A pesar de que han pasado más de tres años desde que la Corte Suprema de Justicia instaló la oficina de la defensoría pública en Managua, el acceso gratuito a la justicia todavía sigue siendo un mito¹⁰⁸. Si tenemos en cuenta que la única oficina de la defensoría que existe es la de Managua, la cual funciona con un escaso presupuesto y un número mínimo de defensores que no pueden atender todos los casos¹⁰⁹. El resto de las judicaturas del país aun esperan el servicio de la defensoría pública para sus detenidos¹¹⁰.

Al respecto, un estudio realizado por la Sala Penal de la CSJ reveló que al año se registra un promedio de 50, 000 detenidos en el todo el país, de los cuales la mitad (25,000) corresponden a Managua. Los trece defensores con los que cuenta la Oficina de la defensoría atienden un promedio de 250 casos cada uno, es decir que, a pesar del enorme esfuerzo que realizan, únicamente pueden atender el 8% (3250 detenidos) del total de detenidos.

Ante esta situación, la Dirección de la Defensoría Pública ha solicitado a la CSJ el nombramiento de 26 defensores más. 10 de ellos reforzarían el trabajo en Managua, y el resto serían destinados a otros departamentos, no obstante, pese a que la CSJ aceptó inicialmente la propuesta, el derecho a tener un defensor público más allá de Managua tendrá que "esperar hasta que la situación del Poder Judicial mejore"¹¹¹. Mientras tanto, la única Oficina de la Defensoría Pública ubicada en Managua ha distribuido a sus pocos defensores con el objeto de dar atención en los distintos ámbitos judiciales. Así por ejemplo, ha asignado 2 defensores en el juzgado de menores, 2 para la ejecución de penas y 9 en los Juzgados de Distrito del crimen.

¹⁰⁸ La Prensa, "Acceso a la justicia gratuita es un mito", edición de 29 de junio del 2001, pág. 7 A. También el editorial "Justicia injusta", edición (La Prensa) de 1 de agosto del 2001.

¹⁰⁹ Anexo sobre casos tramitados por los defensores públicos durante el periodo 1999-mayo 2001 (Anexo XII).

¹¹⁰ La Prensa, "Defensa Pública brilla por su ausencia", edición de 31 de julio del 2001.

¹¹¹ Pese a la gran demanda, véase, La Prensa, "Piden defensores en las Segovias", edición julio 2001; "Mito de la justicia", edición de 29 de julio del 2001, reportaje especial.

Como se puede observar, el proceso de fortalecimiento, independencia e institucionalización del Poder Judicial que es necesario emprender, debe también volver sus ojos hacia una de las instituciones más sensibles del sistema de justicia, aquella que garantiza el derecho constitucional de defensa, apoyando de forma decisiva a la Defensoría Pública.

d.1.3. Defensores de Oficio (art. 34.5 Cn)

El Código de Instrucción Criminal vigente, en sus artículos 234 y siguientes hace referencia a los defensores de los reos y la facultad de los jueces de instrucción de nombrar un defensor de oficio, esté o no presente el reo. Los defensores de oficio se nombran de una lista de abogados que tiene el juez de conformidad con el art. 363 In.

En el capítulo II del título X de la LOPJ se señala que en los lugares donde no existe la defensoría pública, la asistencia técnica de los procesados la asumirán los defensores de oficio, quienes ejercen el cargo de forma gratuita y su designación es por rotación entre los abogados de la localidad y en su defecto los egresados de Derecho.

Así pues, la defensa de oficio, tal y como está regulada en la LOPJ, es complementaria de la Defensoría Pública.

Respecto a los defensores de oficio, es oportuno señalar, que dado que la CSJ no ha extendido la defensoría pública a los demás departamentos, la mayoría de los jueces recurren al nombramiento del defensor de oficio para el reo que no tiene recursos para pagar un defensor particular, sin embargo, lo que sucede en la mayoría de los casos es que el reo tiene un defensor desde el punto de vista formal y no material, debido a que los abogados nombrados en la mejor de las situaciones llevan la defensa de forma pasiva, priorizando la atención a "las defensas privadas", es decir, a los casos por los cuales devengan honorarios¹¹².

¹¹² La Prensa, "Abogados de oficio negligentes" edición julio 2001. También en "Clamores independentistas de justicia" (edición 30 de julio del 2001).

d.2. Ministerio Público

La Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP)¹¹³ instituye la carrera fiscal en Nicaragua. El Ministerio Público, tal y como está configurado en su ley, goza de independencia institucional, orgánica, funcional y administrativa, actúa por su propio impulso cuando tiene conocimiento de la existencia de un hecho delictivo, sin necesidad que otro ente del Estado se lo requiera, ya que es su responsabilidad ejercer la acción penal en los casos previstos en la ley (art. 10 de LOMP). De esta manera se pretende el nombramiento de crea un Fiscal General independiente y separado del Procurador de Justicia. Fiscal que ha de ser nombrado, junto al Fiscal Adjunto, por la Asamblea Nacional de la lista de candidatos que presente el presidente y los diputados de la Asamblea, para un periodo de cinco años.

Son requisitos para ser Fiscal General y Fiscal General Adjunto los siguientes:

1. Ser nacional, los que hubieren adquirido otra nacionalidad deberán haber renunciado a ella al menos cuatro años antes de la fecha de la elección.
2. Ser abogado de moralidad notoria, haber ejercido la profesión por lo menos durante diez años o haber sido magistrado del tribunal de apelaciones durante cinco años.
3. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
4. Haber cumplido treinta y cinco años de edad y no ser mayor de setenta y cinco años el día de su elección.
5. No haber sido suspendido en el ejercicio de la abogacía y del notariado por resolución judicial firme.
6. No ser militar en servicio activo, o siéndolo haber renunciado por lo menos doce meses antes de la elección.
7. Haber residido en forma continuada en el país los cuatro años anteriores, salvo que durante dicho periodo cumpliera misión diplomática, trabajare en organismos internacionales o realizare estudios en el extranjero.

¹¹³ Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 196, "Ley Orgánica del Ministerio Público" de 17 de octubre del 2000

La LOMP establece los principios que deben regir esta institución: su función, representación, forma de organización, estructura y vinculación con entidades públicas, como la Policía Nacional y con los particulares.

Los principios que rigen al Ministerio Público son: el principio de independencia y autonomía (artículo 1 y 6 de la LOMP); el principio de especialización (art. 2 de la LOMP), el principio de indivisibilidad (art. 3 de la LOMP), principio de unidad de acción y jerarquía (art. 4 de la LOMP), principio de legalidad y objetividad (art. 5 de la LOMP), principio de vinculación (art. 7 de la LOMP), principio de obligatoriedad y oportunidad del ejercicio de la acción penal, principio de responsabilidad (art. 8 de la LOMP).

Entre las atribuciones más importantes del Ministerio Público cabe mencionar la promoción de la investigación y persecución de los delitos; recepción y remisión de las denuncias; el ser destinatario de las investigaciones penales y ejercer la acción penal en los delitos de acción pública.

La estructura del Ministerio Público¹¹⁴ está compuesta por:

- a) En el área sustantiva el Ministerio Público está integrado de la siguiente forma: (art. 11 y 12 de la LOMP y art. 15 del RI.LOMP¹¹⁵)
 - 1. El Fiscal general de la República
 - 2. El Fiscal general Adjunto
 - 3. El inspector general
 - 4. Fiscales departamentales y de las regiones autónomas de la Costa Atlántica

¹¹⁴ Véase Anexos XIII y XIV relativos a la estructura del área sustantiva, órganos de apoyo y área administrativa del Ministerio Público.

¹¹⁵ Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 14, "Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público" de 19 de enero del 2001 y reformado el día 13 de julio del 2001 (La Gaceta, Diario Oficial N° 133, "de la reforma al Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público").

5. Fiscales auxiliares
6. Fiscales especiales

Órganos de apoyo (15 del RI.LOMP)

1. Asistencia ejecutiva
 2. Secretaría ejecutiva
- b) El área administrativa está integrada por (art. 11 y 12 de la LOMP y art. 15 del Reglamento de la LOMP):
1. Unidad administrativa y financiera
 2. Auditoría interna
 3. Unidad de capacitación y planificación

La creación legal del Ministerio Público en Nicaragua constituye un gran avance, pese a que aun se está en espera del nombramiento del fiscal general y fiscal general adjunto¹¹⁶, lo que hace que actualmente, no exista una separación entre las funciones del procurador¹¹⁷ y el fiscal, lo que crea un conflicto de intereses que pone en evidencia la falta de independencia del Poder judicial frente al Poder Ejecutivo¹¹⁸.

¹¹⁶ Al respecto, La Prensa "Fracasa elección de Julio César Gámez como fiscal", edición de 5 de octubre del 2001, pág. 3 A.

¹¹⁷ La Procuraduría General de Justicia está adscrita al Poder Ejecutivo y según su Ley Orgánica (Decreto 36, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial Nº 5, de 31 de agosto de 1979) tiene la representación legal del Estado en lo que respecta a los intereses y a las materias determinadas por la Ley. El Procurador es nombrado por el Poder Ejecutivo, por lo tanto, no existe ningún tipo de dependencia jerárquica en relación con el Poder Judicial.

¹¹⁸ En sentido parecido, David R. Dye, *Retazos de Democracia* 2000 24 A.

SITUACIÓN DEL JUEZ, FISCAL Y DEFENSOR PÚBLICO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA

a) *Descripción cuantitativa (véase anexo XV)*b) *Mecanismos de injerencia en el sistema de justicia.*

b.1 Formales

El solo hecho de que los Magistrados de la CSJ sean nombrados por la Asamblea Nacional, el poder político por excelencia, determina una cierta intromisión, durante y después del nombramiento, por parte de los partidos políticos¹⁹ y, principalmente, del Poder Ejecutivo que, como ya hemos apuntado, tiene facultad de presentar las temas para la elección, si bien esto no debería influenciar las decisiones judiciales, en tanto, como retóricamente se ha dicho, los jueces y magistrados sólo deben obediencia a la Constitución Política y a las demás leyes de la República, la realidad nos demuestra lo contrario, como una muestra de ello, y aunque luego nos ocupemos con mayor detalle, podemos citar el caso del ex Director General de Ingresos, el Sr. Byron Jerez, cuya sentencia absolutoria a su favor se atribuye a influencias del Poder Ejecutivo.

El caso más reciente donde también se atribuye influencia del Poder Ejecutivo es el del recurso de amparo interpuesto por el Alcalde de Managua como un medio para paralizar la venta de una de las empresas más lucrativas del Estado, la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), este recurso fue rechazado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, valga decir que el mecanismo utilizado para su integración se encuentra cuestionado por ser absolutamente anómalo, y

¹⁹ Sobre como el Partido Liberal Sandinista de 1999 ha partidizado, entre otros poderes, el Poder Judicial véase David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 7 ss., también en La Prensa, "Sandinistas controlan tribunales" edición de 11 de junio del 2001, este reportaje se dice que según fuente de la Corte Suprema de Justicia el 93% de la justicia nicaragüense en materia penal es controlada por los sandinistas, mientras el partido liberal tiene mayoría en la Corte Suprema de Justicia.

ha sumido al Poder Judicial en la peor crisis de su historia¹²⁰

b.2 No formales

Veanse las intromisiones señaladas en los casos relevantes.

b.3 Casos relevantes

Cabe señalar que los casos relevantes que se van a exponer a continuación, son los casos más recientes, y por lo tanto, no se es exhaustivo en cuanto a la cantidad de ellos.

En el Poder Judicial:

El caso Byron Jerez: en el mes de marzo del año 2000 una investigación del diario «La Prensa» publicó la noticia, soportada documentalmente, de que el entonces Director General de Ingresos, miembro del consejo directivo de varios entes descentralizados del Estado y tesorero del partido gobernante, el Sr. Byron Jerez, realizaba actividades fraudulentas en perjuicio del Estado. La investigación se centró en un caso ocurrido en la Dirección General de Ingresos (DGI) y reveló que esta institución acostumbraba solicitar la emisión de cheques de instituciones gubernamentales -entre ellas, INISER y PETRONIC- a cambio de notas de crédito, cuyos montos eran posteriormente deducidos de las declaraciones tributarias¹²¹. A través de este proceder también se veía beneficiado un hermano del Director General de Ingresos el Sr. Gerold Jerez que aparecía como propietario de varias empresas “fantasmas”, con sede en Miami, que eran las que

¹²⁰ Sobre la trascendencia de esta crisis, consúltese, La Prensa, “Se agudiza crisis de la Corte”, edición de 9 de octubre del 2001, pág. 11^a, en el mismo sentido, La Prensa, “Estalla crisis en la Corte”, edición de 4 de octubre del 2001, página principal; La Prensa, “Crisis en la Suprema motiva sesión plenaria”, edición de 8 de octubre del 2001, pág. 12 A; La Prensa, “Jurista urge poner fin a crisis de CSJ”, edición de 6 de octubre del 2001, pág. 6 A. Aunque esta crisis no ha sido aceptada por el Presidente de la CSJ, consúltese, La Prensa, “Plata nueva crisis en la Corte”, edición de 13 de octubre del 2001, pág. 7 A.

¹²¹ Así en el Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 2000, Pág. 26.

recepccionaban los cheques emitidos¹²². Sólo en el caso de PETRONIC, la DGI tuvo que admitir una lista de 14 de estos cheques, por un monto de 6,3 millones de córdobas. Los cheques habían sido emitidos a petición de la DGI a favor de las empresas mencionadas en concepto de notas de crédito.

Toda esta investigación, revelada por «La Prensa», llegó a manos de la Contraloría General de la República cuya actuación, como ya lo apuntáramos al inicio de este trabajo constituye un verdadero termómetro de la institucionalidad del país, dejó mucho que desear, ya que, en una votación apretada de tres votos a favor y dos en contra, los contralores recomendaron la destitución de Byron Jerez y la imposición de una multa (equivalente a seis meses de salario), absteniéndose de establecer presunciones de responsabilidad civil y penal en el caso concreto¹²³, aduciendo que en el caso de análisis no se habían presentado pruebas suficientes que condujeran a tal presunción¹²⁴. La opinión pública por su parte¹²⁵, y los países donantes también¹²⁶, expresaron su descontento con la resolución, pues la inmovilidad de los funcionarios de la contraloría parecía estar dirigida a demostrar la inexistencia de delito alguno¹²⁷. Pocos días antes del pronunciamiento de la Contraloría General de la República la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional presidida por el dipu-

¹²² Cfr. David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 23, también el Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 2000, Pág. 26.

¹²³ Al respecto, *La Prensa*, edición del miércoles 7 de junio del 2000.

¹²⁴ En este sentido, David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 23, también el Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 2000, Pág. 26, donde el organismo mencionado expresa su más enérgica protesta en contra de la resolución de la Contraloría General de la República. En esta línea el diario *La Prensa* calificaba la resolución como una "dura" al pueblo nicaragüense; cfr. edición número 22033 del 8 de junio del 2000.

¹²⁵ La opinión pública (según encuesta telefónica realizada por el diario *La Prensa*, publicada en la edición número 22032 del 7 de junio del 2000, con una muestra de 724 participantes) mantenía en un 35,4% que la Contraloría encontraba presunción de responsabilidades penales y un 25,9 % que optara por la responsabilidad administrativa.

¹²⁶ *La Prensa*, "Donantes insatisfechos", edición número 22035 del sábado 10 de junio del año 2000.

¹²⁷ David R. Dye, *Retazos de Democracia*, 2000, 23, Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 2000, Pág. 27.

tado Dr. Víctor Manuel Talavera Huete, había recomendado la destitución del Sr. Jerez y el sometimiento del caso al Ministerio Público (en ese entonces Procuraduría General de la República) para la tramitación del juicio respectivo en materia penal¹²⁸; en relación con el papel del Ministerio Público en este caso véase *infra*.

Con posterioridad al pronunciamiento de la Contaduría, Rafael Córdova Álvarez, ex - Director de Probidad del mencionado órgano, interpuso una denuncia en contra de Byron Jerez por el delito de Fraude, en el Juzgado I de Distrito del Crimen a cargo de la entonces Jueza Primero de Distrito del Crimen (ahora Magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua) Msc. Martha Quezada Saldaña, pero ésta fue recusada y la causa fue remitida al Juez II de Distrito del Crimen a cargo del Lic. Walter Solís, quien sumariamente y sin mayores trámites dictó sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de Byron Jerez. Contra la aberrante decisión fue presentada una queja ante la Comisión de Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia la que ordenó su separación del cargo¹²⁹, aunque, como bien lo señala el Magistrado español Fernando de Rosa, si en Nicaragua la justicia se aplicara como en España, “el juez Solís tendría garantizada la anulación absoluta del fallo y unos cuantos años de prisión”¹³⁰.

El caso Carrión McDonough: según versiones de testigos que presenciaron los hechos, Alejandro Carrión McDonough, hermano del General de Ejército de Nicaragua dio tres disparos de fusil AK al campesino (y además vecino suyo) Pablo Leal Aguirre el 26 de mayo, en La Comarca La Francia (Ticuantepe) causándole la muerte. Luego de lo sucedido se autodenunció en el Juzgado Octavo de Distrito del Crimen de Managua.

¹²⁸ Véase el informe del 31 de mayo del año 2000, sobre las emisiones de notas de crédito y cheques, emitidos por la Dirección General de Ingresos (DGI), dictaminado por la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional. También la edición número 22026 del diario La Prensa del jueves 1 de junio del año 2000.

¹²⁹ La Prensa “Corte Suprema separa de su cargo al Juez Solís”, edición número 22080 del martes 25 de julio del año 2000.

¹³⁰ Así en La Prensa “Juez Solís estaría preso si la justicia se aplicara como en España”, edición número 22090 del 4 de agosto del año 2000.

Llevado el caso ante los tribunales, en concreto ante el Juzgado Segundo de Distrito del Crimen de Managua presidido en ese momento por el ya conocido Juez Lic. Walter Solís, el juicio estuvo plagado de irregularidades, entre ellas la suscripción de un documento en el que la viuda de la víctima aceptó CS 100,000 córdobas (\$ 7,400 dólares aproximadamente) a cambio de renunciar a acusar a Carrión. Luego de realizadas las investigaciones del caso, el Juez Solís dictó sentencia en la que sobreseía definitivamente al procesado, fundamentada en la existencia de una legítima defensa por parte de Carrión¹¹.

Posteriormente, esta sentencia fue confirmada por el Tribunal de apelaciones de Managua y por la Corte Suprema de Justicia respectivamente a favor del Sr. Alejandro Carrión McDonough. El argumento de la Sala Penal de la Corte para confirmar el sobreseimiento definitivo es que *"al momento de dictarse la sentencia no existía legalmente constituida parte acusadora que pudiese interponer válidamente el recurso de apelación"*¹².

Ante el agotamiento de todas las vías judiciales, la familia de Pablo Leal presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por habersele negado el acceso a la justicia¹³.

El caso Fabiola Betancourt: La Lic. Betancourt quien se desempeña como Juez local de lo Civil del Municipio de Granada, según nos hizo saber la propia afectada, un día de tantos recibió llamadas telefónicas de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia interesados en la causa de un amigo en común y que en ese momento tenía un importante cargo en un Ministerio de Estado. Las llamadas en cuestión tenían por objeto recomendar "flexibilidad en la apreciación de los hechos" y condescendencia para con el "amigo" de los Magistrados, naturalmente que la Juez

¹¹ La Prensa "Juez Solís sobrese a Carrión", edición número 22060 del miércoles 5 de julio del año 2000.

¹² Sobre esta sentencia consúltense: La Prensa, "Carrión sobreseído definitivamente", edición de 8 de septiembre del 2001, pág. 5 A.

¹³ Así era: La Prensa "Caso Carrión a CIDH", edición de 11 de septiembre del 2001, pág. 7 A; también, La Prensa, "Familia de Leal pedirá justicia fuera del país", edición de 12 de septiembre del 2001, pág. 9 A.

Betancourt, con una conducta excepcional y fuera de lo común, resistió las presiones de sus superiores, procedió a fallar conforme a Derecho y a denunciar a quienes quisieron torcer la espada de la justicia. Esperamos que la Lic. Betancourt no sea una víctima más de los ya conocidos telegramas de despido.

El caso Mena Cuadra: Se trata de las presiones y amenazas telefónicas en contra de la Juez Adela Cardoza, Juez Cuarto Local del Crimen de Managua, por parte de funcionarios vinculados a la Presidencia de la República, éstas llamadas tenían el objeto de intimidar a la Juez Cardoza para condicionar la resolución que se tramitaba en su juzgado en contra del Sr. Eduardo Mena Cuadra, amigo del Presidente, por el delito de amenazas incondicionales en contra del diputado Leonel Teller.

El veintiséis de julio del presente año, la Juez Cardoza condeno al Sr. Mena a cinco meses con quince días de arresto y multa de setenta córdobas (aproximadamente, cinco dólares) a favor del fisco. Esta sentencia fue revocada a favor de Mena por la Juez superior jerárquica de la Juez Cardoza, quien a la vez consignó en su sentencia un llamado e atención para Cardoza. Por su parte, el diputado Teller¹³⁴ –quien interpuso la denuncia contra Mena– manifestó que “el fallo fue dictado a como se lo pidió Alemán (refiriéndose a la Juez superior).

El caso más reciente, es el caso de ENITEL en el que el señor **Herty Lewites Rodríguez**, en su carácter de Alcalde de Managua interpone el día treinta de agosto del año dos mil Recurso de Amparo en contra el señor Presidente de la República de Nicaragua, **Arnoldo Alemán Lacayo**, y Presidente de la Junta Directiva de ENITEL, **Salvador Quintanilla Vanegus** en base a las siguientes consideraciones:

¹³⁴ Sobre este caso, consúltese, La Prensa, “Absuelven a Mena y amonestan a juez”, edición de 18 de septiembre del 2001, pág. 10 A. La Prensa, “Teller acusa de irregularidades a jueza Chevez”, edición de 7 de agosto del 2001, pág. 6 A.

- 1) Que la enajenación que se quería realizar del cuarenta por ciento (40%) de las Acciones de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones tenían un valor aproximado de ciento ochenta millones de dólares (US\$ 180,000,000.00) y no sesenta y nueve millones de dólares (US \$69,000,000.00) como estaba supuesto a realizarse
- 2) Que la Junta Directiva de ENITEL ha incumplido con la Ley 210 y sus reformas contenidas en las leyes 293 y 389 por haber omitido la publicación de la invitación pública a la precalificación y al acto de licitación en sí.
- 3) Que por no haberse publicado debidamente, se ha incurrido en violación Constitucional de los artículos 4, 32, 52, 103, 105, 130, 155, 160, y 183 Cn.
- 4) Que los oferentes precalificados no reúnen los criterios de clasificación de inversionistas, así como tampoco se le ha brindado la participación a la Contraloría General de la República (Arto 155Cn y Arto 3 Inc. 9 de Ley Orgánica de la Contraloría)
- 5) Que estima agotada la vía administrativa en vista de que la ley no establece recurso administrativo alguno para impugnar el proceso de licitación.

El Tribunal de Apelaciones ante la solicitud formal de la interposición de Recurso de Amparo y la solicitud de suspensión de oficio del acto, resuelve¹³⁵: 1) Dar trámite al Recurso de Amparo, 2) Decretar de oficio y de manera provisoria la suspensión del acto¹³⁶; 3) Concede intervención de Ley al Señor Herty Lewites, 4) Pone a su conocimiento la causa al Procurador General de Justicia; 5) Envía un oficio al Presidente de la República

¹³⁵ En su resolución de las nueve de la mañana del día treinta y uno de Agosto del presente año (un día después de la interposición) el Tribunal de Apelaciones (cuya sentencia es firmada sólo por los Magistrados Gerardo Rodríguez y Lilia Molina, absteniéndose de ello la Magistrada Perla Amador)

¹³⁶ En atención al arto. 32 de la ley de Amparo que dice: "Procederá la suspensión de oficio cuando se tratara de algún acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, o cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpusiere el Recurso" o cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legítimamente"

y al Presidente de la Junta Directiva de ENITEL, para que remitan informe a la Corte Suprema de Justicia en el término de diez días, 6) Remite los autos a la Corte Suprema de Justicia para su análisis del fondo del asunto.

Durante el acto público de adjudicación de la empresa ganadora de la Licitación del 40% de las acciones de ENITEL, el Ejecutivo omite la suspensión decretada por el Tribunal de Apelaciones¹³⁷ y no detiene la venta de ENITEL, con la justificación de que la Sala del Tribunal había sido mal constituida¹³⁸.

El Tribunal de Apelaciones remite los autos a la Sala de lo Constitucional que es la competente para conocer del fondo del Recurso (Arto. 34 LOPJ). Estando el Expediente del Recurso en Secretaría de la Sala Constitucional, un magistrado substrahe el expediente y lo retiene.

No obstante, ante la ausencia de 4 de los 8 magistrados que componen la Sala de lo Constitucional y de acuerdo al arto 37 num. 10 LOPJ, la presidente de la sala constitucional llama a dos miembros de otras salas (ambos de filiación liberal) a formar quórum¹³⁹ para resolver el recurso de amparo N° 144-2001 interpuesto por el Alcalde de Managua, utilizando para el caso, una

¹³⁷ Al respecto véase: La Prensa, "Academización de ENITEL", edición de 6 de septiembre del 2001, pag. 5 A.

¹³⁸ Lo que dio lugar a una denuncia por desacato contra los directivos de ENITEL, consúltase: La Prensa, "Admten: denuncia contra ENITEL", edición de 7 de septiembre del 2001, pag. 6 A. Al respecto: La Prensa, "Paralizan juicio por desacato contra ENITEL", edición de 12 de septiembre del 2001, pag. 9 A.

¹³⁹ Quórum que fue cuestionado fuertemente, ya que según el art. 160 de la Constitución, en caso de ausencia, excusa, aplicación o recusación de cualquiera de los magistrados ya sea para integrar Corte Plena o alguna de las salas, deberán ser llamados a integrarla los CONJUECES. Sin embargo, estos todavía no han sido nombrados por la Asamblea Nacional.

Al no haber conjueces, y con la existencia del Arto. 18 LOPJ que establece que: "Los Jueces y Tribunales deben resolver siempre sobre las pretensiones que se les formaren, no pudiendo excusarse alegando *vicio o deficiencia de normas* [...]"; la presidenta de la sala hace uso del Arto. 110 LOPJ, para conformar la sala. "En caso de impedimento de parte de uno o mas Magistrados de los Tribunales, se procederá a integrar Sala con los Magistrados suplentes pertenecientes a las otras Salas." Véase: los comentarios al respecto en La Prensa, "CSJ da luz verde a venta de ENITEL", edición de 10 de septiembre del 2001, pag. 6 A.

certificación del Cuaderno de la Sala librada por el Secretario al no estar disponible el expediente por haber sido supuestamente retenido por un magistrado titular de la sala¹⁴⁰.

Así pues, el dieciocho de septiembre del 2001, la Sala Constitucional, constituida con los dos magistrados suplentes decide mediante la sentencia 161¹⁴¹: a) declarar nulo todo lo actuado por el Tribunal de Apelaciones, por haber sido dictado por dos Magistrados de una sala que debía estar integrada por tres, b) recusar a los dos Magistrados del Tribunal de Apelaciones dejando a salvo las acciones que la parte recurrente pueda interponer en contra de dichos Magistrados y todo "sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria que puedan derivar del interés manifiesto de parte de los Magistrados (...)"¹⁴², c) rechaza de plano, por ser notoriamente improcedente el Recurso de Amparo, basándose en que:

- ❖ El recurrente reconoce el conocimiento de la licitación del 40% de las acciones de ENITEL.
- ❖ La invitación pública se realizó de conformidad con lo que establece la Ley No. 389, transcurriendo más de 30 días para que el supuesto agraviado pudiese oponerse a dicha licitación, de tal manera que se presume consentido el acto de la licitación, por haber transcurrido mas de 30 días en que debió, si lo creyó conveniente, interponer el Recurso de Amparo.
- ❖ Las supuestas inconstitucionalidades de las leyes deben ser atacadas por la vía del recurso por Inconstitucionalidad.

¹⁴⁰ Al respecto, véase, las declaraciones del Dr. Rafael Solís en: "La Prensa, "Admiten denuncia contra ENITEL", edición de 7 de septiembre del 2001, pag. 6 A.

¹⁴¹ Sobre la polémica causada por esta sentencia, véase: "La Prensa, "Polémica por resolución de la Corte en caso ENITEL", edición de 20 de septiembre del 2001, pag. 9 A.

¹⁴² Como consecuencia de esta resolución los Magistrados del Tribunal de apelaciones de Managua, Gerardo Rodríguez y Lilia Molina fueron acusados por prevaricato conforme al artículo 371 del Código Penal, consúltese, "La Prensa, "ENITEL, nuevo o mejoramiento", edición de 27 de septiembre del 2001, pag. 12 A.

De esta forma se deja firme el proceso de licitación y venta de ENTTEL¹⁴¹. sin embargo, llamó la atención que la sala no se pronunciara sobre la actuación del Ejecutivo al incumplir éste la resolución del Tribunal de Apelaciones¹⁴².

Ante la Resolución 161¹⁴³, el día veintuno de septiembre del 2001, la Alcaldía interpone un Recurso de revisión considerando que hubo nulidad absoluta de procedimiento e interpone un incidente de recusación por implicancia contra los magistrados que dictaron la sentencia antes citada.

Este recurso fue resuelto el día dos de octubre del 2001 (Sentencia 162), por la Sala de lo Constitucional conformada con lo mismos magistrados suplentes quienes resuelven dejar sin efectos el recurso de reposición introducido por el Alcalde en contra de la resolución 161¹⁴⁴. No obstante, recientemente, la constitución de la sala ha sido modificada y se está pensando en reconsiderar esta última resolución¹⁴⁵.

Al margen de las irregularidades que se han dado durante el proceso, la Contraloría por su parte investiga la corrupción en ENTTEL¹⁴⁶.

¹⁴¹ Sentencia notificada el dieciocho de septiembre del dos mil uno. Véase, Cédula Judicial, publicada en campo pagado en La Prensa, edición de 20 de septiembre del 2001. Comentarios sobre esta sentencia pueden leerse en La Prensa, "CSJ da luz verde a venta de ENTTEL", edición de 19 de septiembre del 2001, pag. 16 A.

¹⁴² La Prensa, "Venta secreta de ENTTEL", edición, 1 de septiembre del 2001, página principal.

¹⁴³ El alcalde Leantes antes de interponer el recurso de revisión contra esta sentencia declaró que si los directivos de ENTTEL se sientan a negociar con el la deuda que esta institución tiene con la Alcaldía, "con gusto retribuirá la demanda" (La Prensa, "Contraversia en la Corte por reposición de ENTTEL", edición de 21 de septiembre del 2001, pag. 8^a.)

¹⁴⁴ Es oportuno señalar, que tanto la sentencia 161 como la 162 emitidas por la Sala Constitucional han llevado a la Corte a una crisis debida a que se desmora la validez de dichas resoluciones al ser consideradas **una nada jurídica**, ya que según algunas declaraciones de los magistrados la improvisación del quórum las hace nula. (La Prensa, "Se agudiza crisis en la Corte", edición del 9 de octubre del 2001, pag. 13^a.)

¹⁴⁵ Titulares como "ENTTEL vuelve a la picota en la CSJ" (La Prensa edición del 30 de octubre del 2001, pag. 13^a) lo sugieren claramente.

¹⁴⁶ Véase, La Prensa, "Contraloría investiga corrupción en ENTTEL", edición 28 de agosto del 2001.

En el Ministerio Público

Aparte de que resulta absolutamente llamativa la opinión del Fiscal General por la ley Dr. Julio Centeno Gómez que, en el caso "Byron Jerez", expresó que el Ministerio Público, como representante del Estado y la sociedad nicaragüense, no se sentía ofendido¹⁴⁹, es decir, que no ejercería ninguna acción judicial para tratar de encontrar la verdad material acerca de si se había cometido delito, es de destacar la evidente despreocupación de este órgano ante las reiteradas denuncias de enriquecimiento ilícito del Presidente Dr. Arnoldo Alemán.

Otro tanto ha sucedido con las anomalías presentadas en la privatización del Banco Nicaragüense (BANIC) por 11 millones de dólares cuyas acciones fueron compradas, supuestamente, por inversores centroamericanos ligados a un amigo íntimo del Presidente Alemán el Sr. Donald Spencer, quien no hace mucho tiempo era uno de los directores del mencionado banco. Ni qué decir tiene la ausencia de persecución penal en una gran cantidad de licitaciones públicas en las que también se han visto beneficiados más amigos del Presidente.

Contrariando los precedentes señalados, el Ministerio Público sí que ha ejercido la acción penal cuando se trata de casos que evidencian un claro interés partidista: así, se apresuró a presentar la correspondiente acusación en contra de dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua, afiliados al partido de la oposición, que declararon con lugar la tramitación del recurso de amparo interpuesto por el Alcalde de Managua en el caso Enitel, pues la actuación de estos magistrados, al suspender cualquier acto administrativo, traía como consecuencia que la licitación pública que se realizaría el mismo día del pronunciamiento no tuviera ninguna validez, afectando así, además de los intereses de algunas transnacionales, los intereses del Poder Ejecutivo.

¹⁴⁹ Véase la edición número 22045 del diario *La Prensa* del martes 20 de junio del año 2000.

Esta posición beligerante por parte del Ministerio Público, también fue evidente cuando el concejal de la Alcaldía de Managua Sr. Pedro Pablo Aguilar, acusó de desacato a los directivo de ENTEL, por licitar la empresa a pesar del fallo del Tribunal de Apelaciones¹⁰⁰.

¹⁰⁰ La Prensa, "Fiscalía: no hay desacato en ENTEL," edición de 11 de septiembre del 2001, pag. 7 A.

CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA JUDICIAL DEMOCRÁTICO EL DERECHO DE ASOCIACIÓN

d) Normativa nacional e internacional (tratados internacionales ratificados) referente al derecho de asociación y al de sindicalización de los jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos

a.1. Limitaciones o restricciones para jueces, magistrados, fiscales y defensores

La Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley Orgánica del Poder Judicial no contienen ninguna disposición relativa al derecho de asociación de jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos; por el contrario, la concesión de este derecho se encontraría de forma implícita, y por exclusión¹⁴¹, en varias normas constitucionales; así en el artículo 49 se garantiza a todos los nicaragüenses el derecho de constituir organizaciones, sin discriminación alguna, a fin de lograr la realización de sus aspiraciones y participar en la construcción de una nueva sociedad¹⁴². Por otra parte, el hecho de que los jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos, sean funcionarios al servicio del Estado y de la sociedad, no por ello pierden su naturaleza como trabajadores ni los derechos inherentes a los mismos, en tal sentido no estaría al margen del Derecho la formación y pertenencia a una organización que pretenda hacer valer sus reivindicaciones de carácter laboral y gremial, en tanto se encontraría

¹⁴¹ En concordancia con lo establecido por el 32 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, a saber: "Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe".

¹⁴² Artículo. 49. "En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las comunidades de la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación alguna, con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad.

Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y podrán o no tener carácter partidario según su naturaleza y fines". Es en este artículo en el que se ampara la constitución de la "Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua" (AJUMANIC). Cfr. el artículo 1 de los Estatutos de la mencionada asociación.

amparado por el derecho a la libertad sindical establecido por el artículo 87 de la Constitución Política de la República¹⁵⁴.

Además de las normas constitucionales relacionadas en el párrafo anterior, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo referido a las incompatibilidades¹⁵⁵ y en el que trata de las prohibiciones¹⁵⁶, de los cargos de Juez y Magistrado no se incorporan restricciones al derecho constitucional de asociación y libertad sindical, más aún, el artículo 142 que consagra los derechos de jueces y magistrados, señala expresamente, en el apartado ocho, que los mismos han de "gozar de todos los derechos y beneficios establecidos en la legislación laboral vigente"¹⁵⁶, como sabemos, uno de los derechos básicos en materia laboral es el de asociación y libertad sindical.

Las consideraciones anteriores, en lo que al ámbito normativo se refiere, son aplicables también a los funcionarios del Ministerio Público y de la Defensoría Pública.

Cuestión distinta es lo que, al margen de las formalidades propias de la Ley, pueda acontecer en la realidad cotidiana de los juzgados y tribunales de la República, muestra de ello es que, a pesar de los múltiples esfuerzos de algunos jueces y magistrados, todavía hoy no se cuenta con una asociación que los aglutine. Más complicadas, si cabe, se presentan las cosas en el ámbito de las recién creada Defensoría Pública y en la inminente transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía.

¹⁵⁴ Artículo. 87. "En Nicaragua existe plena libertad sindical. Los trabajadores se organizarán voluntariamente en sindicatos y estos podrán constituirse conforme lo establece la ley.

Ningún trabajador está obligado a pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena autonomía sindical y se respeta el fuero sindical".

¹⁵⁵ Véase el artículo 141 LOPJ.

¹⁵⁶ Artículo 144 LOPJ.

¹⁵⁶ Cfr. artículo 142 y LOPJ.

a.2. De los requisitos legales para constituir una asociación

Tal y como se ha expresado anteriormente la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público, no se refieren expresamente al derecho de asociación y al de sindicalización de los jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos, lo que sí queda claro, al menos en lo que a jueces, magistrados y defensores públicos se refiere, es la incompatibilidad de sus cargos con el ejercicio de cualquier otro cargo, empleo o profesión retribuida¹⁵⁷, y con las funciones de Director, Gerente, Administrador, Consejero, o cualquier otra que implique administración directa, en sociedades o empresas mercantiles públicas, de cualquier género¹⁵⁸; de esta manera, la única forma de asociación en la que podrían participar, sea como directivos, sea como miembros activos, es en las personas jurídicas sin fines de lucro establecidas conforme lo establece la Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992¹⁵⁹.

De acuerdo con la ley antes mencionada, cualquier asociación que pretenda establecerse en Nicaragua debe necesariamente cumplir con los siguientes requisitos:

1. Que el acto constitutivo de la misma deberá ser otorgado en escritura pública con el concurso mínimo de cinco personas capaces de obligarse¹⁶⁰. En dicha escritura deberán consignarse: la naturaleza, objeto, finalidad y denominaciones de la entidad que se constituye, así como el nombre, domicilio y demás generales de Ley de los asociados y fundadores; la sede de la Asociación y lugares donde desarrollará su actividad; el nombre de su Representante o Representantes y el plazo de duración de la Persona Jurídica¹⁶¹.

¹⁵⁷ Salvo cargos académicos, docencia o investigación jurídica, las actividades y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de estas. Cfr. artículo 141.5 LOPJ.

¹⁵⁸ Artículo 141. 8 LOPJ

¹⁵⁹ Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de 1992.

¹⁶⁰ Artículo 3. Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992

¹⁶¹ Artículo 8. Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992

2. La solicitud de concesión de personalidad jurídica de la asociación deberá ser firmada y presentada por uno o varios Representantes ante la Asamblea Nacional¹⁶².
3. La Personalidad Jurídica será otorgada y cancelada por Decreto de la Asamblea Nacional. Los respectivos decretos al igual que los Estatutos de las Asociaciones deberán ser publicados en La Gaceta, Diario Oficial e inscribirse en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación^{163, 164}.

b) Asociaciones existentes en el país (con personalidad jurídica y asociaciones de hecho)

Si bien algunos jueces y magistrados consultados hablan de que en la década de los años ochenta y aún a inicios de los noventa, se dieron algunos intentos de crear una asociación de jueces y magistrados, con miras sobre todo al establecimiento de condiciones y estabilidad laboral, es hasta el 22 de julio de 1994 cuando un grupo de jueces de Managua que "inspirados en el principio de unidad y armonía que debe existir en el Poder Judicial"¹⁶⁵, deciden conformar una Junta Directiva Provisional¹⁶⁶ que se en-

¹⁶² Además de las personas interesadas, uno o varios diputados ante la Asamblea Nacional deberán firmar y presentar ante el secretario de la misma la solicitud de concesión de personalidad jurídica de la asociación. Véase, artículo 7, Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992.

¹⁶³ Artículos 6 y 13 c), Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992.

¹⁶⁴ Según el artículo 12 de la Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992, una vez concedida la personalidad jurídica de la asociación esta podrá ejercer los derechos siguientes: a) Gozar de nombre o razón social, una vez inscrita la Persona Jurídica éste no podrá ser usado por ninguna otra; b) Gozar de Personalidad Jurídica desde la fecha de la publicación en La Gaceta, Diario Oficial, del Decreto de otorgamiento de Personalidad Jurídica por la Asamblea Nacional; c) Tener su propio patrimonio; d) Mantener oficinas de acuerdo con sus necesidades y e) Realizar publicaciones en relación con sus fines.

¹⁶⁵ Así en la entrevista de concedida a la Revista Justicia, por la entonces Juez Octavo de Distrito del Crimen de Managua Dra. Luz Amparo Caldera. Revista Justicia, No. 2/1995, pag. 4.

¹⁶⁶ Según el documento de trabajo redactado a raíz de la mencionada reunión la Junta Directiva Provisional estaba integrada por las siguientes personas: Luz Amparo Caldera, Juez Octavo de Distrito del Crimen (Presidencial); Susana del Rosario Altamirano López, Juez Sexto de Distrito del Crimen (Vice-Presidencial); Rosario Feralta Mejía, Juez Tercero Local del Crimen (Secretaría); Martha Lorrna Guzmán Saldaña, Juez Quinto de Distrito del Crimen (Tesorera); Julia Mayorga Solano, Juez Cuarto Local del Crimen (Primer Vocal); Eduardo Boza, Juez Segundo Local del Crimen (Segundo Vocal).

cargaría de llevar a buen término todos los esfuerzos antes realizados, fue así como el 29 de julio del año 1995, reunidos en el Centro de Convenciones Olof Palme, más de 200 jueces y magistrados de la República de Nicaragua firmaron la escritura de constitución de la primera Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC)¹⁶⁷. Sin embargo, a pesar de que se cumplió con todos los trámites establecidos en la Ley No. 147 de 19 de marzo de 1992, aún no se cuenta con la personalidad jurídica que autorice su legal funcionamiento y, parece ser, que por razones internas y "externas" de los propios asociados, no conviene instar tal concesión.

c) Descripción de las asociaciones existentes

Como hemos señalado, actualmente no existe ninguna asociación de esta naturaleza, ni de hecho ni legalmente constituida, que se encuentre activa, por alguna razón el intento más serio y decidido en este sentido se vio truncado, ni siquiera los propios miembros que promovieron la constitución de la asociación han sabido explicar de forma convincente el por qué no se insistió en reavivar el proceso de legalización de la asociación que se había constituido, algunos piensan que la razón de esta "apatía" se debe a que los integrantes de la misma no están dispuestos a que la lucha por el asociacionismo les cueste la poca estabilidad laboral a la que se han hecho merecedores, otros, no sin cierta desesperanza, señalan que lo más decisivo en esta carrera fugaz, y que determinó la paralización de todos los esfuerzos realizados, fue la separación del cargo de Juez de la doctora Luz Amparo Caldera, que en ese momento fungía como presidenta de la asociación, quizá por haber expresado que la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua garantizaría que ningún Juez fuera destituido por causas distintas a las establecidas en la ley¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Revista Justicia, n.º 2, 1995, pág. 4 ss. La creación de AJUMANIC fue calificada por el entonces Magistrado de la CSJ Enrique Villagra Morales como "un acontecimiento que marca un hito en la historia del Poder Judicial y uno de los más importantes logros de los últimos cinco años" Cfr. Revista Justicia N.º 2/1995, pág. 5.

¹⁶⁸ Cfr. Revista Justicia N.º 3/1995, pág. 4.

En ámbitos académicos se maneja que es la situación actual de la justicia, la organización y funcionamiento del Poder Judicial, la que impide y seguirá impidiendo la constitución y funcionamiento de cualquier asociación. Sería un precedente altamente peligroso que, en las condiciones actuales, una asociación de esta naturaleza, que actúa en el seno del propio Poder Judicial, cobrara una incidencia tal que pudiera condicionar el actual proceso de selección, nombramiento, promoción y remoción de los jueces y magistrados¹⁶⁹.

No quisiéramos sí reducir este trabajo a la simple expresión de que las condiciones en las que se desarrolla la realización de la justicia en Nicaragua es lo que impide cualquier intento de asociacionismo, ni mucho menos a expresar nuestro lamento sentido en este aspecto; por el contrario, creemos que lo que hemos llamado el intento más serio y decidido por el asociacionismo judicial en nuestro país se merece, como homenaje, que transcribamos aquí los aspectos centrales que debían regir la asociación.

c.1.) Principios y fines de la asociación

Según el artículo 2 de los Estatutos de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC), ésta debía constituirse como una organización civil y eminentemente gremial sin fines de lucro, cuyo nacimiento, organización y funcionamiento debía obedecer estrictamente a la Constitución y Leyes vigentes¹⁷⁰. Desde el punto de vista organizativo y funcional no debía tener credo político ni religioso y debía ser respetuosa del credo individual que sus miembros profesaran, siempre y cuando ésto no interfiriera en el desarrollo de la misma.

¹⁶⁹ Véanse al respecto los objetivos de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, en particular el artículo 3 de los Estatutos de la misma.

¹⁷⁰ Así en la entrevista concedida por la Dra. Luz Amparo Caldera, *Revista Justicia* N° 3/1995, pag. 5.

La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua perseguiría como fines primordiales los siguientes¹⁷¹:

1. Luchar por la total independencia del poder judicial, elemento indispensable para la instauración de un verdadero Estado Social de Derecho, premisa fundamental en un país donde prevalece la Democracia.
2. Promover la creación de una Ley de carrera Judicial, que norme y garantice el ejercicio de la Función Jurisdiccional como servicio público a los ciudadanos, en el marco de lo establecido por los artículos 159¹⁷², 165¹⁷³ y 167¹⁷⁴ Constitución.
3. Dirigir y orientar máximos esfuerzos hacia una capacitación integral, constante y permanente de todos sus miembros, acorde con las necesidades que en el ejercicio de sus funciones se presenten.
4. Dirigir acciones encaminadas al logro de una estabilidad real en el ejercicio del cargo, ingresos y promociones, contando para ello con la fortaleza y cohesión gremial necesaria.
5. Garantizar que las resoluciones judiciales sean producto única y exclusivamente, de la interpretación que para cada caso haga el funcionario, de la Constitución Política, los convenios internacionales en los que Nicaragua sea signatario y hayan sido ratificados y las leyes vigentes, propugnando así, una justicia cada vez más transparente.
6. Promover y estimular el hermanamiento, acercamiento y solidaridad, con asociaciones de la misma naturaleza, las que se encuentren debidamente constituidas conforme a las legisla-

¹⁷¹ Cfr. artículo 3 de los Estatutos de AJUMANIC. También la Revista Justicia N. 8/1995, pag. 4 ss.

¹⁷² Artículo 159 - Los tribunales de justicia forman un sistema unitario, cuyo órgano superior es la Corte Suprema de Justicia. El ejercicio de la jurisdicción de los tribunales corresponde al Poder Judicial. Se establece la jurisdicción militar, cuyo ejercicio es regulado por la ley.

¹⁷³ Artículo 165 - Los Magistrados y Jueces en su actividad judicial son independientes y sólo deben obediencia a la Constitución y la Ley se regirán, entre otros, por los principios de igualdad, publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua es gratuita.

¹⁷⁴ Artículo 167 - Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas.

ciones de sus países de origen, siempre y cuando, las mismas no soslayan nuestro ordenamiento jurídico, las que podrán ser de América Latina, Europa y otras latitudes del planeta, siempre y cuando persigan objetivos similares, en una línea de intercambio cultural, jurídico, de apoyo y solidaridad en la perspectiva de una profundización democrática. En este sentido la Asociación podrá recibir donaciones nacionales y extranjeras provenientes de tales organismos bajo una óptica de respeto mutuo.

7. Conquistar con el actuar individual y colectivo la confianza y el respeto ciudadano en el accionar de la justicia y de los jueces para resolver sus diferendos por los cauces civilizados del Derecho.
8. Promover la defensa de los intereses profesionales de sus asociados.

c.2. Cantidad de asociados

La escritura de constitución de la asociación fue firmada por 223 jueces y magistrados de la República de Nicaragua, aglutinaba a más del 90 % de los jueces y magistrados que en ese momento integraban el Poder Judicial.

c.3. Forma de participación de los asociados

La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, pretendía tener un ámbito de cobertura nacional, podrían afiliarse a ella todos los jueces y magistrados de la República que se encontraran en servicio activo dentro del Poder Judicial; para ello era necesario que los interesados llenaran las respectivas hojas de solicitud en la cabecera departamental de su jurisdicción. La directiva departamental de la asociación podría admitirla o rechazarla fundamentadamente sin que tal acontecimiento mermara el derecho del interesado a recurrir ante la Directiva Nacional⁷⁵.

⁷⁵ Artículo 4 de los Estatutos de AJUMAN?

Una vez aceptada la sociedad, el asociado, como no podía ser de otra manera, se hacía partícipe en la asunción de los derechos y obligaciones que derivaban de su afiliación, debía, entre otras cosas, respetar y cumplir los acuerdos adoptados, procurar y velar por el cumplimiento de los principios y objetivos de la asociación y amortizar cumplidamente la cuota periódica que fijara la Asamblea General¹⁷¹. Como correlativo a ello el asociado tendría derecho a participar en las Asambleas departamentales y/o nacionales con voz y voto; elegir y ser electo para cargos directivos mediante voto directo, personal, individual e indelegable y el de informar y ser informado de todo lo referente al funcionamiento de la asociación, tanto a través de asambleas como de informes escritos que al efecto fueran elaborados¹⁷².

c.4. Forma de integración de la Junta Directiva o similar

Según los Estatutos de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, todas las labores ejecutivas y de promoción de la asociación, además de la necesaria participación de los asociados, serían coordinadas y dirigidas por una Directiva Nacional conformada por un presidente y un secretario de organización que hará a su vez las veces de vice-presidente; un secretario de actas y acuerdos; un secretario tesorero, un secretario responsable de educación y formación y dos vocales¹⁷³. Para la elección de la Directiva Nacional cada departamento podrá proponer una lista de siete miembros de forma conjunta o podrá proponer uno para cada cargo por separado¹⁷⁴. Los siete miembros electos conformarían la Directiva Nacional en los cargos ya señalados por un periodo de dos años¹⁷⁵.

¹⁷¹ Artículo 5 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁷² Así el artículo 8 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁷³ Artículos 8 y 14 de los Estatutos de AJUMANIC. En caso de renuncia o falta definitiva del presidente de la Directiva ocupará su lugar el vicepresidente hasta terminar el periodo para el cual había sido electo. Si fuera otro miembro de la directiva el que faltare ocupará su lugar el primer vocal de la misma hasta terminar el periodo para el cual había sido electo. Cfr. Artículo 17 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁷⁴ Artículo 15 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁷⁵ Artículo 16 de los Estatutos de AJUMANIC.

c.5. Relación entre los diferentes órganos de las asociaciones

La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua estaría compuesta por cuatro órganos dependientes entre sí y conformados por los socios que la integran o por personas por ellos designadas, estos órganos son:

1. Una Asamblea General que se constituiría como máximo organismo de la asociación, estaría compuesta por la totalidad de los asociados¹⁸¹.
2. Una Asamblea de Delegados departamentales que estaría conformada por un delegado de cada departamento del país y la Directiva Nacional. Para formar quórum se haría necesaria la presencia de la mitad más uno de los delegados¹⁸². Esta Asamblea de Delegados departamentales debía reunirse por lo menos dos veces al año y reunirse periódicamente por lo menos cada seis meses¹⁸³.
3. Una Asamblea Departamental de afiliados que estaría conformada por todos los miembros afiliados de la asociación en el departamento correspondiente, estará integrada de la misma forma que la Asamblea General y presidida por una directiva departamental electa por el mismo período, pudiendo además conformar las comisiones de trabajo que de acuerdo a sus propias necesidades determine en asambleas departamentales de asociados.¹⁸⁴.
4. Y una Directiva Nacional que será la encargada de ejecutar los acuerdos tomados en Asamblea General apoyándose para ello en comisiones de trabajo que podrá estructurar con sus miembros asociados.

¹⁸¹ Artículo 8 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁸² Cada delegado ha de ser seleccionado por la Asamblea Departamental. (Cfr., artículo 12 de los Estatutos de AJUMANIC).

¹⁸³ Véase Artículos 8 y 12 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁸⁴ Artículos 8 y 18 de los Estatutos de AJUMANIC.

c.6. Tiempo de existencia

Como ya hemos señalado aquí, actualmente no existen en Nicaragua asociaciones de jueces, fiscales o defensores que se encuentren activas, los esfuerzos realizados por AJUMANIC, se reducen a los estrictos de su gestación y constitución sin que, hasta el momento, se hayan reactivado esos esfuerzos.

c.7. Modo de financiamiento

Según el artículo 19 de los Estatutos de AJUMANIC, el patrimonio de la asociación estará integrado por:

1. Las cuotas ordinarias y/o extraordinarias que fije en Asamblea General.
2. Por subvenciones o donaciones que la Directiva Nacional decida aceptar¹⁸⁵.

c.8. Desarrollo de la Asamblea

El órgano máximo de la asociación lo constituiría la Asamblea General de miembros asociados, compuesta por todos los afiliados a la misma que estuvieran al día con el pago de su cuota respectiva. Para formar quórum era necesaria la presencia de la mitad más uno del total de los mismos y adoptaría sus acuerdos por mayoría simple¹⁸⁶. La Convocatoria a Asamblea General debía hacerse por la Directiva Nacional y se realizaría de forma ordinaria una vez cada año, extraordinariamente podría convocarse por la directiva nacional o a petición de los dos tercios de delegados departamentales ejecutivos¹⁸⁷. El programa a desarrollar por la Asamblea General habría de ser decidido por la Directiva Nacional, pudiendo incluir puntos a solicitud de los delega-

¹⁸⁵ Las Asambleas departamentales de afiliados podrían también decidir otras formas de financiación de las actividades que realizarán. Véase, artículo 19 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁸⁶ Si se trata de modificación de Estatutos se haría necesario los dos tercios de los votos de los asistentes para su modificación. Igualmente si se trata de la disolución de la Asociación. Cfr. Artículos 8 y 9 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁸⁷ Véase el Artículo 10 de los Estatutos de AJUMANIC.

dos departamentales. Finalmente, la Asamblea General debía ser presidida por la Directiva Nacional, exceptuando cuando haya elección de nueva Directiva, en este caso les correspondería presidir a los delegados departamentales, organizados en mesa directiva *ad-hoc*¹⁸⁸.

d) Intentos recientes de asociacionismo

La reciente reforma a la LOPJ –motivada por la crisis de la Corte debido a la resolución del caso ENITEL– ha despertado el interés de jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones, por la creación de una organización gremial, que además de garantizarle estabilidad laboral, les provea de una serie de beneficios que actualmente no tienen, como por ejemplo, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y capacitación profesional. Los artículos reformados se refieren a la integración del quórum¹⁸⁹ (art. 26 y 31 de la LOPJ) y emisión de resoluciones en la Corte Suprema de Justicia con la mayoría simple de sus magistrados, lo que a puesto en alerta a los funcionarios judiciales, ya que se sienten más vulnerables ante sus superiores¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Artículo 11 de los Estatutos de AJUMANIC.

¹⁸⁹ La Prensa “Proponen reformar el quórum (SJC)”, edición de 5 de octubre del 2001, pag. 3 A.

¹⁹⁰ La Prensa “Jueces promueven asociación gremial”, edición de 29 de octubre del 2001, pag. 16 A.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La consolidación de un verdadero Estado de Derecho en Nicaragua requiere del fortalecimiento democrático de las instituciones que proporcionen estabilidad, credibilidad y confianza en las leyes, en los jueces y magistrados, en la propia Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

De todos es conocido que la administración de justicia nicaragüense es lenta, cara, partidarizada e insegura desde el punto de vista jurídico¹⁹¹, ya que tal y como se ha manifestado anteriormente, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que mayor desprestigio tiene frente a la sociedad. Las crisis que ha tenido en los últimos años evidencian, como algunos han sostenido, que estamos ante la institución más débil y corrupta del Estado¹⁹².

Así pues, la percepción de politización y de simpatías o preferencias partidistas de los jueces y magistrados del Poder Judicial constituye uno de los problemas más graves del sector justicia en Nicaragua, lo que conjuntamente con procedimientos de nominación y ascenso ajenos a la capacidad y los méritos o la falta de conocimiento de las razones justificativas de la designación o de concursos públicos, tienen como consecuencia vinculaciones subjetivas o partidarias que inciden en las resoluciones judiciales,

¹⁹¹ En este sentido, resulta interesante la carta enviada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (CÓSEP) a la Corte Suprema de Justicia, en la que se señala: *"qué es motivo de profunda preocupación para la empresa privada el hecho de que la inseguridad jurídica se ha vuelto un denominador común en nuestro país, que mina de manera sistemática su estabilidad y, por ende, los derechos económicos y de propiedad de los nicaragüenses"* (párrafo 1 de la Carta del CÓSEP firmada por su presidente Sr. Anastasio Somarriba y remitida a todos los magistrados de la CSJ el 26 de agosto del 2001). Refiriéndose al contenido de esta correspondencia, véase, La Prensa, "Dura crítica del CÓSEP a la Corte", edición de 29 de agosto del 2001, primeros titulares, párr. 1). En el mismo sentido, las declaraciones del embajador de Suecia en La Prensa, Embajador sueco lamenta falta de seguridad jurídica", edición de 7 de septiembre del 2001, página principal.

¹⁹² Esta situación es denunciada no sólo por los medios de comunicación sino que también es reconocida por el magistrado Zelaya Rojas: "El abogado dice que no se respaldará sumisión ante la incompetencia" * en: Revista Justicia N. 14/1998.

provocando con ello una creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado en general¹⁹³, y un preocupante desprestigio del Poder Judicial¹⁹⁴, en particular¹⁹⁵. Razón por la cual urge la aprobación de una Ley de Carrera Judicial que regule el ingreso y ascenso de jueces y magistrados mediante concursos públicos, de méritos y capacidad, en donde se establezca la excelencia profesional para optar al cargo y se termine para siempre la dependencia, la sujeción y la manipulación del sistema de administración de justicia por parte de los dirigentes políticos.

Si bien es cierto, que el establecimiento de la carrera judicial mediante la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial representa un avance significativo en el proceso de modernización del aparato de administración de justicia, lo adecuado hubiese sido incorporar la magistratura de la Corte Suprema de Justicia al régimen de carrera judicial a fin de que estos cargos también lleguen a ser ocupados por méritos y capacidad alcanzados al servicio de la justicia y no por afinidades partidarias que ponen en entredicho la independencia judicial.

Justo es reconocer la necesidad de dignificar el ejercicio de la judicatura mediante una remuneración salarial justa y adecuada, ya que es frecuente escuchar en los corredores de los tribunales, cuanto vale una resolución judicial favorable para quien la pueda pagar. Ello trae consigo un reprochable mercadeo de la justicia en Nicaragua.

En este sentido: *La Prensa*, "Corrupción generalizada", edición del martes 29 de marzo del 2001.

¹⁹³ Necesidad manifestada también por jueces y magistrados recientemente, a propósito de la reforma a la LOPJ, véase: *La Prensa*, "Jueces rechazan asociación gremial", edición de 29 de octubre del 2001, pag. 16 A.

¹⁹⁴ Según encuestas realizadas entre 1994 y 1998, la ciudadanía percibe la corrupción en el Poder Judicial, así, por ejemplo, la encuesta realizada por Community Information and Epidemiology Associates (CIET) Internacional (1998) reflejó que el 46% de los encuestados manifestaron que había corrupción en el sector judicial, en el mismo sentido, el Instituto de Estudios Nicaragüenses (IEN) en su encuesta de opinión *La gobernabilidad en Nicaragua* (febrero 1999) reveló que un 48% de los encuestados consideró que en el país no existe un buen sistema de justicia.

De tal forma que, uno de los grandes retos que debe enfrentar la Corte Suprema de Justicia como órgano superior del Poder Judicial, es la recuperación de la credibilidad en el sistema de administración de justicia, tarea nada fácil si tenemos en cuenta que la clase política nicaragüense se niega a renunciar a este espacio de "poder partidario"¹⁹⁶.

Queda demostrado pues, que uno de los problemas más graves del Estado de Derecho en Nicaragua es la falta de independencia de los jueces y magistrados; la actual crisis del sistema de justicia producida por las posturas y pugnas políticas evidencia que el Poder Judicial es el seno de contiendas ideológicas o de posiciones parciales, consecuentemente las decisiones que allí se adoptan son políticas y no jurídicas¹⁹⁷.

Debe quedar claro que el proceso de modernización del sector justicia no está circunscrito única y exclusivamente a la LOPJ y su contenido, sino que comprende una variedad de cambios posibles en el ordenamiento jurídico, en especial, la normas que asisten la función jurisdiccional, por ello todavía sigue siendo una tarea pendiente la modernización del sistema penal a través de la reforma total al Código Penal y Código de Instrucción criminal, así como la aprobación de una Ley de Carrera Judicial.

¹⁹⁶ Situación reflejada en múltiples nacionales del diario La Prensa, que con titulares como "Los truces de la Suprema" edición del 30 de octubre del 2001, pág. 13 A) no dejan lugar a la duda sobre el reparto de curules de poder dentro del Poder Judicial. También en La Prensa, "Batalla por curules en la Corte", edición del 12 de octubre del 2001, pag. 12 A. La Prensa, "Magistrados sandinistas desvirtúan apoyo a Sefina", edición de 20 de octubre del 2001; La Prensa, "Magistrados se reparten el pastel", edición de 26 de octubre del 2001, pág. 8 A.

¹⁹⁷ En este sentido, las declaraciones de algunos magistrados a los medios de comunicación, han sido reiterativas al expresar que están en la Corte Suprema de Justicia para representar los intereses de su partido. Recientemente, en el caso ENTEL, se escucharon similares declaraciones al afirmarse que la primera resolución de la Corte se trataba de "una sentencia política" (La Prensa, "CSJ da luz verde a venta de ENTEL", edición de 19 de septiembre del 2001, pag. 6 A).

Entre los derechos de los funcionarios judiciales debe fortalecerse el derecho a la libertad de expresión y derecho a asociarse para representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la tan deseada independencia judicial.

No puede hablarse de justicia en un Poder Judicial preso por intereses ajenos a la misma, en un sistema en el que los jueces y magistrados, lejos de obedecer solamente a la Constitución y a la Ley, están sometidos a los designios de sus superiores jerárquicos y éstos, a su vez, a los intereses del partido al que pertenecen.

El proceso de fortalecimiento, independencia e institucionalización del Poder Judicial que es necesario emprender, debe también volver sus ojos hacia una de las instituciones más sensibles del sistema de justicia, aquella que garantiza el derecho constitucional de defensa —la Defensoría Pública—, apoyándola de forma decisiva.

VII. BIBLIOGRAFÍA

a) Informes y estudios nacionales

- Aráuz Ulloa, Manuel, en. "Proceso Penal y Derechos Humanos en Nicaragua". Estudio monográfico para obtener el Título de Licenciado en Derecho por la Universidad Centroamericana, Managua, 1996
- *Auditoría de la democracia, Nicaragua 1999*
- Dye, David R. Retazos de Democracia, Hemisphere Initiatives, diciembre 2000. Cambridge, Massachussets 2000
- *Informe sobre el Desarrollo Humano en Nicaragua-2000*" (PNUD)
- Informe Anual del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), 2000
- Informe de la Comisión Especial Anti-Corrupción de la Asamblea Nacional "Sobre las emisiones de notas de crédito y cheques, emitidos por la Dirección General de Ingresos", 31 de mayo del año 2000

b) Revista Oficial de la Corte Suprema de Justicia

- Revista *Justicia* N° 2/1995
- Revista *Justicia* N° 3/1995
- Revista *Justicia* N° 4/1996
- Revista *Justicia* N° 5/1996
- Revista *Justicia* N° 7/1997
- Revista *Justicia* N° 13/1998
- Revista *Justicia* N° 14/1998
- Revista *Justicia* N° 16/1999
- Revista *Justicia* N° 1/1999

- Revista *Justicia* N.º 20/2000

c) *Diarios*

- Confidencial, “*Temor por retroceso en la CSJ*”, edición del **junio 1999**
- La Prensa, “*Eligen a cuatro magistrados en la CSJ*”, edición del **21 de marzo del 2000**
- La Prensa, “*Alemania exige se aclaren actos de corrupción*”, edición del **30 de mayo del 2000**
- La Prensa, “*Destitución y juicio*”, edición del **jueves 1 de junio del 2000**
- La Prensa, “*Cibernautas esperan sanción a Jerez*”; edición del **miércoles 7 de junio del 2000**. En el mismo número: “*Contraloría propone destituir a Byron Jerez y Jorge Solís*”.
- La Prensa, “*Burla*” Triunfa la corrupción; edición del **jueves 8 de junio del 2000**. En el mismo número: “*Representantes de la sociedad civil insatisfechos con resolución*”.
- La Prensa, “*Donantes insatisfechos*”, edición del **sábado 10 de junio del año 2000**
- La Prensa, “*Encuesta revela que empresarios rechazan corrupción*”, edición del **viernes 16 de junio 2000**
- La Prensa, “*Chicazos «no ofenden» a Procurador*”, edición del **martes 20 de junio del año 2000**
- La Prensa, “*Juez Solís sobreesce a Carrión*”, edición del **miércoles 5 de julio del año 2000**
- La Prensa, “*Corte Suprema separa de su cargo al Juez Solís*”, edición del **martes 25 de julio del año 2000**
- La Prensa, “*Corrupción generalizada*”, edición del **29 de marzo del 2001**.
- La Prensa, “*Padrinazgo y feudos en la CSJ*”, edición de **6 de mayo del 2001**
- La Prensa, “*Corte engaveta 100 recursos*”, edición

del 19 de mayo del 2000

- La Prensa, *Corte Suprema viola la Constitución*, edición de 20 de mayo del 2000
- La Prensa, *Corte se compromete a desengavetar recursos*, edición de 26 de mayo del 2000.
- La Prensa, *Acceso a la justicia gratuita es un mito*, edición de 29 de junio del 2001
- La Prensa, *Sandinistan controlan tribunales*, edición de 11 de junio del 2001.
- La Prensa, *Juez Solís estaría preso si la justicia se aplicara como en España*, edición del 4 de agosto del año 2000
- La Prensa, *Nicaragüenses piden justicia y empleo*, edición de 16 de agosto del 2001
- La Prensa, *La Corte: entre el pacto y el feudalismo*, edición de 24 de agosto del 2001
- La Prensa, *Paquetazos de magistrados*, edición 30 de agosto del 2000
- La Prensa, *Magistrados con lujo y jueces con dificultades*, edición 31 de agosto del 2000
- La Prensa, *Contraloría investiga corrupción en ENITEL*, edición 28 de agosto del 2001
- La Prensa, *Dura crítica del COSEP a la Corte*, edición de 29 de agosto del 2001
- La Prensa, *Manejos poco claros con cuentas de la CSJ*, edición de 1 de septiembre del 2000
- La Prensa, *Venta secreta de ENITEL*, edición, 1 de septiembre del 2001
- La Prensa, *Magistrados defienden paquetazos en la CSJ*, edición de 8 de septiembre del 2000
- La Prensa, *Embajador sueco lamenta falta de seguridad jurídica*, edición de 7 de septiembre del 2001
- La Prensa, *Admiten denuncia contra ENITEL*, edición de 7 de septiembre del 2001
- La Prensa, *Carrión sobreesido definitivamente*, edición de 8 de septiembre del 2001
- La Prensa, *Fiscalía: no hay desacato en ENITEL*,

- edición de 11 de septiembre del 2001
- La Prensa “*Caso Carrion o CIDH*”, edición de 11 de septiembre del 2001
- La Prensa, “*Familia de Leal pedirá justicia fuera del país*”, edición de 12 de septiembre del 2001
- La Prensa “*Paralizan juicio por desacato contra ENTEL*”, edición de 12 de septiembre del 2001
- La Prensa, “*Absuelven a Mena y amonestan a juez*”, edición de 18 de septiembre del 2001.
- La Prensa, “*CSJ da luz verde a venta de ENTEL*”, edición de 19 de septiembre del 2001
- Cedula Judicial, publicada en campo pagado en La Prensa, edición de 20 de septiembre del 2001.
- La Prensa, “*Polémica por resolución de la Corte en caso ENTEL*”, edición de 20 de septiembre del 2001.
- La Prensa, “*Controversia en la Corte por resolución de ENTEL*”, edición de 21 de septiembre del 2001.
- La Prensa, “*ENTEL acusa a magistrados*”, edición de 27 de septiembre del 2001
- La Prensa, “*La crisis en la Corte*”, edición de 14 de octubre del 2001
- La Prensa, “*Teller acusa de leguleyadas a jueza Chévez*”, edición de 7 de agosto del 2001
- La Prensa, “*Magistrados denuncian presunta persecución*”, edición de 28 de septiembre del 2001
- La Prensa, “*Anulan licitación de ENTEL*”, edición de 6 de septiembre del 2001
- La Prensa, “*Estalla crisis en la Corte*”, edición de 4 de octubre del 2001.
- La Prensa “*Proponen reforma el quórum CSJ*”, edición de 5 de octubre del 2001
- La Prensa “*Fracasa elección de Julio Centeno Gómez como fiscal*”, edición de 5 de octubre del 2001.
- La Prensa, “*Jurista urge poner fin a crisis de CSJ*”, edición de 6 de octubre del 2001, pág. 6 A.
- La Prensa, “*Crisis en la Suprema motiva sesión*

plenaria", edición de 8 de octubre del 2001.

- La Prensa, "*Se agudiza crisis de la Corte*", edición de 9 de octubre del 2001.
- La Prensa, "*Batalla por cargos en la Corte*", edición del 12 de octubre del 2001
- La Prensa, "*Plata niega crisis en la Corte*", edición de 13 de octubre del 2001
- La Prensa, "*Magistrados sandinistas desmiente apoyo a Selva*", edición de 20 de octubre del 2001.
- La Prensa, "*Magistrados se reparten el pastel*", edición de 26 de octubre del 2001
- La Prensa, "*Jueces promueven asociación gremial*", edición de 29 de octubre del 2001
- La Prensa, "*Proponen ley para independizar el Poder Judicial*", edición del 30 de octubre del 2001.
- La Prensa, "*Los tneques de la Suprema*", edición del 30 de octubre del 2001
- El Nuevo Diario "*Arreglo con la Corte Suprema de Justicia. Trabajarán de fiado y justicia no se detendrá*", edición del 15 de diciembre del 2000.

d) Legislación Nacional

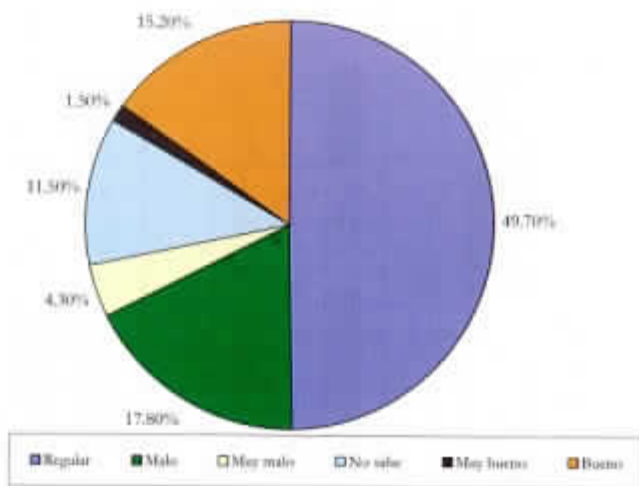
- Decreto 36, "Ley de la Procuraduría General de Justicia", Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 5, de 31 de agosto de 1979
- Reforma constitucional para las elecciones del 25 de febrero de 1990, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 46 del 6 de marzo de 1990.
- Ley No. 147 "Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro", Publicada en La Gaceta No. 102 de 29 de mayo de 1992.
- Ley N° 192 "Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 124 del 4 de julio de 1995.
- Ley N° 199 "Ley marco de implementación de las

reformas constitucionales”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 125 del 5 de julio de 1995.

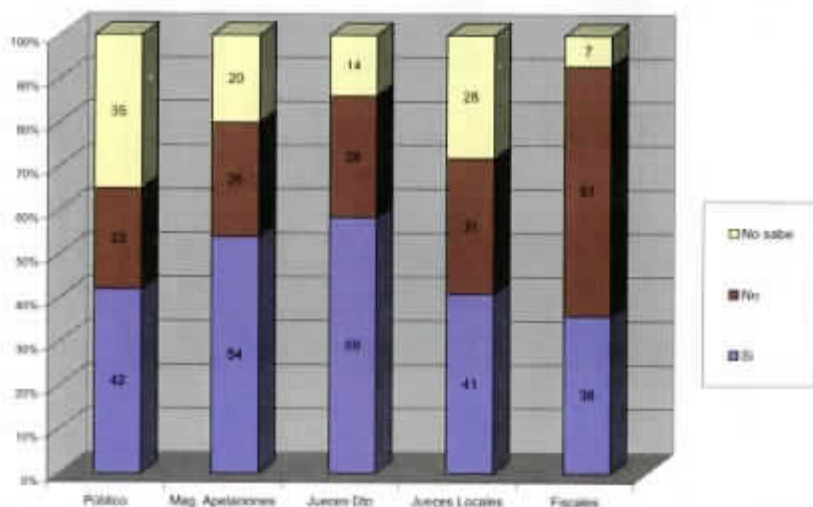
- Ley No. 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 137, de 23 julio 1998.
- Decreto N° 63-99 “Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial, N° 104, de 2 de junio de 1999.
- Ley N° 330 “Ley de reforma parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua”, de noviembre de 2000.
- Ley No. 350 “Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo”. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 140 y 141, de 25 y 26 de julio del año 2000.
- Ley N° 346 “Ley Orgánica del Ministerio Público”. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 196, de 17 de octubre del 2000.
- Decreto 133-2000 “Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público”. Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 14, de 19 de enero del 2001 y reformado el día 13 de julio del 2001 (La Gaceta, Diario Oficial N° 133, Decreto 62-2001 “De la reforma al Reglamento a la Ley Orgánica del Ministerio Público”).

ANEXOS

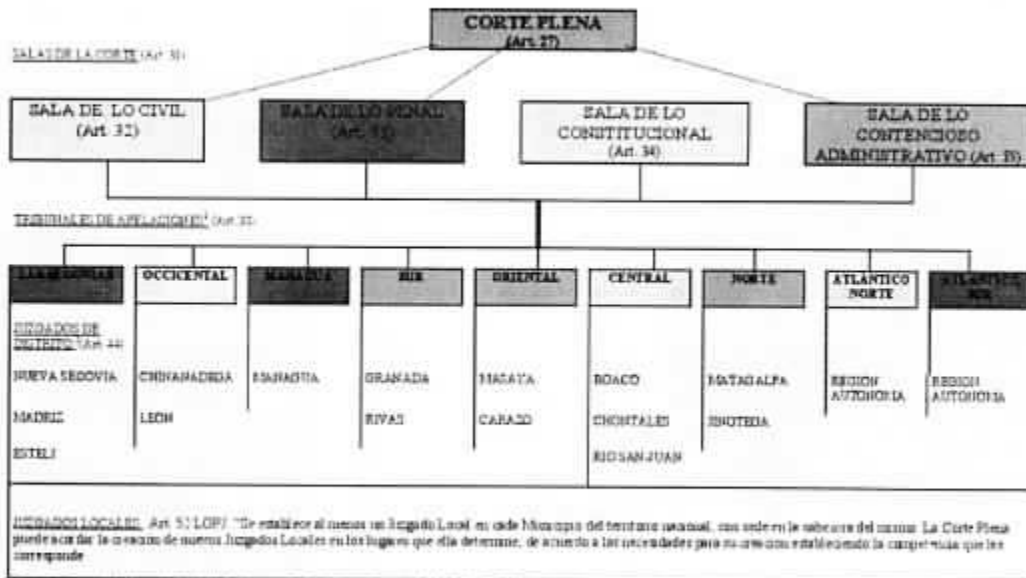
ANEXO I EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL



ANEXO II INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO EN EL PODER JUDICIAL



ANEXO III ORGANIGRAMA DEL PODER JUDICIAL*



* Fuente: Gran autarquía de la LOPJ, Presidencia de la Corte con el apoyo del INE y USAID, 1995.
Los artículos citados en el organigrama se corresponden con los preceptos de la LOPJ.

¹ Uno por cada una de las arcas administrativas del país.

² Al menos uno en cada Departamento y Región Autónoma.

ANEXO IV

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES (1)

CIRCONSCRIPCIÓN / DEPARTAMENTO		JUEGADOS DISTRITO CIVIL	JUEGADO DISTRITO PENAL	JUEGADOS DISTRITO UNICO	JUEGADOS LOCALES CIVILES	JUEGADOS LOCALES PENALES	JUEGADOS LOCALES UNICOS	SUB- TOTAL	TOTAL
Las Segovias	Esteli	1	1	-	1	1	5	9	34
	Méjica	1	1	-	1	1	8	12	
	Nueva Segovia	1	1	-	-	-	11	13	
Occidental	León	2	2**	-	2	3	8	17	35
	Chinandega	2*	2	-	1	1	12	18	
Managua	Managua	8	8	1	6	8	6	33	33
Oriental	Matagalpa	1	1**	1	1	1	8	13	28
	Carazo	-	-	2	2	2	4	12	
Sur	Granada	1	1**	-	1	1	3	7	20
	Rio	1	1	-	1	1	9	13	
	Boaco	1	1	-	-	-	4	8	
Central	Chontales	1	1**	1	1	1	12	17	32
	Rio San Juan	-	-	1	-	-	4	7	
	Magdalena	1	2	-	1	1	13	18	
Norte	Jinotega	1	1	-	1	1	7	11	29
	Atlántico Norte	1	1**	2	-	-	7	11	
Atlántico Sur	Atlántico Sur	-	-	2	-	-	7	9	9
TOTAL		31	34	10	17	22	134	228	228

*

**

El Juegado Segundo de Distrito Civil de Chinandega atiende las demandas laborales
Los Juegados de Distrito de los Penales atienden a los adolescentes de acuerdo con la Ley 287

DISTRIBUCIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES (2)

CIRCUNSCRIPCIÓN / DEPARTAMENTO		TRIBUNAL DE APELACIONES	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	JUEGAO LABORAL	JUEGAO DE AGUACEROS	SUB-TOTAL	TOTAL
Las Seguras	Estelá	1	1	-	-	2	4
	Molina	-	1	-	-	1	
	Nueva Seguros	-	1	-	-	1	
Central	Leon	1	1	1	-	3	4
	Clanwiller	-	1	-	-	1	
Managua	Managua	1	1	2	1	5	5
Oriental	Mataya	1	1	-	-	2	3
	Caizo	-	1	-	-	1	
Sur	Guastala	1	1	-	-	2	3
	Rivas	-	1	-	-	1	
Central	Buero	-	1	-	-	1	4
	Chetum	1	1	-	-	2	
	Rio San Juan	-	1	-	-	1	
Norte	Matagalpa	1	1	-	1	3	4
	Jinotega	-	1	-	-	1	
RSAC	Atlántico Norte	1	1	-	-	2	2
RSAN	Atlántico Sur	1	-	-	-	1	1
TOTAL		9	10	3	2	30	30

ANEXO V

CUADRO JURISDICCIONAL POR MATERIA*

NIVEL	MATERIAS/ORGANOS								
	CONSTITUCIONAL		CIVIL			PENAL			CONTENC. ADMINISTRATIVA
	Defensa de Inconstitucionalidad	Amparo	Laboral ²	Familia	Civil Agrios Mercantil	Penal	Juicio Penal Juvenil	Juicio Penal Múltiple	Contencioso Administrativo ³
Corte Suprema de Justicia	Corte Plena	Sala de la Constitucional	Sala de lo Civil			Sala de lo Penal			Sala de lo Contencioso Administrativo
Tribunales de Apelaciones		Sala Civil y Laboral ⁴			Sala de lo Propiedad ⁵	Sala de lo Penal			
Jurados de Distrito	Inconstitucionalidad en caso concreto		del Trabajo	de Familia	Civil	de la Penal	para Adolescentes ⁶		
Jurados Locales	Inconstitucionalidad en caso concreto		del Trabajo	de Familia	Civil	de lo Penal			
			UNICO			UNICO			

* Fuente: Decretos emitidos por la LOPE, Publicación de la Ley con el sufragio del TCR y UNIDAD, 1998.

² En materia laboral su competencia Recurso de Casación

³ Ley de Regulación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo (Ley N° 116)

⁴ Puede presentarse el Supuesto de distrito en Sala Civil y Sala Laboral

⁵ Arts. 68 de la Ley N° 173 " Ley sobre Propiedad Refinanciada Urbana y Agraria", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 135 del 18 de diciembre de 1977

⁶ Art. 113 de la Ley N° 127 " Código de la Niñez y la Adolescencia", publicada en La Gaceta, Diario Oficial, N° 97 del 27 de mayo de 1992

ANEXO VI

COMPOSICIÓN DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE ACUERDO LAS CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES¹ (Se exceptúan los Registradores y Médicos Forense)

MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Managua	11	3	16
SUB-TOTAL	11	3	16
PORCENTAJE (%)	81%	19%	100%

¹ De acuerdo con el artículo 38 de la LOPJ existen las siguientes circunscripciones:

1. Circunscripción Las Segovias, que comprende los Departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Esteli.
2. Circunscripción Norte, que comprende los Departamentos de Matagalpa y Jinotega.
3. Circunscripción Occidental, que comprende los Departamentos de Chinandega y León.
4. Circunscripción Managua, que comprende el Departamento de Managua.
5. Circunscripción Sur, que comprende los Departamentos de Granada y Rivas.
6. Circunscripción Oriental, que comprende los Departamentos de Masaya y Carazo.
7. Circunscripción Central, que comprende los Departamentos de Boaco, Chontales y Río San Juan.
8. Circunscripción Atlántico Norte, que comprende dicha Región Autónoma; y,
9. Circunscripción Atlántico Sur, que comprende dicha Región Autónoma.

MAGISTRADOS TRIBUNALES DE APELACIONES

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	3	2	5
Occidente	5	1	6
Managua	9	6	15
Oriental	5	-	5
Sur	4	1	5
Central	4	1	5
Norte	4	1	5
RAAS	5	-	5
RAAN	2	3	5
SUB-TOTAL	38	18	56
PORCENTAJE (%)	68%	32%	100%

JUECES DE DISTRITO DE LO PENAL

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	1	2	3
Occidente	2	2	4
Managua	1	7	8
Oriental	-	1	1
Sur	-	2	2
Central	2	-	2
Norte	-	3	3
RAAS	1	-	1
SUB-TOTAL	7	17	24
PORCENTAJE (%)	29%	71%	100%

JUECES DE DISTRITO DE LO CIVIL

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	-	3	3
Occidente	1	3	4
Managua	-	6	6
Oriental	-	1	1
Sur	-	2	2
Central	-	2	2
Norte	1	1	2
RAAS	-	1	1
SUB-TOTAL	2	19	21
PORCENTAJE (%)	14%	86%	100%

JUECES DE DISTRITO ÚNICOS

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Managua	1	-	1
Oriental	1	2	3
Central	1	3	4
RAAN	1	1	2
SUB-TOTAL	4	6	10
PORCENTAJE (%)	40%	60%	100%

JUECES DEL TRABAJO

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Occidental	-	1	1
Managua	-	2	2
SUB-TOTAL	-	3	3
PORCENTAJE (%)	0%	100%	100%

JUECES DE LA ADOLESCENCIA

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Managua	-	1	1
Norte	-	1	1
SUB-TOTAL	-	2	2
PORCENTAJE (%)	0%	100%	100%

JUECES LOCALES ÚNICOS

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	12	12	24
Occidente	6	14	20
Managua	3	3	6
Oriental	4	10	14
Sur	6	6	12
Central	10	13	23
Norte	8	12	20
RAAS	3	4	7
RAAN	3	3	6
SUB-TOTAL	59	75	134
PORCENTAJE (%)	44%	56%	100%

JUECES LOCALES DE LO PENAL

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	1	1	2
Occidente	2	2	4
Managua	3	5	8
Oriental	1	2	3
Sur	-	2	2
Central	-	1	1
Norte	-	1	1
SUB-TOTAL	7	14	21
PORCENTAJE (%)	33%	67%	100%

JUECES LOCALES DE LO CIVIL

Circunscripción	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Las Segovias	1	1	2
Occidente	2	1	3
Managua	3	2	4
Oriental	-	3	3
Sur	-	2	2
Central	-	1	1
Norte	1	1	2
SUB-TOTAL	6	11	17
PORCENTAJE (%)	35%	65%	100%

TOTAL	136	168	304
PORCENTAJE (%)	37%	63%	100%

ANEXO VII

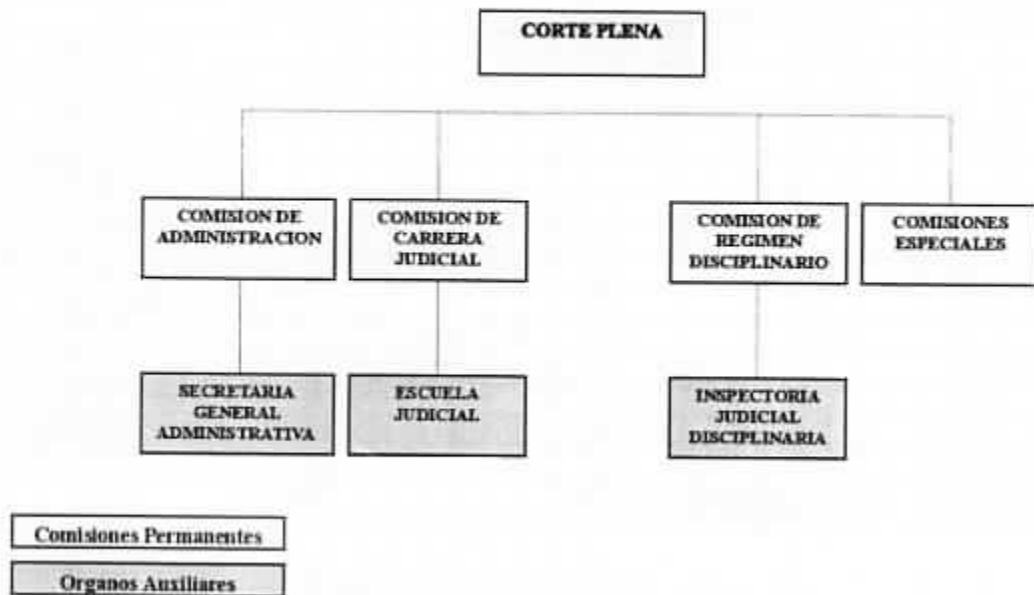
EL SEXO DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES

CARGOS	HOMBRES	MUJERES	SUB-TOTAL	% MASC	% FEM
Magistrados Corte Suprema de Justicia	13	3	16	81%	19%
Magistrados Tribunal de Apelaciones	38	18	56	68%	32%
Secretarías de Sala Corte Suprema de Justicia	2	2	4	50%	50%
Secretarías de Sala Tribunal de Apelaciones	4	17	21	19%	81%
Registradores de la Propiedad inmueble mercantil	13	8	21	62%	38%
Jueces de Distrito Civiles	3	18	21	14%	86%
Jueces de Distrito Penales	7	17	24	29%	71%
Jueces de Distrito Únicos	4	6	10	40%	60%
Jueces penales del Adolescente	-	2	2	-	100%
Jueces del trabajo	-	3	3	-	100%
Jueces locales Civiles	6	11	17	35%	65%
Jueces locales Penales	7	14	21	33%	67%
Jueces locales Únicos	59	75	134	44%	56%
Médicos forenses	18	26	44	41%	59%
TOTAL	174	228	394	37%	63%

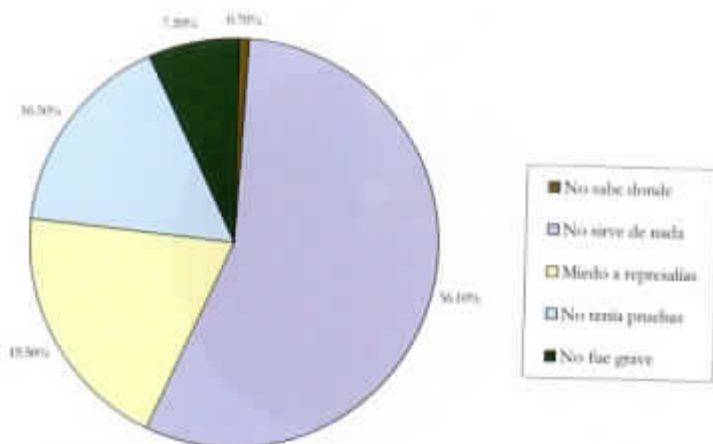
** Como puede observarse, el Poder Judicial está integrado mayoritariamente por mujeres (63%), no obstante, los cargos ocupados donde existen los porcentajes más altos para el sexo femenino están en niveles intermedio (jueces locales únicos, médicos forenses jueces de distrito penales y únicos). En cambio, son los funcionarios del sexo masculino los que ocupan mayoritariamente los cargos de Magistrados de la CSJ y Tribunal de Apelaciones, junto con el cargo de Registradores de la Propiedad.

ANEXO VIII

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL
(Art. 65 y ss LOPJ)

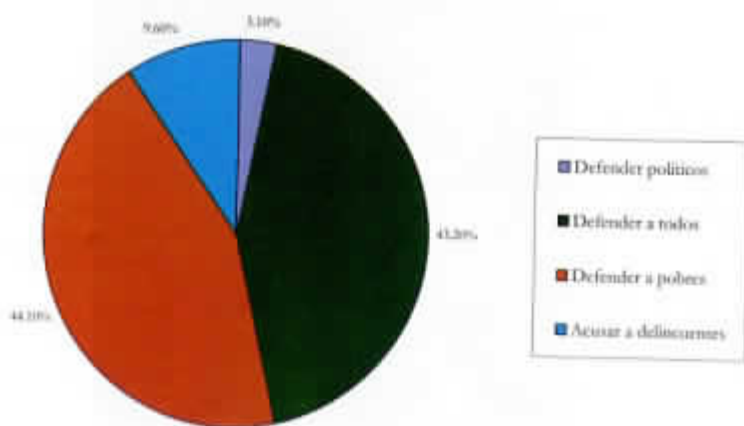


ANEXO IX RAZONES POR LAS QUE NO SE DENUNCIA UN DELITO



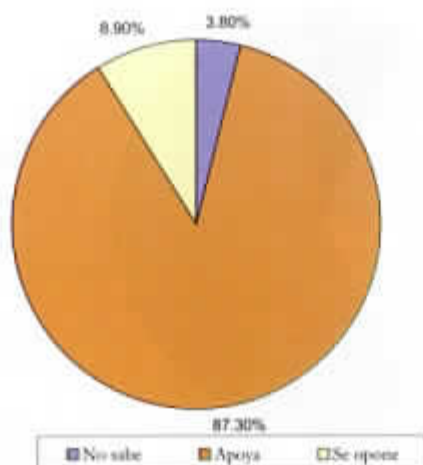
Fuente: Auditoría de la democracia Nicaragua, 1999, pág. 59

ANEXO X FUNCIONES DEL DEFENSOR PÚBLICO



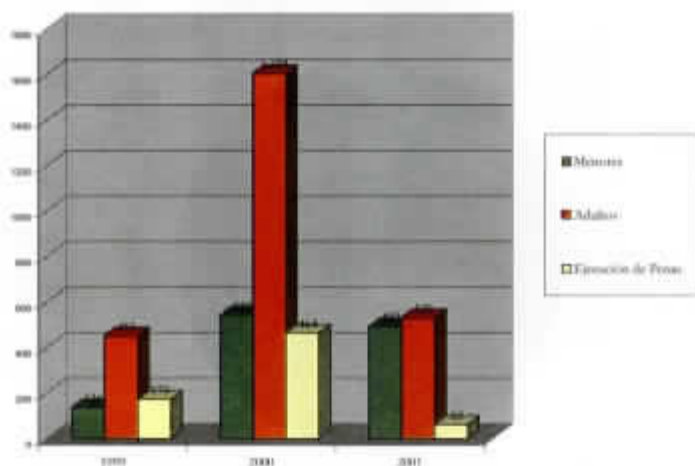
Fuente: Auditoría de la democracia Nicaragua, 1999, pág. 59

ANEXO XI APOYO AL DERECHO A TENER UN ABOGADO



Fuente: Auditoría de la democracia Nicaragua, 1999, pág. 40.

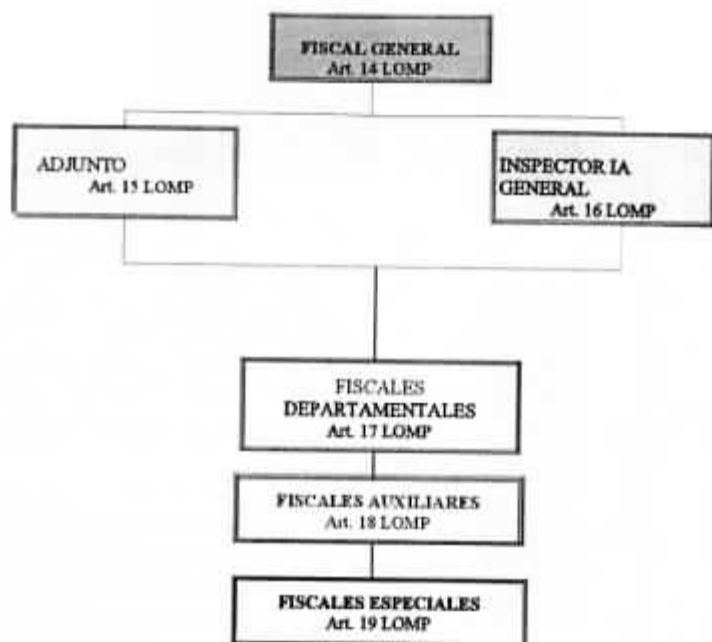
ANEXO XII CASOS TRAMITADOS POR DEFENSORES PÚBLICOS EN MANAGUA



Fuente: La Prensa, edición del 29 de junio del año 2001.

ANEXO XIII

AREA SUSTANTIVA Y ORGANOS DE APOYO DEL MINISTERIO PUBLICO (Art. 15 RLOPM)



ANEXO XIV

AREA ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO PUBLICO
(Art. 15 LOMP)

ANEXO XV

ASPECTO CUANTITATIVO DE LA SITUACIÓN DE JUECES FISCALES Y DEFENSORES PÚBLICOS

CARGOS	HOMBRES	MUJERES	SUB-TOTAL	INGRESO MENSUAL
Magistrados Corte Suprema de Justicia	11	2	13	Dato no disponible
Magistrado Presidente Corte Suprema de Justicia	1	-	1	Dato no disponible
Magistrados Tribunal de Apelaciones	10	12	22	C\$ 31.591,32
Magistrado Presidente Tribunal de Apelaciones	4	1	5	C\$ 37.314,10
Secretarios de Sala Corte Suprema de Justicia	2	2	4	Dato no disponible
Secretarios de Sala Tribunal de Apelaciones	4	17	21	Dato no disponible
Registradores de la Propiedad inmueble mercantil	11	2	13	Dato no disponible
Jueces de Distrito Civiles, Penales y Únicos	13	42	55	C\$ 10.284,17
Jueces Penales del Adolescente	-	2	2	Dato no disponible
Jueces del Trabajo	-	1	1	Dato no disponible
Jueces Locales Civiles, Penales y Únicos	25	100	125	C\$ 8.511,84
Fiscal General*	1	-	1	Dato no disponible
Fiscal General Adjunto	1	-	1	Dato no disponible
Inspector General	1	-	1	Dato no disponible
Fiscales departamentales y de la región autónoma de la Costa Atlántica	9	2	11	Dato no disponible
Fiscales auxiliares	13	19	32	Dato no disponible
Fiscales Especiales	-	-	-	Dato no disponible
Dirección de la Defensoría Pública	-	1	1	Dato no disponible
Sub-dirección de la Defensoría Pública	-	1	1	C\$ 21.224,32
Defensores departamentales	1	10	11	C\$ 18.264,32
Defensores de Oficio*	-	-	-	Gratuito

** Como puede observarse, el Poder Judicial está integrado mayoritariamente por mujeres (63%), no obstante, los cargos ocupados donde existen los porcentajes más altos para el sexo femenino están en niveles intermedio (jueces locales únicos, médicos forenses jueces de distrito penales y únicos). En cambio, son los funcionarios del sexo masculino los que ocupan mayoritariamente los cargos de Magistrados de la CSJ y Tribunal de Apelaciones, junto con el cargo de Registradores de la Propiedad.

ANEXO XVI **PROYECTO DE LEY DE CARRERA JUDICIAL.**

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a la Constitución Política los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y electoral son independientes entre si y subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación. Corresponde al Poder Judicial impartir la justicia en nombre del pueblo de Nicaragua, para lo cual los jueces y magistrados deben ser imparciales e independientes.

Se ha establecido el principio supremo de Carrera Judicial en nuestra carta fundamental para garantizar que los jueces y magistrados estén supeeditados exclusivamente a la Constitución, la ley y su conciencia, y que al juzgar los conflictos sometidos a su conocimiento no exista injerencia alguna capaz de intimidar o de obligar a resolver por razones ajenas al ordenamiento jurídico o a las establecidas en el proceso judicial. La experiencia de los pueblos demuestra la necesidad de este principio como resguardo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial que implica el nombramiento y ascenso de los que ejercen la magistratura mediante concursos públicos de capacidad y méritos y la consideración de las condiciones subjetivas de honorabilidad.

La Constitución Política establece en el artículo 159, in fine del primer párrafo el principio de carrera judicial y manda que éste sea regulada por la ley. No obstante, después de mas de cuatro años de vigencia de la carta magna, no se ha creado la ley que desarrolla el referido mandato, lo cual se ha traducido en una serie de problemas, limitaciones y presiones de carácter político que impiden confianza de parte de la ciudadanía hacia la judicatura.

La percepción de politización del Poder Judicial y de simpatías o preferencias partidistas de los jueces constituye uno de los problemas más graves del sector justicia, lo que conjuntamente con procedimientos de nominación y ascenso ajenos a la capacidad y los méritos o la falta de conocimiento de las razones justificativas de la designación o de concursos públicos, producen al menos

vinculaciones subjetivas capaces de incidir en el contenido de las resoluciones judiciales, o simplemente generan desconfianza en la sociedad.

Igual problema ocurre con las funciones administrativas atribuidas a la Corte Suprema de Justicia cuyas atribuciones en esa materia le hacen descuidar las propias como máximo Tribunal de la Nación, con el consecuente rezago de los casos de mayor trascendencia nacional. Además, las funciones administrativas permiten a los magistrados de Corte Suprema de Justicia la posibilidad de influir o manipular a jueces y magistrados de los Tribunales de Apelaciones puesto que pueden imponer sanciones administrativas o apropiarse privilegios que generan vínculos de dependencia.

Para que funcione un Estado Republicano se requiera de un Poder Judicial capaz de hacer cumplir las leyes sin que exista duda o falta de credibilidad en los jueces y magistrados o subordinación entre ellos. No debe existir influencia, condicionamiento, participación o incidencia ajena a las leyes, por eso el juez o magistrado en funciones tiene como único derecho político el de elegir y desde que ocupa el cargo no puede participar en política partidista activa, por cuanto una postura e identificación ideológica comprometida anula la independencia y la imparcialidad o por lo menos genera la presunción legítima de sujeción, identidad o vinculación con intereses políticos en detrimento de sus decisiones.

Uno de los problemas más graves del Estado de Derecho en Nicaragua es la falta de independencia de los jueces y magistrados, cierto es que el bipartidismo enriqueció la posibilidad de consenso en las decisiones judiciales de los órganos colegiados y disminuyó el absolutismo en el sector, sin embargo la actual crisis del sistema de justicia producida por las posturas y pugnas políticas evidencia que el Poder Judicial no es el seno de contiendas ideológicas o de posiciones parciales, puesto que las decisiones que allí se deben adoptar no son políticas sino jurídicas y se refieren a la justicia como bien supremo de la Nación y del pueblo nicaragüense; por lo que es urgente para avanzar, que cualquier gobierno y los partidos políticos acepten y tengan conciencia de que el sector justicia no es un lugar o espacio de lucha partidista y que por lo tanto, en aras del bien nacional, de la certidumbre jurídica y de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad y

el progreso, deben abandonar obligatoriamente la tentación de incidir en la judicatura y crear condiciones para que los jueces y magistrados al resolver estén sometidos directamente a las leyes.

Como una prueba de la sinceridad política y del apego y respeto a la Constitución Política los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional, por respeto al pueblo nicaragüense y convicción democrática deben aprobar una ley de carrera judicial que regule el ingreso y ascenso de jueces y magistrados mediante concursos públicos de méritos y capacidad en donde se establezca la honorabilidad para optar al cargo y se termine para siempre la dependencia, la sujeción y la manipulación del sistema de justicia.

Hemos llegado a un punto de la historia en donde no se puede gobernar con eficiencia ni cumplir con los propósitos, programas, planes de desarrollo sin un Poder Judicial que reúna las características que exige la Constitución Política.

Con estos fundamentos se presenta a la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Carrera Judicial.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE NICARAGUA

En uso de sus facultades:

HA DICTADO

La siguiente:

LEY DE CARRERA JUDICIAL

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la Constitución de la República de Nicaragua, Poder Judicial es el órgano de gobierno encargado de la función jurisdiccional de juzgar y ejecutar lo juzgado mediante la aplicación de la ley en los asuntos o procesos de su competencia. Actividad judicial que corresponde a Magistrados y jueces independientes y sólo obedientes a la Constitución y a la ley.

CONSIDERANDO:

Que uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar a los habitantes la justicia la que para ser cumplida conforme lo mandado en la Constitución requiere de la existencia de condiciones que aseguren la independencia e imparcialidad de los jueces y magistrados, lo cual conforme la experiencia de los pueblos democráticos solo es posible si los ingresos, promociones y ascensos al cargo de juez o magistrado se hacen por capacidad y méritos, mediante concursos públicos e igualmente, por razones de eficiencia, se asegura la permanencia en el cargo.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 159 de la Constitución Política, parte in fine del primer párrafo establece la carrera judicial y manda a la Asamblea Nacional la creación de la ley respectiva, y que el concepto Carrera Judicial implica nombramiento de jueces y magistrados por capacidad, méritos y honorabilidad, con lo cual se garantizan los también principios constitucionales que permiten una judicatura alejada de injerencias ajenas, permitiendo con ello que el juez esté sometido exclusivamente a la búsqueda de la justicia y el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico.

CONSIDERANDO:

Que la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, el fortalecimiento democrático de las instituciones y las necesidades del desarrollo requieren de un sistema de justicia que proporcione estabilidad, credibilidad y confianza en las instituciones, en las leyes y en los jueces y magistrados y que la Constitución Política de la República y los tratados internacionales ratificados por Nicaragua establecen los principios básicos que orientan la administración de justicia, los cuales deben ser adecuadamente desarrollados mediante normas ordinarias que aseguren su cumplimiento, de acuerdo con las necesidades y posibilidades del Estado.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 138, 140, 158, 160, y 165 de la Constitución Política de la República.

DECRETA:

I. La siguiente.

LEY DE LA CARRERA JUDICIAL

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y fines. El objeto y fines de esta ley es establecer los principios, normas y procedimientos del ingreso y ascenso al cargo de la judicatura y la remoción del cargo a fin de asegurar la imparcialidad e independencia de jueces y magistrados, así como crear órganos necesarios para la administración y operación de la Carrera Judicial.

La Carrera Judicial establece el sistema que regula el ingreso, permanencia, promoción, ascenso, capacitación, disciplina y otras actividades de jueces y magistrados de tribunales de apelaciones, cualquiera que sea su categoría o grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia y excelencia profesional en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Artículo 2. Principios de independencia e imparcialidad. En el ejercicio de la función jurisdiccional, los jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones son independientes; resolverán los asuntos que conozcan con absoluta imparcialidad y están sujetos únicamente a la Constitución Política de la República, a las leyes y a los convenios y tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

Las resoluciones judiciales sólo se revisan por los exclusivos medios de impugnación y los recursos judiciales establecidos en las leyes procesales, que son el único medio correctivo para revocar, modificar, anular o confirmar una resolución judicial.

Los jueces y magistrados ejercen por igual, aunque con competencia distinta, el poder jurisdiccional que la Constitución Política de la República asigna al Poder Judicial, razón por la que, en su ejercicio no existe diferencia jerárquica ni dependencia entre ellos.

Artículo 3. Ingreso, período de servicio y garantía de estabilidad. Los jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones ejercerán sus funciones de forma permanente e inamovible, hasta que cesen en las mismas con arreglo a lo que dispone la Constitución Política de la República y esta ley.

Los Magistrados de los tribunales de apelaciones serán electos por la Corte Suprema de Justicia para un período de cinco años. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por la Asamblea Nacional conforme lo establece la Constitución Política para un período de cinco años.

Los jueces y magistrados de los tribunales de apelaciones, cualquiera que sea su categoría o grado, sólo podrán ser:

- a. Nombrados por capacidad, honorabilidad reconocida y méritos, mediante concurso público y,
- b. Removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones por las causas previstas en la Constitución y en los casos y mediante el procedimiento que determina la presente ley.

Los jueces y magistrados están obligados a procurar un rendimiento satisfactorio en el ejercicio de sus funciones, de manera que contribuyan a una pronta y eficaz administración de justicia.

TITULO II

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION

CAPITULO I

ORGANOS

Artículo 4. Órganos. Los órganos responsables de la Carrera Judicial son:

- a. El Consejo de la Carrera Judicial, y,
- b. La Escuela Judicial,
- c. La Inspectoría Judicial Disciplinaria

CAPITULO II

CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Artículo 5. Integrantes. La Carrera Judicial es administrada por un Consejo que se integra con cinco miembros, así:

- a. El Presidente de la Comisión de Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, quien en ausencia, podrá ser sustituido por un magistrado de la misma Comisión, quien presidirá el Consejo;
- b. El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y su respectivo suplente, el vice presidente de dicha Comisión,
- c. El Procurador para la defensa de los Derechos Humanos y su respectivo suplente, el sub procurador de los Derechos Humanos;
- d. Dos representantes electos democráticamente por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y sus respectivos suplentes;
- e. Un representante de los jueces y magistrados electos en Asamblea General, y,
- f. El Director de la Inspectoría Judicial Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia, quien participará en las reuniones con voz pero sin voto.

El Consejo de Carrera Judicial adoptará sus decisiones por mayoría simple

Los miembros del Consejo de Carrera Judicial, durarán un año en sus funciones, salvo el director de la Escuela Judicial y los que permanezcan por razón del cargo, que fungirán mientras dure el periodo para el que fueron nombrados.

Artículo 6. Funciones y atribuciones del Consejo. Son atribuciones del Consejo de la Carrera Judicial:

1. Efectuar la convocatoria a que se refiere el artículo 16 de esta ley relacionada con los concursos públicos de oposición para el ingreso a la Carrera Judicial de jueces y magistrados de tribunales de apelaciones y otros de igual jerarquía;
2. Citar y permitir la participación en el acto de nombramiento de jueces, magistrados de tribunales de apelaciones y de igual jerarquía a órganos representativos de la sociedad civil interesados en la justicia y medios de comunicación del país;
3. Organizar, realizar y evaluar los concursos públicos de ingreso y ascenso por capacidad y méritos al poder judicial;
4. Llevar controles sobre el desempeño de jueces y magistrados;
5. Presentar lista de los tres mejores candidatos para cada plaza para el cargo de juez y magistrado de tribunal de apelaciones y de igual categoría quien nombrará o ascenderá al cargo obligatoriamente dentro de las tres opciones presentadas, en sesión pública;
6. El conocimiento y ejercicio de la función y acciones disciplinarias y correctivas previstas en esta ley y sus reglamentos. Se exceptúan de esta disposición los casos de destitución, que quedan reservados a la respectiva autoridad nominadora. Sin embargo, la formación del expediente respectivo y las recomendaciones que correspondan, son atribuciones del Consejo;
7. Ser el órgano rector de la Escuela Judicial y de la Inspectoría Judicial Disciplinaria, y;
8. Las demás que determine esta ley.

El consejo se reunirá por lo menos dos veces al mes en instalaciones que proporcione para el efecto la corte suprema de justicia y se

retribuirá conforme dietas similares a las otorgadas para actividades del gobierno.

CAPITULO III

ESCUELA JUDICIAL E INSPECTORIA DE TRIBUNALES

Artículo 7. Escuela Judicial. La Escuela Judicial es el órgano encargado de planificar, ejecutar y facilitar la capacitación y formación técnica y profesional de jueces, magistrados de tribunales de apelaciones, funcionarios y empleados del organismo judicial y otras personas u organizaciones relacionadas o interesadas en el sistema de justicia, con el fin de asegurar la excelencia y actualización profesional para el eficiente desempeño de sus cargos. Su organización y funcionamiento se regirán por la presente ley y el reglamento respectivo.

La Escuela judicial es además el órgano ejecutor de las decisiones que adopte el Consejo en la organización y realización de los concursos públicos de ingreso y ascenso por capacidad al Poder Judicial y llevará los archivos de controles sobre el desempeño de jueces y magistrados.

Artículo 8. Inspectoría judicial disciplinaria. Es el órgano encargado de la investigación y supervisión del cumplimiento de los deberes de los jueces y magistrados en el ejercicio del cargo establecidos en esta ley y de disciplina laboral, funciones que realizará con absoluto respeto y sin intervención de la independencia e imparcialidad de los jueces, en virtud de las cuales no podrá incurrir o refutar el contenido de las resoluciones judiciales ni interferir de ninguna manera en la función jurisdiccional. Realizará además las funciones que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los resultados de su actividad los remitirá al Consejo de Carrera Judicial.

Corresponde a la Inspectoría Judicial Disciplinaria por sí denunciar las faltas en el servicio de los jueces y participar en el procedimiento respectivo como acusador, si es que procede.

Artículo 9. Director. El director de la Inspectoría Judicial Disciplinaria será nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna de candidatos propuesta por el Consejo de Carrera Judicial para un periodo de tres años pudiendo ser reelecto hasta un periodo más y deberá reunir las mismas calidades establecidas en la Constitución

Política para el nombramiento de magistrados de Corte Suprema de Justicia.

En la primera reunión del Consejo de Carrera Judicial a efectuarse dentro de los quince días de vigencia de la presente ley, se elaborará la lista de candidatos al cargo de Director de la Inspección Judicial Disciplinaria, quien en los siguientes días siguientes deberá ser nombrado por el órgano designado.

TITULO III

DE LA CARRERA JUDICIAL

CAPITULO I

clasificación, INGRESO Y PERMANENCIA

Artículo 10. Clasificación. La Carrera Judicial comprende:

- a. Magistrados de los tribunales de apelaciones y otros tribunales colegiados;
- b. Jueces de Distrito;
- c. Jueces Locales

Los magistrados de Corte Suprema de Justicia no son parte de la carrera judicial, pero están sujetos a los derechos, deberes y prohibiciones de los demás jueces y magistrados, entre quienes no forman grado jerárquico, dependencia o sujeción alguna. La única forma establecida para revisar resoluciones judiciales es por los mecanismos procesales de impugnación.

Artículo 11. Ingreso. El ingreso a la Carrera Judicial se hará por alguna de las formas siguientes:

- a. Mediante nombramiento de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los jueces, magistrados de salas de apelaciones o de otros tribunales colegiados, cualquiera que sea su categoría o grado;
- b. Todos los aspirantes a cargos de juez y magistrados o miembros de tribunales colegiados deberán reunir los requisitos y calidades establecidas en la Constitución y las leyes y someterse a concursos públicos de capacidad, méritos y honorabilidad reconocida por oposición que en cada caso se establezca por el órgano competente.

Artículo 12. Convocatoria a concursos. Corresponde al Consejo de Carrera Judicial, convocar los concursos por oposición, para el ingreso a la Carrera Judicial de jueces y magistrados.

La convocatoria se publicará por tres veces en el Diario Oficial, La Gaceta y en dos de los diarios de mayor circulación, con una antelación no menor a veinte días de la fecha prevista para el concurso. Entre otras especificaciones de la convocatoria, se indicarán: los requisitos legales, culturales, educacionales y formales que deben llenar los aspirantes; plazo, lugar y horario de retiro de las bases del concurso y de recepción de solicitudes.

La solicitud debe contener, entre otros, los datos de identificación personal, curriculum vitae y sus constancias, y toda otra documentación que se estime pertinente, cuya presentación se requiera en la convocatoria.

Artículo 13. Información y listados. El Consejo de Carrera Judicial elaborará la lista de los aspirantes al cargo inscritos y verificará, en cada caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley. Efectuada la verificación, confeccionará la nómina de aspirantes aptos para concursar y notificará a los interesados su decisión. Dicho listado de aspirantes será publicado en el Diario Oficial, La Gaceta y como mínimo en dos de los diarios de mayor circulación y remitido, en el caso de los jueces, a la Corte Suprema de Justicia, y en el caso de los magistrados de tribunales de apelaciones a las respectivas comisiones de postulación.

Dentro del plazo de cinco días contados desde el día siguiente al de la última publicación, cualquier persona podrá remitir al Consejo de Carrera Judicial o a las comisiones de postulación, según corresponda, información documentada respecto a los aspirantes. Los mecanismos y formalidades para la recepción, publicidad y valoración de dicha información, deberán ser reguladas por el Consejo mediante reglamento especial.

Podrán aspirar al cargo todos los abogados que reúnan los requisitos establecidos por la ley, quienes podrán presentar su currícula personalmente o por medio de una institución o grupo que los proponga como aspirantes al cargo de juez o magistrado.

Artículo 14. Evaluación y elegibilidad. Corresponde a la Escuela Judicial la revisión inicial de requisitos legales para acceder al de los aspirantes al cargo de juez o magistrado cualquiera que sea su categoría. Concluida la revisión inicial. Si alguno de los aspirantes excluido considera que reúne los requisitos legales podrá solicitar la revisión de la decisión al Consejo de la Carrera Judicial.

Concluida la revisión, se elaborará la lista de participantes del concurso público y se practica el concurso por capacidad, méritos y honorabilidad conforme procedimientos objetivos susceptibles de comprobación. Practicado el concurso, formulará las listas de los que se consideren elegibles en orden de las calificaciones obtenidas por cada aspirante, a partir de la más alta.

Todos los aspirantes al cargo de juez o magistrado de tribunales de apelaciones deberán realizar en la Escuela Judicial un curso previo de inducción al cargo para participar en los concursos, el que tendrá una duración mínima de seis meses.

Artículo 15. Renovación de nombramiento de jueces y magistrados de salas. Vencido el periodo de funciones de los magistrados de los tribunales de apelaciones y de otros tribunales colegiados, la Corte Suprema de Justicia renovará el nombramiento, para lo cual deberá tener en cuenta la previa evaluación de su rendimiento y comportamiento profesional elaborado por el Consejo de Carrera Judicial. Solo en caso de que la evaluación sea por retardamiento en la administración de justicia, mala atención al público, falta de motivación de resoluciones judiciales o de incumplimiento de los deberes propios del cargo y de las normas de disciplina laboral comprobadas, no se renovará para un nuevo plazo en el cargo. Lo que habrá de constar en una resolución motivada primero del Consejo que practica la evaluación y luego de la Corte Suprema de Justicia que no le renueva el periodo.

Artículo 16. Magistrados de Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por la Asamblea Nacional, quienes durarán para un periodo constitucional de cinco años, deberán reunir los requisitos que la Constitución establece y podrán ser reelectos siempre que reúnan las formalidades legales correspondientes.

Su elección en la Asamblea Nacional se hará considerando la capacidad y los méritos y su honorabilidad. Podrán ser propuestos

razonando la propuesta y el currículum justificativo, por cualquier diputado, por el Consejo de Carrera Judicial o por cualquier organización ciudadana interesada en la administración de justicia.

Por lo menos una tercera parte de los magistrados de Corte Suprema de Justicia deberán ser electos, por la Asamblea Nacional, de entre jueces y magistrados de la Carrera Judicial, que tengan mayores méritos.

Artículo 17. Vacantes. Cuando se produzca una vacante definitiva en la Corte de Apelaciones, o en tribunales de igual categoría, juzgados de distrito y locales, el Consejo de la Carrera Judicial dará aviso inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia de dicha vacancia. La que procederá a elegir al nuevo magistrado, dentro de los siguientes quince días contados a partir de la fecha de recibido el aviso.

Para la provisión de las plazas vacantes y de las que se crearen conforme a ley en las categorías de juez, tendrán preferencia:

- a. Los jueces de la misma categoría que soliciten el traslado y reúnan los requisitos establecidos en esta ley para los traslados.
- b. Los jueces que hayan servido en la categoría inmediatamente inferior a la del cargo que deba llenarse y que reúnan las condiciones establecidas en esta ley para el ascenso.
- c. Los jueces suplentes nombrados conforme lo previsto en la presente ley.

Cuando haya dos o más jueces comprendidos en la preferencia a que se refiere este artículo, el Consejo de la Carrera Judicial sacará a concurso público la provisión de la plaza.

Artículo 18. Ascensos. Se considera ascenso el acto por el cual un juez o magistrado pasa a desempeñar un cargo judicial de competencia diferente por razón de categoría o grado según lo establecido en esta ley, con la aprobación de la autoridad nominadora respectiva, previo cumplimiento de los requisitos y calidades que corresponden.

Artículo 19. Traslados. Los jueces y magistrados podrán ser trasladados por las causas siguientes:

- a. Por razones de servicio, calificadas mediante resolución motivada del Consejo de la Carrera Judicial, previa audiencia y compensación económica de los gastos del traslado;
- b. Por solicitarlo así el interesado, y si a juicio del Consejo de la Carrera Judicial haya acumulado méritos en el ejercicio del cargo, tenga una causa justificada y el traslado no sea inconveniente para el servicio de la administración de justicia;
- c. En los casos de preferencia a que se refiere el literal c) del artículo 24 de esta ley.

CAPÍTULO II

DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES

Artículo 20. Derechos. Son derechos de los jueces y magistrados, además de los que la Constitución Política de la República y las leyes ordinarias les otorgan, los siguientes:

- a. A no ser removidos de sus cargos sino por las causas y en la forma establecida en la Constitución y las leyes;
- b. Percibir una remuneración equitativa y justa;
- c. Percibir y gozar de las prestaciones, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico y social que les correspondan conforme a la ley;
- d. Ser protegidos en forma inmediata por las autoridades del Estado, cuando exista peligro para su vida o integridad personal en razón del desempeño de las funciones de su cargo;
- e. Asociarse para los fines y con las limitaciones que establezcan la Constitución Política de la República y las leyes;
- f. Optar a becas de estudios superiores, recibir cursos de capacitación y perfeccionamiento en la función jurisdiccional, y,
- g. Los demás derechos que se establezcan legalmente.

Artículo 21. Deberes. Son deberes de los jueces y magistrados:

- a. Administrar justicia en forma imparcial, razonada, pronta y cumplida de conformidad con la Constitución Política y las leyes de la República;
- b. Resolver los asuntos de su competencia con independencia y cumplir rigurosamente las garantías del debido proceso;
- c. Atender el juzgado o tribunal a su cargo con la diligencia debida;
- d. Atender en forma personal las diligencias y audiencias que se lleven a cabo en su despacho;
- e. Guardar absoluta reserva sobre los asuntos que por su naturaleza así lo requieran;
- f. Respetar y atender conforme a la ley a los funcionarios judiciales, personal subalterno, compañeros de trabajo, litigantes, personas interesadas en los juicios y diligencias que se ventilen en el tribunal, lo mismo que al público en general;
- g. Mantener un alto nivel de actualización profesional;
- h. Denunciar cualquier hecho o acto que implique riesgo o amenaza para la independencia del ejercicio de su cargo, y
- i. Cumplir con los horarios establecidos, atender al público con esmero y respeto, y,
- j. Cumplir con los demás deberes que ésta y otras leyes y reglamentos señalen

Artículo 22. Prohibiciones. Además de lo establecido en otras leyes y reglamentos, queda prohibido a los jueces y magistrados:

- a. Desempeñar, simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos remunerados y ejercer cualquier otro empleo, cargos directivos en sindicatos, u otras entidades con fines políticos o ser ministro de cualquier religión o culto;
- b. Participar activamente en política partidista, initine ocualquier acto público y mientras esté en el cargo ejercer actividades políticas.
- c. Ejercer las profesiones de Abogado y Notario o ser mandatarios judiciales, salvo en causa propia o de

- parentes dentro de los grados de ley;
- d. Aceptar o desempeñar cargos de albaceas, depositarios judiciales, tutores, protutores o guardadores, salvo que se trate del cónyuge o compañero en unión de hecho estable y parentes dentro de los grados establecidos en la ley;
- e. Celebrar contratos de cualquier clase con las personas que ante ellos litiguen;
- f. Dar opinión sobre asuntos que conozcan o deben conocer;
- g. Ser árbitros, liquidadores, expertos o partidores;
- h. Ejercer actividades o propaganda de índole política partidista o religiosa, o propiciar que otros lo hagan

Artículo 23. Pérdida de calidad. La calidad de juez o magistrado termina por cualquiera de las siguientes causas:

- a. Por finalización del periodo para el cual fue electo o nombrado, o por renuncia al cargo o a la Carrera Judicial o incompatibilidad de responsabilidades. En todo caso, la pérdida de calidad se entenderá producida para quien se niegue a hacer la protesta de administrar pronta y cumplida justicia o no tome posesión del cargo para el que haya sido designado en el plazo legalmente establecido;
- b. Por sanción disciplinaria de destitución;
- c. Por condena penal firme;
- d. Por jubilación, que podrá ser voluntaria a los 65 años y obligatoria a los 75 años, y;
- e. Por incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, declarada judicialmente.

Artículo 24. Situación de servicio. Los jueces y magistrados pueden encontrarse en alguna de estas situaciones.

- a. Servicio activo;
- b. Excedencia;
- c. Licencia; o;
- d. Suspensión.

Se encuentran en situación de servicio activo quienes desempeñen un cargo correspondiente a la Carrera Judicial.

La situación de excedencia tiene lugar cuando un miembro de la Carrera Judicial, sin renunciar a tal condición, solicita dejar de prestar

servicio activo en la misma, después de haberlo prestado en forma satisfactoria por lo menos durante dos años. El tiempo de duración de la excedencia no puede ser mayor de tres años, transcurridos los cuales se entenderá perdida la condición de miembro de la carrera. El tiempo de duración de la excedencia no se acreditará al tiempo de servicio para efectos de determinar antigüedad.

La suspensión se produce como consecuencia de resoluciones adoptadas en procesos penales o en procedimientos disciplinarios. Las resoluciones relativas a estas situaciones serán competencia de la Corte Suprema de Justicia.

CAPÍTULO III

desempeño DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS

Artículo 25. Evaluación del desempeño. El rendimiento de los jueces y magistrados en el desempeño de sus cargos será evaluado por el Consejo de la Carrera Judicial anualmente, o cuando lo considere conveniente.

Para ello, el Consejo tomará en consideración, entre otros, los siguientes elementos:

- a. El número de autos y sentencias dictadas mensualmente y su calidad;
- b. El número de autos y sentencias confirmadas, revocadas o casadas, con distinción de las definitivas;
- c. El número de audiencias o días de despacho en el tribunal en cada mes del año;
- d. El número de casos resueltos mediante aplicación de procedimientos y medidas de desjudicialización;
- e. El grado de cumplimiento de los deberes de los jueces y magistrados y del régimen disciplinario a que se refiere esta ley;
- f. La observancia de los plazos o términos judiciales a que esté sujeto, conforme a ley;
- g. Las sanciones a las que haya sido sometido;
- h. El informe de rendimiento académico que elabore la Unidad de Capacitación Institucional.

La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces y magistrados la fijará el Consejo de la Carrera Judicial, será pública y la renovación de los nombramientos y los ascensos se efectuará con estricta sujeción a ella.

TITULO IV DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SUPLENTES

Artículo 26. Objeto. Con el objeto de garantizar la continuidad de los servicios de justicia, se establece la calidad de jueces y magistrados suplentes en disponibilidad, quienes serán nombrados y electos de conformidad con las normas de esta ley y reunirán los mismos requisitos que correspondan a los titulares

Artículo 27. Jueces y magistrados de apelaciones Suplentes. La Corte Suprema de Justicia nombrará el número de jueces suplentes que el Consejo de la Carrera Judicial recomiende como necesario para atender las necesidades del despacho judicial de paz y de primera instancia en toda la República, los que permanecerán en disponibilidad en las condiciones, forma y lugar que la Corte determine.

Artículo 28. Régimen. A los jueces y magistrados suplentes les son aplicables las normas de esta ley, sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que en su oportunidad acuerde el Consejo de la Carrera Judicial

TITULO V REGIMEN DISCIPLINARIO CAPITULO I FALTAS Y SANCIONES

ARTÍCULO 29. Responsabilidades. Constituyen faltas disciplinarias las acciones u omisiones en que incurra un juez o magistrado, previstas como tales en la presente ley.

La responsabilidad disciplinaria es independiente y sin perjuicio de las que deriven de la responsabilidad penal y civil que se determine conforme a la legislación ordinaria.

ARTÍCULO 30. Grados. Las faltas cometidas por jueces y magistrados en el ejercicio de su cargo podrán ser:

- a. Leves;
- b. Graves; o,
- c. Gravísimas.

ARTÍCULO 31. Faltas leves. Son faltas leves:

- a. La inobservancia del horario de trabajo sin causa justificada, siempre que no implique una falta de mayor gravedad conforme a esta ley;
- b. La falta del respeto debido hacia el público, compañeros y subalternos en el desempeño del cargo, funcionarios judiciales, representantes de órganos auxiliares de la administración de justicia, miembros del Ministerio Público, de la Defensoría Pública y los Abogados;
- c. La falta de acatamiento de las disposiciones administrativas internas del Poder Judicial, siempre que no impliquen una falta de mayor gravedad, y,
- d. La negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo establecidos en esta ley, cuando no constituyan falta grave o gravísima.

ARTÍCULO 32. Faltas graves. Son faltas graves:

- a. Abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo judicial;
- b. Incurrir en retrasos y descuidos injustificados en la tramitación de los procesos y/o diferir las resoluciones, por otro motivo que no sean los señalados en la ley procesal de la materia;
- c. No guardar la discreción debida en aquellos asuntos que por su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva;
- d. La conducta y tratamientos manifiestamente discriminatorios en el ejercicio del cargo;
- e. La falta de acatamiento de las disposiciones contenidas en los reglamentos, acuerdos y resoluciones que dicte la Corte Suprema de Justicia en materia jurisdiccional;
- f. Ocultar a las partes documentos o información de naturaleza pública;
- g. Ausencia injustificada a sus labores por un día;
- h. Asistir a sus labores en estado de embriaguez o bajo el

efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición anormal análoga;

- i. Faltar injustificadamente al trabajo durante tres o más días consecutivos, o tres días en el mismo mes, y,
- j. La tercera falta leve que se cometa dentro de un mismo año que haya sido conocida y sancionada.

ARTÍCULO 33. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:

- a. Desempeñar simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos públicos remunerados o prestar cualquier clase de servicio profesional relacionado con la función judicial;
- b. Interferir en el ejercicio de funciones de los otros organismos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia a cualquier organismo, institución o persona que atente contra el Organismo Judicial;
- c. Ocultar alguna prohibición que le sea imputable para el ejercicio de la función o abstenerse de informar una causal sobreviniente;
- d. Intentar influir ante otros jueces o magistrados en causas que tramitan en el marco de sus respectivas competencias;
- e. Interferir en el criterio de los jueces de grado inferior por razón de competencia, en cuanto a la interpretación o la aplicación de la ley, salvo cuando se conozca a través de los recursos legalmente establecidos;
- f. Cometer cualquier acto de coacción, especialmente aquellos de índole sexual o laboral;
- g. Solicitar o aceptar favores, préstamos, regalías o dádivas en dinero o en especie, a las partes o sus abogados que actúen en casos que conozca;
- h. La tercera falta grave que se cometa en el plazo de un año, cuando las dos primeras hayan sido sancionadas.

ARTÍCULO 34. Sanciones. Para las faltas cometidas por los jueces y magistrados se establecen las siguientes sanciones:

- a. Amonestación verbal o escrita para faltas leves;
- b. Suspensión hasta por veinte (20) días, sin goce de salario, para las faltas graves; y,
- c. Suspensión sin goce de salario hasta por tres meses o destitución, para faltas gravísimas.

ARTÍCULO 35. Amonestación. La amonestación consiste en la llamada de atención, verbal o escrita, que se hace al juez o magistrado. En cualquiera de los dos casos, debe dejarse constancia en el registro personal respectivo.

ARTÍCULO 36. Suspensiones. La suspensión sin goce de salario consiste en la separación temporal del juez o magistrado del ejercicio del cargo. Podrá acordarse hasta por un máximo de veinte (20) días para las faltas graves y tres meses por faltas gravísimas. En ambos casos debe dejarse constancia en el registro personal respectivo.

ARTÍCULO 37. Destituciones. La destitución consiste en la separación definitiva del juez o magistrado del cargo que desempeña, y como consecuencia de su pertenencia a la Carrera Judicial.

ARTÍCULO 38. Prescripción. Las faltas establecidas en la presente ley y las acciones que se pueden iniciar, prescriben en el plazo de tres meses a contar desde su comisión. Este plazo se interrumpe por la presentación de la respectiva gestión escrita ante quien corresponda.

CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 39. Competencia. Las sanciones disciplinarias previstas en la presente ley las impondrán El Consejo de la Judicatura, salvo el caso de la destitución, la cual deberá ser impuesta por la Corte Suprema de Justicia o de la Asamblea Nacional, según se trate de un juez o un magistrado, por recomendación del Consejo de Carrera Judicial.

ARTÍCULO 40. Denuncias y quejas. Quienes tengan conocimiento de que un juez o magistrado ha cometido una falta de las establecidas en esta ley, podrán denunciarlo o plantear queja ante el Consejo de Carrera Judicial. Si es una institución pública o servidor público el que conoce la falta, la denuncia será obligatoria. En ambos casos se deberá hacer por escrito o verbalmente, ante cualquier autoridad judicial, con expresión de los hechos y de las circunstancias de que tuviere conocimiento o por los que resulte afectado. La denuncia o queja serán remitidos al consejo de la Judicatura para su trámite y resolución.

Todos los jueces o magistrados tienen derecho a ser oídos cuando sean objeto de denuncia y a ser notificados de las decisiones que tome el Consejo.

Todos los órganos de la administración de justicia que tengan conocimiento de que un juez o magistrado ha cometido una falta de las establecidas en esta ley, deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Carrera Judicial.

Las personas directamente perjudicadas por faltas cometidas por un juez o magistrado tendrán la calidad de parte en el respectivo procedimiento disciplinario.

La Inspectoría Judicial Disciplinaria ejercerá la función de investigación de las faltas, denuncias y quejas, de oficio o a petición de parte y en su caso formulará los requerimientos que procedan.

Artículo 41. Trámites. Recibida la denuncia, el Consejo de Carrera Judicial, decidirá sobre su admisibilidad. Si no la admite para su trámite, por tratarse de materia propia de la función de juzgar, la parte agraviada podrá interponer, dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, recurso de reposición.

Si le diere trámite a la denuncia, mandará a investigar, con el estricto límite de las funciones administrativas, a la Inspectoría Judicial Disciplinaria, si no fuese éste el órgano que la planteó, citará a las partes a una audiencia en un plazo que no exceda de quince días, previniéndolas a presentar sus pruebas en la misma.

En todos los casos la Inspectoría Judicial Disciplinaria será parte encargada de la investigación y de la acusación. Su actuación y la del Consejo de Carrera Judicial está referida a la revisión de los derechos, deberes y faltas en el servicio de los jueces y magistrados.

El denunciado deberá ser citado bajo apercibimiento de continuar el trámite en su rebeldía si dejare de comparecer sin justa causa. En la audiencia deberán estar por lo menos tres miembros del Consejo; el defensor del magistrado o juez, si lo tuviere; la persona agraviada, los testigos y peritos si los hubiere y siempre un miembro de la Inspectoría Judicial Disciplinaria. La audiencia concluirá con la decisión del Consejo de Carrera Judicial.

... ..

Por ningún motivo se aceptará como denuncia o queja materia alguna que pretenda o merda en las decisiones procesales de los jueces o magistrados.

ARTÍCULO 42. Resolución. Si al inicio de la audiencia el juez o magistrado aceptare haber cometido la falta, El Consejo de Carrera Judicial resolverá sin más trámite.

Si no se diere este supuesto, continuará con el desarrollo de la audiencia, dando la palabra a las partes involucradas y recibiendo los medios de prueba que las mismas aporten o que haya acordado de oficio. El proceso se impulsará y actuará de oficio, y el Consejo pronunciará su fallo en el plazo de tres días.

Cuando la sanción a imponer sea la de destitución, El Consejo de Carrera Judicial enviará el expediente completo con su recomendación a la Corte Suprema de Justicia o a la Asamblea Nacional, según se trate de un juez o un magistrado de apelaciones o de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, para su resolución.

ARTÍCULO 43. Derecho de Apelación. Contra las resoluciones del Consejo de Carrera Judicial se podrá interponer recurso de apelación ante la respectiva autoridad nominadora del juez o magistrado. Sin embargo, la formación del expediente respectivo y las recomendaciones que correspondan, son atribuciones de la Inspectoría Judicial Disciplinaria y del Consejo de Carrera Judicial.

Artículo 44. Responsabilidad penal. Si del procedimiento disciplinario resultaren indicios de responsabilidad penal, el Consejo lo hará constar y certificará lo conducente al Ministerio Público.

Artículo 45. Plazo. Bajo responsabilidad de la Dirección de Inspectoría Judicial Disciplinaria, el procedimiento descrito no podrá durar más de un mes, contados desde que hubiere recibido la denuncia, salvo causa justificada.

TÍTULO VI

CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS

Artículo 46. Normas supletorias y complementarias. Los casos no previstos en esta ley y sus reglamentos, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración en el servicio público de justicia, la equidad, los convenios internacionales ratificados por Nicaragua, las leyes comunes y los Principios Generales del Derecho.

Artículo 47. Situación de los jueces actualmente en servicio. Al entrar en vigencia esta ley, los jueces titulares y los magistrados de salas de apelaciones o de tribunales de igual jerarquía, cualquiera que sea su categoría o grado, que en esa fecha ejerzan jurisdicción, continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta por doce meses, periodo que se les confiere para, si desean continuar en el cargo, cumplir los requisitos establecidos para ingresar a la Carrera Judicial.

La Inspectoría Judicial Disciplinaria practicará una evaluación del desempeño de los jueces y magistrados y los someterá a la consideración del Consejo de la Carrera Judicial para su ratificación en el puesto o su destitución, en caso de que proceda por incumplimiento de deberes en el ejercicio del cargo.

Artículo 48. La Corte Suprema de Justicia asignará una partida de su presupuesto para cubrir los costos de funcionamiento del Consejo de Carrera Judicial y establecerá partidas específicas para los concursos. La oficina de Inspectoría Judicial Disciplinaria y la Escuela Judicial quedarán, cuanto a las atribuciones que señala esta ley, supeditas al Consejo de la Carrera Judicial.

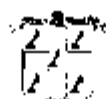
Artículo 49. Reglamentación. El reglamento general de esta ley deberá ser emitido a más tardar sesenta días después de su entrada en vigencia. Los reglamentos específicos aquí mencionados deberán ser aprobados a más tardar seis meses después de la promulgación del reglamento general.

Artículo 50. Derogatorias. Quedan derogadas todas las normas que

contravengan lo dispuesto en la presente ley

Artículo 51. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia inmediatamente a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Pase al Poder Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación



Este producto fue impreso
en los Talleres Gráficos Offset
de la Universidad Centroamericana (UCA)

La teoría de la división de los poderes de Estado es la que, desde la revolución francesa, ha constituido, junto a los derechos y garantías individuales, la piedra angular de la mayoría de las constituciones de los estados modernos. Se trata pues de que ningún poder del Estado ejerza control decisorio, o de cualquier otro tipo, sobre otro de igual naturaleza; Nicaragua no es la excepción, al menos desde el punto de vista formal, el propio texto constitucional señala esa separación y predica la independencia de unos respecto a otros. La independencia de los poderes públicos es vital para la construcción de cualquier Estado de Derecho, puede incluso que algunos poderes del Estado carezcan de independencia y autonomía, el Estado de Derecho tendrá plena vigencia si al menos el Poder Judicial es independiente y respetuoso de la Ley que le corresponde aplicar.

De esta manera, la consolidación de un Estado de Derecho pasa necesariamente por el fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de su sistema de justicia, un Poder Judicial al margen de cualquier influencia de los grupos y cúpulas de poder, independiente del poder ejecutivo, del legislativo, de los partidos políticos y de los grupos económicos; un Poder Judicial en el que los jueces y magistrados sólo deban obediencia a la Constitución y a la ley, un sistema en el que las decisiones sean estrictamente jurídicas (no políticas) y en el que los jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos puedan, de acuerdo con sus propias capacidades y méritos, optar a mejores condiciones de trabajo. Todos estos elementos son las pinceladas que trazan la "Imagen de la justicia", a medida que nos alejamos de ellos vamos dibujando una justicia cada vez más difusa, una justicia presa de sí misma.

Los autores

